



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
“PEDRO RUIZ GALLO”**



**ESCUELA DE POSTGRADO  
DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA**

---

**PRECISIONES JURÍDICAS ALA EXCEPCIONALIDAD  
DE LA DEFENSA TÉCNICA LEGAL EN LOS  
PROCESOS POR FALTAS: CUANDO LA SOLUCIÓN  
DEL CONFLICTO LLEGA MEDIANTE CONCILIACIÓN**

**TESIS**

**PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTORA  
EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA**

**AUTORA:**

**Mg. VIOLETA VÁSQUEZ ROJAS**

**ASESOR:**

**Dr. LUIS HUMBERTO FALLA LAMADRID**

**LAMBAYEQUE –PERÚ  
2019**

**PRECISIONES JURÍDICAS ALA EXCEPCIONALIDAD DE LA DEFENSA TÉCNICA  
LEGAL EN LOS PROCESOS POR FALTAS: CUANDO LA SOLUCIÓN DEL  
CONFLICTO LLEGA MEDIANTE CONCILIACIÓN**

---

**Mg. Violeta VÁSQUEZ ROJAS**

**Tesista**

---

**Dr. Luis H. FALLA LAMADRID**

**Asesor de Tesis**

**Presentada a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”  
para optar el grado de DOCTORA EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA**

**Aprobado por:**

---

**Dr. José María BALCAZAR ZELADA**

**Presidente del Jurado Evaluador**

---

**Dr. Freddy W. HERNÁNDEZ RENGIFO**

**Secretario del Jurado Evaluador**

---

**Dr. Víctor R. ANACLETO GUERRERO**

**Vocal del Jurado Evaluador**

## ÍNDICE GENERAL

RESUMEN .....	9
ABSTRACT.....	10
INTRODUCCIÓN .....	11
CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO .....	13
1.1. UBICACIÓN .....	13
1.1.1. Ubicación Geográfica: .....	13
1.1.2. Ubicación Temporal: .....	13
1.2. SURGIMIENTO DEL PROBLEMA .....	13
1.2.1. Planteamiento del Problema. ....	14
1.2.2. Formulación del problema .....	19
1.2.3. Justificación .....	19
1.3. MANIFESTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA.....	20
1.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA.....	21
1.4.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS .....	21
1.4.2. OBJETIVOS .....	21
1.4.3. Área de Estudio – Ubicación Metodológica: .....	22
1.4.4. Delimitación de la Investigación: .....	22
1.4.5. Métodos y Técnicas aplicables para la ejecución de la Investigación Jurídica ....	22
Propuesta:.....	22
1.4.6. Población de Estudio.....	22
1.4.7. Muestra de Estudio .....	23
CAPITULO II: MARCO TEORICO .....	24
SUBCAPITULO I: LAS FALTAS .....	24
1. LAS FALTAS .....	24
1.1. ANTECEDENTES .....	24
1.2. CONCEPTO .....	25
1.3. DIFERENCIAS ENTRE DELITOS Y FALTAS .....	26
2. FALTAS TIPIFICADAS .....	26
2.1. FALTAS CONTRA LA PERSONA .....	26
2.2. FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO .....	28
2.3. FALTAS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES .....	29

2.4. FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA .....	30
2.5. FALTAS CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA .....	31
3. EL PROCESO POR FALTAS .....	32
3.1. TRAMITE DEL PROCESO .....	32
3.1.1. LA COMPETENCIA .....	32
3.1.2. LA DENUNCIA .....	33
3.2. INICIO DEL PROCESO .....	33
3.2.1. EN CASO DE DENUNCIA ESCRITA O VERBAL.....	33
3.2.2. LA CELEBRACIÓN INMEDIATA DE AUDIENCIA .....	34
3.2.3. LA CONCILIACIÓN DENTRO DEL PROCESO .....	34
3.2.4. EL JUZGAMIENTO .....	35
SUBCAPITULO II: LA CONCILIACION Y EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD .....	36
1. LA CONCILIACION .....	36
1.1. ANTECEDENTES.....	36
1.2. CONCEPTO DE CONCILIACION EN MATERIA PENAL .....	37
1.3. LA CONCILIACION Y EL ESTADO .....	39
2. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD .....	41
2.1. REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN .....	41
2.1.1. EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL IMPUTADO.....	41
2.1.2. LA REPARACION CIVIL.....	42
2.1.3. SUPUESTOS DE APLICACIÓN .....	42
3. DERECHO COMPARADO .....	44
3.1. Argentina.....	44
3.2. Colombia.....	44
3.3. México.....	45
3.4. Italia.....	45
SUBCAPITULO III: EL DERECHO DE DEFENSA Y LA DEFENSA TECNICA .....	46
1. EL DERECHO DE DEFENSA .....	46
1.1. CONCEPTO .....	46
1.2. REGULACION.....	48
2. TIPOS DE DEFENSA .....	48
2.1. DEFENSA MATERIAL .....	48
2.2. DEFENSA TECNICA.....	49

2.3. DEFENSA PROCESAL .....	49
3. EL DERECHO DE DEFENSA EFICAZ .....	51
4. DERECHOS QUE PROTEGE EL DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCESO PENAL. 54	
4.1. A que se le informe de sus derechos. ....	54
4.2. A que se le comunique la imputación en su contra. ....	54
4.3. A ser asistido por abogado defensor. ....	54
4.4. A tener un tiempo razonable para la defensa. ....	55
4.5. A ejercer su autodefensa. ....	55
4.6. A intervenir en la Actividad Probatoria. ....	55
4.7. El derecho a la no incriminación .....	56
5. AUTODEFENSA .....	58
5.1. CONCEPTO .....	58
CAPITULO III: RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO .....	60
1. ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.....	60
2. DISCUSION Y CONTRASTACION DE HIPÓTESIS .....	99
3. PRESENTACION DEL MODELO TEORICO .....	101
4. CONCLUSIONES .....	103
5. RECOMENDACIONES.....	103
6. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA .....	106

## **INDICE DE LAS TABLAS DE LA INVESTIGACION DE EXPEDIENTES**

TABLA N° 1: POBLACION SEGUN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 2° JUZGADO DE JLO, CONCILIADOS.....	62
TABLA N° 2: POBLACION SEGUN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 9° JUZGADO DE CHICLAYO, CONCILIADOS. ....	63
TABLA N° 3: POBLACION SEGUN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 2° JUZGADO DE JLO, DESISTIMIENTOS. ....	64
TABLA N° 4: POBLACION SEGUN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 9° JUZGADO DE CHICLAYO, DESISTIMIENTOS. ....	65
TABLA N° 5: POBLACION SEGUN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 2° JUZGADO DE JLO, CONCILIADOS-REPARACION CIVIL .....	66
TABLA N° 6: POBLACION SEGUN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 9° JUZGADO DE CHICLAYO, CONCILIACION-REPARACION CIVIL.....	67
TABLA N° 7: POBLACION SEGUN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 2° JUZGADO DE JLO, DESISTIMIENTOS .....	68
TABLA N° 8: POBLACION SEGUN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 9° JUZGADO DE CHICLAYO, DESISTIMIENTOS .....	69

## **INDICE DE LOS GRAFICOS DE LA INVESTIGACION DE LOS EXPEDIENTES**

Gráfico 1: .....	62
Gráfico 2: .....	63
Gráfico 3: .....	64
Gráfico 4: .....	65
Gráfico 5: .....	66
Gráfico 6: .....	67
Gráfico 7: .....	68
Gráfico 8: .....	69

## **INDICE DE CUADRO DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA**

CUADRO N° 1: CONCEPTO DE FALTAS .....	72
CUADRO N° 2: LA ESPECIALIDAD DEL PROCESO POR FALTAS .....	73
CUADRO N° 3: TIPOS DE SANCIONES .....	75
CUADRO N° 4: LAS SANCIONES Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES .....	76
CUADRO N° 5: EL PROCESO POR FALTAS Y SU CONGESTION PROCESAL .....	77
CUADRO N° 6: TIEMPO QUE DEMORA UN PROCESO POR FALTAS .....	78
CUADRO N° 7: FORMAS DE DAR POR CONCLUIDO UN PROCESO POR FALTAS .....	79
CUADRO N° 8: CONCEPTO DE CONCILIACION.....	80
CUADRO N° 9: MOMENTO PARA LA CONCILIACION .....	82
CUADRO N° 10: LA SOLICITUD DE CONCILIACION .....	83
CUADRO N° 11: LA DEFENSA.....	84
CUADRO N° 12: INTERESES DE LAS PARTES .....	85
CUADRO N° 13: LA AUTODEFENSA.....	86
CUADRO N° 14: COSTO.BENEFICIO DE LAS PARTES .....	87
CUADRO N° 15: LA DEFENSA TECNICA Y LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.....	88
CUADRO N° 16: AUDIENCIAS SIN DEFENSA TECNICA .....	89
CUADRO N° 17: EXCEPCIONALIDAD DE LA DEFENSA TECNICA EN ACCIONES DE POCA REPROCHABILIDAD.....	90
CUADRO N° 18: EXCEPCIONALIDAD DE LA DEFENSA TECNICA .....	91

## **INDICE DE GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA**

GRAFICO N° 1 .....	73
GRAFICO N° 2 .....	74
GRAFICO N° 3 .....	75
GRAFICO N° 4 .....	76
GRAFICO N° 5 .....	77

GRAFICO N° 6 .....	78
GRAFICO N° 7 .....	79
GRAFICO N° 8 .....	80
GRAFICO N° 9 .....	82
GRAFICO N° 10 .....	83
GRAFICO N° 11 .....	84
GRAFICO N° 12 .....	85
GRAFICO N° 13 .....	86
GRAFICO N° 14 .....	87
GRAFICO N° 15 .....	88
GRAFICO N° 16 .....	89
GRAFICO N° 17 .....	90
GRAFICO N° 18 .....	91



## RESUMEN

La presente tesis ha sido denominada como *“Precisiones jurídicas a la excepcionalidad de la defensa técnica legal en los procesos por faltas: cuando la solución del conflicto llega mediante conciliación”*, la misma que contó con un marco referencial que integró planteamientos teóricos como, antecedentes de las faltas, bases teóricas, concepto y los tipos de faltas tipificadas en nuestro código penal, el trámite del proceso, antecedentes de la conciliación, su concepto, los antecedentes y concepto del derecho de defensa, entre otros; además contó con la redacción de las normas que nuestro sistema jurídico nacional e internacional alberga respecto de los derechos de defensa, así como el derecho comparado en diversos países con respecto a la conciliación.

Se ha planteado como hipótesis *la supresión inicial y excepcional de la defensa técnico-legal en los procesos por faltas haya su sustento en la conclusión del proceso por conciliación de las partes, la mínima trascendencia del conflicto jurídico y en la vigencia plena del derecho de defensa de los justiciables (Chiclayo, 2015-2017)*. El objetivo general que se ha formulado es *Acreditar que supresión inicial y excepcional de la defensa técnico-legal en los procesos por faltas se encuentra sustentada en la conclusión del proceso por conciliación de las partes, la mínima trascendencia del conflicto jurídico y en la vigencia plena del derecho de defensa de los justiciables, según estudio de casos tramitados durante los años 2015 – 2017 en los Juzgados de Paz Letrado de la Ciudad de Chiclayo*.

En consecuencia, se hace indispensable una nueva perspectiva en la legislación peruana, específicamente en nuestro Código penal, en el sentido que se propone al final del presente estudio, cuyo alcance investigativo no pretende que se agote el tema, sino todo lo contrario que sirva para que se realicen muchos más trabajos de investigación y que se contribuya con una adecuada normatividad en relación a los procesos por faltas que se dan por terminadas mediante una conciliación.

Mg. Violeta VASQUEZ ROJAS

## **ABSTRACT**

This thesis has been called as "Legal requirements to the exceptionality of the legal defense in the processes for faults: when the solution of the conflict arrives through the conciliation", the same reference as a referential frame that integrated the theoretical expositions as, the background of the faults, the theoretical bases, the concept and the types of faults, typified in our penal code, the processing of the process, the background of the conciliation, its concept, the background and the concept of the right of defense, among others; In addition, he had the drafting of the rules that our national and international legal system refers to the rights of defense, as well as comparative law in several countries with respect to conciliation.

The initial and exceptional suppression of the technical-legal defense in the proceedings for faults, its conclusion in the conclusion of the process by conciliation of the parties, the minimum transcendence of the legal conflict and the full validity of the right of defense have been hypothesized of the defendants (Chiclayo, 2015-2017). The general objective that has been formulated is to Prove that the initial and exceptional depression of the legal technical defense in the processes by the faults is sustained in the conclusion of the process by the conciliation of the parts, the minimum transcendence of the legal conflict and the validity full of the rights of defense of the justiciable, according to the study of cases processed during the years 2015 - 2017 in the Justice Games of the City of Chiclayo.

As a result, a new perspective is indispensable in Peruvian legislation, specifically in our Criminal Code, in the sense that it is proposed at the end of the study, whose investigative scope does not mean that the subject is exhausted, but rather the opposite that serves to that many more research works are carried out and that they contribute with an adequate normativity in relation to the processes for faults that are terminated through a conciliation.

Mg. Violeta VASQUEZ ROJAS

## INTRODUCCIÓN

El proceso por falta es un proceso especial, donde se tipifican hechos que no constituyen delitos, debido a su mínima reprochabilidad frente a la sociedad, por ello ante la comisión de este tipo de hechos, cabe la posibilidad que se dé por concluido mediante un medio alternativo de solución de conflictos, como la conciliación, a fin de no llegar a sede jurisdiccional y que el proceso se vuelva más tedioso, una vez instalada la audiencia de conciliación, la norma exige la presencia de un abogado para el ejercicio de la defensa, generando muchas veces desmedro económico para las partes, debido a que los honorarios de los abogados podrían ser mayores a la cuantía del proceso, ello sin tomar en consideración que ante su ausencia no existiría posibilidad de afectación de los intereses de las partes, ya que se realizaría en presencia del juez quien como conocedor del Derecho, no permitiría la vulneración de los derechos de las partes.

Si bien la presencia de los abogados en las audiencias se da para garantizar la vigencia del derecho a la defensa, la ausencia de ellos ante la audiencia de casos que son de poca reprochabilidad en la sociedad, conocidos también como delitos de bagatela, donde no se estima que el daño sea proporcional al gasto económico en el que pudiera incurrir las partes, denotando brecha diferenciadora entre la teoría propuesta mediante la normativa ya regulada y las necesidades de las partes procesales.

El trabajo investigativo ha sido estructurado en tres capítulos claramente diferenciados, pero a la vez, relacionados entre sí. El primer capítulo referido al Análisis del Objeto de Estudio, en donde se abordan temas precisos sobre la ubicación temporal y geográfica del objeto de estudio, la manera cómo surge el problema, la manifestación y características del problema, así como aspectos metodológicos como la formulación de la hipótesis debidamente contrastada, a través del cumplimiento de los diversos objetivos, tanto general, como específicos, y la utilización de métodos y técnicas empleadas en el desarrollo de toda la investigación.

El segundo capítulo de la investigación corresponde al Marco Teórico, estructurado en tres sub capítulos, el primero que aborda el estudio de los procesos de faltas; el segundo subcapítulo estudia el tema de la conciliación y el tercer subcapítulo estudia el tema del derecho de defensa.

Finalmente, el último capítulo lo conforma el análisis y discusión de los resultados sobre los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, así como también de los expedientes donde se dilucidaron casos referentes a faltas, datos que fueron tabulados y que demuestran la cantidad de casos que se presentan y que resuelven mediante conciliación, tabulándose dicha información en cuadros y gráficos estadísticos, los mismos que fueron sometidos a su respectivo análisis y discusión de los

resultados expuestos, todo ello con la finalidad de contrastar la hipótesis formulada y dar sustento a las conclusiones y recomendaciones formuladas; las cuales se ponen en consideración de la comunidad jurídica, local y nacional, para las críticas a que hubieran lugar, expresando de antemano que el presente trabajo de investigación no pretende ser un tema que agote el debate sino que por el contrario, sirva para que incentive a futuras investigaciones sobre el mismo tema a fin de profundizarlo e incluso mejorarlo.

Lambayeque, Marzo del 2019

Mg. VIOLETA VASQUEZ ROJAS  
TESISTA

## **CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO**

### **1.1. UBICACIÓN**

#### **1.1.1. Ubicación Geográfica:**

El objeto de estudio de la presente investigación se localiza en la problemática que sucede a nivel nacional especialmente en el Distrito Judicial de Lambayeque, en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, específicamente en el Distrito de José Leonardo Ortiz, de la Provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, se cuenta con varios órganos jurisdiccionales, entre ellos, El Juzgado de Paz Letrado Especializado en Faltas, con competencia jurisdiccional para conocer los procesos de Faltas del Distrito de José Leonardo Ortiz, como del Distrito de Picsi.

Acerca de las precisiones jurídicas a la excepcionalidad de la defensa técnica legal en los procesos de faltas: cuando la solución del conflicto llega mediante conciliación, es decir, no resulta necesario la presencia de un abogado donde se ventilan delitos de bagatela, con la finalidad de brindar con mayor prontitud la solución al conflicto.

Taxativamente hablando, la presente investigación se desarrollará en el Distrito Judicial de Lambayeque en la ciudad de Chiclayo, para comprender el grado de conocimiento de la comunidad jurídica sobre la conciliación en los procesos de faltas.

#### **1.1.2. Ubicación Temporal:**

El objeto de estudio de la presente investigación se ubica en el actuar de los operadores de justicia, específicamente en el Distrito Judicial de Lambayeque, en la ciudad de Chiclayo, durante el período comprendido entre los años 2015 a 2017.

### **1.2. SURGIMIENTO DEL PROBLEMA**

El tema a investigar guarda relación con la determinación de los supuestos de hecho y de Derecho que surgen a partir de un proceso por faltas, regulado en nuestro ordenamiento jurídico penal, en el Libro III del Código Penal de 1991, donde podemos encontrar tipificadas las faltas contra la persona, contra el patrimonio, contra las buenas costumbres, contra la seguridad pública y contra la tranquilidad pública; cuyo medio alternativo de solución de conflicto vendría a ser la conciliación.

Pero cuyo medio de solución, puede devenir en poco favorecedora para las partes del litigio, en cuanto a lo referente a la necesidad de la presencia de un defensor técnico, debido

a que estamos tratando procesos cuya cuantía no superaría el mínimo vital, el costo beneficio para los justiciables(denunciante y denunciado) no existiría, debido a los gastos ocasionados por los honorarios de los abogados, ello para ambas partes.

Por lo cual, resultaría factible establecer la excepcionalidad de la exigencia de la defensa técnica en los procesos por faltas, ya que si en los lugares lejanos o no urbanos, ya sean estos, rurales, campesinos o nativos por poner un ejemplo, legalmente no se le es exigible la presencia del abogado, lugares en donde el nivel cultural o educativo es mucho menor que en las ciudades o zonas urbanas; Con mayor razón se debe permitir que los Juzgados de Paz Letrado, puedan llevar a cabo las audiencias de juicio sin presencia de abogado en los casos en que las partes acceden a una acuerdo conciliatorio. Más aún si el nivel cultural o educativo es mayor y por ende las partes procesales estarían en condiciones de poder ejercer su propia defensa, proponiendo su fórmula conciliatoria.

De lo anterior se deduce que el tema propuesto presenta una importante brecha entre la realidad y el Derecho, el cual no ha ido a la par de los nuevos cambios sociales surgidos a partir de los crecientes cambios, los mismos que han dado lugar a nuevas situaciones jurídicas producto del creciente número de opiniones que se refieren a las faltas en el proceso penal, lo que ha motivado a que el Legislador tenga un rol de omisión o de dejadez frente a dicha realidad configuradora de las formas de conclusión del proceso penal de faltas.

Así que, dentro de la temática a desarrollar se logra advertir la existencia de un sinnúmero de problemas que tenemos a bien describir, en el apartado que sigue, para una mejor comprensión de la realidad problemática expuesta.

### **1.2.1. Planteamiento del Problema.**

Nuestra realidad judicial, especialmente en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, específicamente en el Distrito de José Leonardo Ortiz, de la Provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, se cuenta con varios órganos jurisdiccionales, entre ellos, El Juzgado de Paz Letrado Especializado en Faltas, con competencia jurisdiccional para conocer los procesos de Faltas del Distrito de José Leonardo Ortiz, como del Distrito de Picsi.

Los procesos de faltas se encuentran regulados en el Libro Tercero del Código Penal Peruano publicado mediante Decreto Legislativo N° 635 de fecha ocho de Abril del año mil novecientos noventa y uno. En donde se han recogido hechos tipificados como Faltas.

Entendiéndose como Faltas, a aquellos hechos con consecuencias jurídicas, empero cuya índole penal resulta de mínima trascendencia jurídica, por lo que también son denominados, delitos de bagatela, (por cuanto la trasgresión jurídica es mínima tanto en el quantum de la lesión, en el monto o en el perjuicio causado a la sociedad o al Estado); Es por ello que las Faltas están tipificadas en los Artículos 440° al 452° del Código acotado.

En el proceso de Faltas se ha establecido que la parte denunciada o imputada, para la instalación de audiencia de juicio debe estar acompañada de un abogado para el cumplimiento del Derecho a la Defensa, derecho constitucional, recogido en nuestra Carta Magna (Art 139 inciso 14) y en nuestro Código Procesal Penal (Art. 484 inciso 1). Es así que conforme a nuestra normativa procesal penal, resulta ser una exigencia para la parte procesal, imputada o denunciada, el ser asistido si o si en audiencia de juicio por abogado defensor o en su defecto por abogado público; Lo que corresponde al derecho de defensa técnica.

Ahora bien, la realidad que se observa en el procesos de Faltas en el distrito de José Leonardo Ortiz (Segundo Juzgado de Paz Letrado de José Leonardo Ortiz) se tiene que por motivo de que dichos procesos penales son de muy poca cuantía (no sobrepasa a una remuneración mínima vital- en el año 2016 resulta ser S/. 850.00); aunado al bajo nivel económico de las partes procesales, (en especial del denunciando, sin embargo el mismo motivo lo presenta el denunciante-agraviado), quienes se ven obligados a concurrir a la audiencia de juicio sin la asesoría de un abogado, por cuanto el honorario profesional del abogado no resulta accesible para ellos (sobre todo para la parte denunciada); Esta situación de bajo nivel económico afecta la subsistencia económica propia y el de su familia.

La parte denunciada así como la parte agraviada, alegan, el hecho de poder ejercer su propia defensa, ya que se trata de un asunto legal; así lo ven al proceso por faltas, un proceso sin mayor importancia; Debiendo tenerse presente en los procesos faltosos, el hecho de no haber riesgo, respecto a la sanción a imponerse en sentencia pueda ser una Pena de Privación de la libertad.

La situación jurídica (legal) de no poder instalar o de poder llevar a cabo la audiencia de juicio a causa de “falta de abogado” por la parte imputada, obliga al Juez a reprogramar el juzgamiento; Esto trae como consecuencia o efecto que, la ciudadanía, en especial los litigantes incursos en el proceso faltoso, sientan, insatisfacción (en

especial) la parte denunciante-agraviada, quien se muestra como desprovista de justicia, solo se vea realizados gastos sin encontrar una solución al conflicto denunciado.

Por otro lado, la parte denunciante (agraviada en estos procesos faltosos) tampoco puede costear los servicios de un abogado, estando en igual situación que la parte imputada- denunciada; Si bien para dicha parte procesal nuestro ordenamiento procesal penal, no lo es exigible; Sin embargo por el Principio Constitucional de Igualdad de armas, tiene el deseo de estar en igual condición la parte imputada, es decir, si el imputado asiste con abogado, también la parte agraviada deben poder tener la posibilidad de ser asistida por un abogado.

Los Jueces de Paz Letrados se encuentran en la facultad, otorgada por ley, para invitar a las partes procesales de un hecho faltosos, en primer lugar a que dicho conflicto judicial, sea resuelto mediante la conciliación (Art. 484 inciso 2 del Código Procesal Penal). Esto contribuye a una mejor administración de justicia y en aras de una armonía social.

Sin embargo este deber del magistrado se ve frustrado, porque hasta para el estadio procesal de invitar a las partes a la conciliación, les es exigible a la parte denunciada-imputada estar acompañado(asistido)de abogado (defensa técnica), sin embargo para la parte agraviada, al contrario no le es exigible.

Para un mejor control de la criminalidad en el Perú, se creó el Registro Nacional de delitos y faltas en las dependencias policiales 2016, base de datos 2015, en cuya parte descriptiva se señala:

La tasa de homicidios es reconocida a nivel internacional, entre otros indicadores, como el principal y más confiable indicador del grado de inseguridad ciudadana en un país, más aún, por su significativa correlación con otros delitos violentos, su importancia en la medición del riesgo de perder el derecho humano a la vida, y por su relevancia social.

Precisamente con el propósito de obtener información confiable y oportuna sobre la violencia y la criminalidad, y a partir de ello generar un sistema integrado de estadísticas de la criminalidad se constituyó, mediante Decreto Supremo N° 013-2013-MINJUS, el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), en apoyo al Consejo Nacional de Política Criminal, al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y a diversas instituciones del Estado. Las instituciones que conforman el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, son: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), quien lo preside, Poder Judicial (PJ), Ministerio Público (MP), Ministerio del



Interior (MININTER), Policía Nacional del Perú (PNP), Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).

La primera investigación sobre las Comisarías se inició el año 2010, donde se registró información del Programa de accidentes de tránsito. El año 2011 se ejecutó la Encuesta Nacional de Comisarías donde se recogió información de las principales características de infraestructura, equipamiento en las áreas de comunicación e informática, acciones de mantenimiento correctivo y preventivo, además que se recogió información de los accidentes de tránsito y sus principales características. En el año 2012, 2013 y 2014 respectivamente se ejecutaron el I, II y III CENSO NACIONAL DE COMISARÍAS. También se ejecutó el REGISTRO NACIONAL DE DELITOS EN LAS DEPENDENCIAS POLICIALES 2014 para obtener uno de los principales indicadores de criminalidad, como es la tasa de Homicidios en el Perú, en los años 2011 y 2013. (Visto en: [http://webinei.inei.gob.pe/anda\\_inei/index.php/catalog/280/study-description](http://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/280/study-description)).

Teniendo en cuenta los índices estadísticos y en vista de que los proceso por faltas pueden generar mayores cargas procesales, sumado a que un proceso por faltas puede llegar a su conclusión mediante conciliación, y son los mismos justiciables, quienes sustentarán sus pretensiones sin necesidad ni exigibilidad de un abogado, teniendo como mediador al juez, quien aplicará el derecho y lo hará respetar por conocerlo, además por la imparcialidad que debe transmitir, ello evitaría la reprogramación de audiencias en razón de la ausencia del abogado defensor, buscando la economía procesal y el costo-beneficio de las partes procesales, ello aunado a la descarga procesal que podría generar la pronta solución al conflicto.

Los jueces de Paz Letrado con especialidad de Faltas tienen a cargo el Juzgamiento (audiencia de juicio oral) del Proceso, puesto que la investigación de los hechos denunciados está a cargo de la Policía Nacional del Perú (Art. 440 inciso 6 del Código Penal). El hecho de no poder instalar las audiencias de juicio, por falta de presencia de abogado defensor para el imputado, y habiéndose ordenado la reprogramación de la audiencia de juicio, se presenta otra situación problemática, esto es, la parte denunciante, a la audiencia reprogramada (nueva fecha) ya no asiste o en su defecto termina por desistirse de la denuncia. Causando con ello un reproche en la sociedad (la ineficacia de la administración de justicia) y culpando al Poder Judicial de no habérseles hecho justicia.

Si bien es cierto, se podría dar una solución a la falta de abogado defensor para la parte imputada, con la asignación de un Defensor Público (abogado publico costado por el propio Estado) perteneciente al Ministerio de Justicia; Sin embargo acá también se presenta otra problemática, esto es, el escaso o reducido número de defensores públicos; Más aún, el Ministerio de Justicia no asigna Defensores Públicos para los casos de Faltas sino para los casos de Delitos; Es por ello, que los abogados de la Defensoría Pública, no logran alcanzarse o abastecerse ni siquiera para los procesos penales (delitos), por lo cual, no dan preferencia e incluso otorgan poca importancia a los procesos por faltas.

Habiendo explicado la problemática con respecto a la designación del defensor público por parte del Estado o privado a elección del propio litigante (por motivo económico de las partes procesales, justiciables).

Ahora bien es preciso indicar, que, en la mayoría de los procesos por Faltas los litigantes (denunciante-agraviado y denunciado-imputado), se tiene que se muestran predispuestos a una solución armoniosa del conflicto, hecho faltoso, esto es que aceptan en la mayoría de los casos, poder arribar a una Conciliación, la misma que resulta ser un medio alternativo de solución de conflicto, en donde tanto la parte denunciante como denunciada, cede una parte de sus pretensiones, con el ánimo de una solución pacífica y sobre todo eficaz, ya que la parte agraviada ve resarcida o satisfecha el agravio causado (reparado por el imputado).

Nuestra normatividad procesal penal, establece la exigencia del abogado o defensa técnica, se debe tener en cuenta, que en una Conciliación, son las propias partes procesales, quien propone la solución al conflicto faltoso. Con ello no se vulnera el derecho de defensa de ninguna de las partes procesales, ni del imputado como tampoco del agraviado.

Más aún si como se tiene claro y establecido los procesos faltosos, son infracciones a la Ley Penal de mínima transcendencia jurídica mínima lesividad al bien jurídico tutelado.

En los procesos de Faltas es donde se pueden establecer reglas para que los justiciables, sobretodo o principalmente el imputado, tomen conciencia de las consecuencias legales de la infracción legal y evitar en el futuro se generen problemas que conlleven a una violación del derecho de mayor transcendencia jurídica (mayor lesividad en los bienes jurídicos tutelados, como son el patrimonio o la integridad física, emocional, la salud), esto es, se generen hechos que sean subsumidos en tipos penales, como por ejemplo hurtos o robos o también lesiones leves o graves.

Por ello urge, se establezca la excepcionalidad en la no exigibilidad de la presencia de defensa técnica (abogado) en los procesos por faltas cuando las partes están dispuestas a dar solución al conflicto faltoso mediante la Conciliación; Esto es, para la conciliación judicial, la asistencia de defensa técnica sea opcional y no obligatoria; Mas aun sin ambas partes procesales (denunciante y denunciado) asisten a la audiencia de juicio sin abogados; con ello no se vulnera el Principio de Igualdad de armas entre los justiciables, permitiéndoseles hacer su propia defensa, mediante el instituto legal de la Autodefensa. La problemática formulada, contribuye a dar solución al conflicto penal de faltas, alcanzando una administración de justicia, oportuna, optima y eficaz.

### 1.2.2. Formulación del problema

¿De qué manera la supresión inicial y excepcional de la defensa técnico-legal en los procesos por faltas encuentra su sustento en la conclusión del proceso por conciliación de las partes, la mínima trascendencia del conflicto jurídico y en la vigencia plena del derecho de defensa de los justiciables (Chiclayo, 2015-2017)?

### 1.2.3. Justificación

El presente proyecto tiene por finalidad establecer Precisiones jurídicas a la excepcionalidad de la defensa técnica legal en los procesos de faltas, esto es, sea **opcional la presencia del abogado defensor en la parte imputada**, en los casos que sean resueltos mediante la conciliación judicial, en razón de que, mediante la conciliación, no se vulnera derecho fundamental alguno de las partes procesales (denunciante y denunciado); Mas aun si el acuerdo conciliatorio es arribado de conformidad con ambas partes procesales. La conciliación tiene como fin obtener una solución salomónica en donde, tanto la parte denunciante como denunciada, dan solución a su conflicto de intereses sin vulnerar sus derechos. Aunado a que los procesos de faltas son de mínima trascendencia, en donde no se tiene necesidad de argumentar rigurosamente defensa porque no está en riesgo (peligro) recibir como sanción la pena privativa de la libertad; Sin embargo los procesos de faltas permiten crear conciencia sobre las consecuencias jurídicas (sanciones) que se tiene por haberse cometido el hecho faltoso y de haber sido más grave, si tendrían una mayor pena, y su Juzgamiento ante el órgano jurisdiccional de los Juzgados Especializados en lo Penal.

Se permitirá obtener mayores resultados en producción y disminuir el sentimiento de insatisfacción (no encontrar justicia) por parte de la ciudadanía - víctima- de los hechos faltosos, que en su mayoría traen consigo la sensación de inseguridad ciudadana.

La presente tesis es importante porque contribuirá al fortalecimiento de la administración de justicia, al darse una solución oportuna, evitando los desistimientos tácitos, entendido como, desinterés en los resultados del proceso por la parte denunciante y/o víctima; dando mayor relevancia a la solución del conflicto suscitado entre las partes; así como la solución sea acorde con las necesidades de justicia de la población: Justicia oportuna y óptima.

### **1.3. MANIFESTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA:**

La investigación se manifiesta a través de la audiencia de conciliación en los procesos por faltas, donde se requiere de la defensa técnica, para hacer prevalecer el derecho de defensa de las partes, pudiendo esta situación causar desmedro económico a las partes, debido a los gastos ocasionados por los honorarios de los abogados, ello equiparándolo con la cuantía del proceso, sumado a ello tenemos que en los procesos por faltas se ventilan hechos que no constituyen delitos y su reprochabilidad es mínima, por ende podría existir la posibilidad que el ejercicio del derecho de defensa se ejerza mediante por las mismas partes procesales, es decir, la autodefensa a fin de no afectar los intereses de los litigantes en dicho proceso, teniendo en cuenta que el juez, como conocedor del derecho, es un tercero imparcial que resguardara el intereses de las partes y no permitirá la vulneración de algún derecho.

El problema de nuestra investigación se caracteriza por que actualmente en los procesos por faltas, se requiere a fin de que se instale la audiencia de juicio oral, en la cual, se tiene la facultad de invitar al denunciante y denunciado poder poner fin al proceso mediante un acuerdo conciliatorio, a que este si o si, presente la defensa técnica de la parte denunciada o imputada, presencia que muchas veces genera desmedro económico en los litigantes del proceso judicial (faltas), debido a la desproporcionalidad entre los honorarios de los abogados y la cuantía de la reparación civil que se fija en dichos procesos judiciales (faltas).

El problema que abordamos en la presente investigación también se caracteriza porque no sólo se produce en el Distrito Judicial de Lambayeque sino en todo el territorio nacional ya que la normatividad es de aplicación en general. Por tal motivo debe regularse las Precisiones jurídicas a la excepcionalidad de la defensa técnica legal en las audiencias de conciliación de los procesos por faltas llevados a cabo en los juzgados de Paz Letrado.

## **1.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA:**

### **1.4.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS:**

#### **1.4.1.1. Hipótesis:**

La supresión inicial y excepcional de la defensa técnico-legal en los procesos por faltas haya su sustento en la conclusión del proceso por conciliación de las partes, la mínima trascendencia del conflicto jurídico y en la vigencia plena del derecho de defensa de los justiciables (Chiclayo, 2015-2017)?

#### **1.4.1.2. Identificación de Variables:**

Las variables quedan expresadas en los siguientes términos:

- Los procesos por faltas, que se concluye mediante conciliación.
- La falta de defensa técnica, (autodefensa) afecta el derecho de defensa.
- La conciliación judicial puede prescindir de la defensa técnica legal.

### **1.4.2. OBJETIVOS**

#### **1.4.2.1. Objetivo General**

Acreditar que la supresión inicial y excepcional de la defensa técnico-legal en los procesos por faltas se encuentra sustentada en la conclusión del proceso por conciliación de las partes, la mínima trascendencia del conflicto jurídico y en la vigencia plena del derecho de defensa de los justiciables, según estudio de casos tramitados durante los años 2015 – 2017 en los Juzgados de Paz Letrado de la Ciudad de Chiclayo.

#### **1.4.2.2. Objetivos Específicos**

- a) Estudiar a la conciliación como medio alternativo de solución de conflicto en sede judicial, puede prescindir excepcionalmente de la obligatoriedad de la defensa técnica legal en la parte imputada.
- b) Precisar la naturaleza de los procesos de faltas, en atención a su mínima trascendencia jurídica, como presupuesto para que los justiciables ejerzan su autodefensa, en una conciliación judicial.
- c) Establecer que la autodefensa permite una defensa eficaz y no vulnera el derecho de defensa de la parte en una conciliación.
- d) Cuantificar la carga procesal representada en los procesos de faltas que no han llegado a ser concluidos en la etapa de conciliación en los Juzgados de Paz Letrado de la Ciudad de Chiclayo, durante los años 2015-2017.

#### **1.4.3. Área de Estudio – Ubicación Metodológica:**

- a. Área de estudio :** Dimensión Praxiológica
- b. Nivel Epistemológico:** Valoración.
- c. Tipo de Investigación:** Investigación Jurídico social explicativa.

#### **1.4.4. Delimitación de la Investigación:**

- a. Espacial:** En la ciudad de Chiclayo
- b. Temporal:** Tiempo necesario en analizar el tema bajo estudio.
- c. Cuantitativa:** Cantidad de casos por faltas que se hayan solucionado por medio de la conciliación.
- d. Cualitativa:** Nivel de valoración de las opiniones de los operadores del derecho en cuanto a la conciliación en los procesos de faltas.

#### **1.4.5. Métodos y Técnicas aplicables para la ejecución de la Investigación Jurídica**

##### **Propuesta:**

- A. Métodos:** Entre los métodos tenemos: Inductivo-deductivo, exegético, analítico, sintético, descriptivo-explicativo, dogmático.
- B. Técnicas:** Tenemos: la observación, bibliográficas, documental, fichaje y encuesta.

#### **1.4.6. Población de Estudio**

La aplicación de los métodos y técnicas de investigación señalados en el trabajo de investigación, nos permitirán recopilar la información necesaria para los efectos de contrastar la hipótesis planteada. Siendo así, por la naturaleza del estudio y los efectos de la propuesta a formular, la población estará conformada por todos aquellos aspectos que de una u otra manera permitan relacionar lo que constituye el eje central de la presente investigación, esto es, los procesos penales por faltas, en especial aquellos que han concluido mediante conciliación y por desistimiento.

La POBLACIÓN es el conjunto de individuos, objetos, situaciones, etc., de los que se desea conocer algo en una investigación; en tanto que la MUESTRA, es una pequeña porción representativa y adecuada de la población, a partir de la cual el investigador obtendrá datos, los mismos que son puntos de partida de las generalizaciones, se tiene que la población de estudio estará conformada por los Profesionales del derecho que ejercen en la Ciudad de Lambayeque y Chiclayo, ya sean como Jueces y Fiscales, o Abogados de la defensa, a quienes se procederá a aplicar encuestas innominadas y entrevistas (de ser el

caso), para obtener mayores datos estadísticos, conforme al sustento teórico a desarrollar en la investigación.

#### 1.4.7. Muestra de Estudio

La población de Abogados que ejercen en el Distrito Judicial de Lambayeque, específicamente en la Provincia de Chiclayo, oscila entre los 3589 Abogados, según los datos obtenidos del último proceso electoral en el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. En consecuencia, aplicando el porcentaje mínimo determinado por la mayoría de metodólogos como población muestral, se tiene una muestra de 62 personas, según la fórmula siguiente:

$$n = \frac{N \times Z_a^2 \times p \times q}{d^2 \times (N - 1) + Z_a^2 \times p \times q}$$

En donde:

N = tamaño de la población = 3589

Z = nivel de confianza = 0.5

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada = 0.5

Q = probabilidad de fracaso = 0.5

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) = 0.05

$$n = \frac{3589 \times (0.5)^2 \times (0.5)^2 \times (0.5)^2}{(0.05)^2 \times (3589 - 1) + (0.5)^2 \times (0.5)^2 \times (0.5)^2}$$

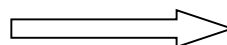
$$(0.05)^2 \times (3589 - 1) + (0.5)^2 \times (0.5)^2 \times (0.5)^2$$

$$n = \frac{3589 \times 0.15625}{(0.0025) \times (3588) + 0.015625}$$

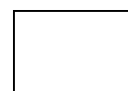
$$(0.0025) \times (3588) + 0.015625$$

$$n = \frac{560.0781}{8.985625}$$

$$= 62.33$$



$$n = 62$$



## **CAPITULO II: MARCO TEORICO**

### **SUBCAPITULO I: LAS FALTAS**

#### **1. LAS FALTAS**

##### **1.1. ANTECEDENTES**

Desde el Código Penal Napoleónico, el tratamiento común a las faltas era considerada como infracciones sancionables con diversas penas, denominadas en dicho código como “penas de policía”, y sancionándose conductas diversas, muchas de ellas sin relación alguna con los delitos –como el descuidar el mantenimiento de hornos, (...). De igual manera la legislación española de 1848 abordó el tema efectuando un catálogo de faltas sin mayor rigor científico; texto legislativo que ejerció gran influencia, no solo en nuestro código sustantivo de 1863, sino también en la legislación penal española de 1870 que tuvo larga data – hasta 1932-. No es necesario imaginarse entonces el destino que corrió el tratamiento de las faltas en nuestra legislación, muy acostumbrada a “importar” legislación extranjera. Nótese que la ubicación de las faltas en la norma incluso es común Libro Tercero, lo que revela que muy poco esfuerzos se han realizado para darle un tratamiento adecuado, pese a lo cual sin mayor sustento se ha procedido en los últimos años a su sobrecriminalización (MACHUCA, CARLOS, 2011, Pg. 19).

Así mismo el tratadista peruano BRAMONT, LUIS (1978), nos menciona que:

Mediante la ley del 26 de noviembre de 1853, durante el gobierno del presidente José Rufino Echenique, el congreso designó una comisión para la preparación de un código penal. Por dichos años el país ya vivía la efervescencia de las ideas liberales como producto de las revoluciones europeas de primera mitad del siglo XIX. El código penal peruano de 1863, como lo señala el autor, citando a BASADRE, es el primer Código hecho y escrito en Sudamérica, con fuerte influencia española como ya precisamos. El código estaba dividido en tres libros. El primero “de los delitos, de los delincuentes y de las penas en general”, el segundo “de las diversas especies de delitos” y el tercero “de las faltas y sus penas” (Pg. 125-126).

Se concluye que el desarrollo de la normativa que regula el tratamiento de las faltas en nuestro ordenamiento jurídico, si bien muchas de ellas influenciadas por normas extranjeras, ello ha sido un gran aporte para su evolución y perfeccionamiento en el tiempo, permitiendo



un considerable manejo del tema, pero también una necesidad de adaptarlos a la realidades sociales en las que vivimos.

## 1.2. CONCEPTO

Refiriéndose al concepto de las faltas en nuestro ordenamiento, el jurista peruano CHUNGA, WALTER (2009), indica que:

Nuestro ordenamiento penal se ocupa de las mismas en el Libro Tercero del Código Penal de 1991, se afilia – siguiendo el sistema español - al sistema bipartido de infracciones penales al reconocer como tales a los delitos y faltas. Este criterio adoptado por el legislador peruano se encuentra traducido en el artículo 11° del Código Penal Peruano que indica “Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley” (pg. 7).

Debemos tener en cuenta que el concepto más cercano es el mencionado por JIMÉNEZ DE ASÚA, LUIS (1996), citando a DORADO, PEDRO, señalando que: La falta no es otra cosa que el delito venial, y, por consiguiente, entre ella y el delito propiamente dicho, no hay diferencia cualitativa, como se pretende sino meramente cuantitativa (pg. 125).

Del mismo modo SAN MARTIN, CESAR (2006), afirma:

Las faltas son simples injustos menores en relación con los delitos; no hay entre ambas diferencias cualitativas, pues sus elementos son exactamente iguales, pero como quiera que las faltas conciernen sanciones más leves, y están referidas a vulneraciones a bienes jurídicos, de menor intensidad, es del caso, tratarlas distintamente en función a la simple diferencia cuantitativa que existen entre ellos (pg. 126).

Las faltas son aquellos actos ilícitos penales que lesionan los derechos personales, patrimoniales y otros pero que debido a su menor lesividad de bienes jurídicos no constituyen delitos y si bien existe gran identidad entre los delitos y las faltas, es decir no hay diferencia cualitativa, la diferencia se basa en criterios cuantitativos, las faltas son conductas menos lesivas de bienes jurídicamente protegidos, por lo tanto, el criterio de distinción entre delitos y faltas obedece a la mayor o menor gravedad de las infracciones penales, las faltas implicaran una menor gravedad en relación a los delitos, es decir, entre el delito y la falta existe una diferencia cuantitativa, mas no cualitativa, pues los elementos del delito y

la falta son exactamente iguales.En:

(<http://derechopenalperu.blogspot.pe/2008/12/las-faltas-contras-las-buenascostumbres.html>).

Llegando a la conclusión que las faltas son aquellas acciones u omisiones que están penadas por la ley, pero cuya gravedad del daño, no amerita ser sancionable mediante penas

tales como la de los delitos, imponiendo a estas las sanciones mediante multas, penas en correspondencia a la reprochabilidad del hecho considerado como falta.

### **1.3. DIFERENCIAS ENTRE DELITOS Y FALTAS**

En la doctrina se distinguen dos sistemas de clasificación de las infracciones punibles. La primera, de naturaleza tripartita, que distingue entre crímenes, delitos y contravenciones y, la segunda, que reconoce una bifurcación entre delitos y contravenciones (faltas), así el jurista y catedrático español CUELLO, EUGENIO (1973), nos dice que:

Si bien históricamente la primera tenía mayores antecedentes; la segunda tiene la preferencia de la opinión especializada. En el primer caso, los crímenes se definen como aquellas infracciones que lesionan los derechos naturales como vida y la libertad; los delitos en cambio, pretenden proteger los derechos originados en el contrato social, tales como la propiedad y, finalmente, las contravenciones, que suponen infracciones a las disposiciones y reglamentos de policía. En el segundo caso, en la división bipartita, la distinción entre crímenes y delitos se desvanece en ausencia de fundamento substantivo (pg. 261).

El catedrático peruano GOMEZ, GONZALO (2005), nos señala que:

La diferencia, por tanto, se reduce a los niveles de reprochabilidad social del acto ilícito. Así, descriptivamente, podríamos indicar que falta es toda acción que, sin revestir la gravedad que se exige a los delitos, importa una alteración del orden público, de la moralidad, las buenas costumbres o un atentado a la seguridad de las personas o de sus bienes debidamente descritas y calificadas como tales por la ley (pg. 256).

En síntesis, las diferencia entre los delitos y las faltas, vendría a ser el grado de reprochabilidad de uno y otro, ello debido al daño causado a la víctima, al patrimonio, a las buenas costumbres, etc., según los tipos de faltas existentes en la norma,

## **2. FALTAS TIPIFICADAS**

### **2.1. FALTAS CONTRA LA PERSONA**

En el caso de las faltas contra la persona, nos encontramos ante un accionar calificado por la ley en razón a su gravedad. Por ello, el artículo 441 del código penal establece en primer lugar las denominadas lesiones dolosas o culposas. En el caso de las lesiones dolosas para ser calificadas como faltas no deben exceder de los 10 días de asistencia o descanso (incapacidad física) puesto que la persona se encuentra impedida de valerse por sí misma o de desempeñar sus actividades habituales (MACHUCA, CARLOS, 2011, pg. 29).

En cuanto a las faltas contra la persona y al bien jurídico protegido por nuestro ordenamiento normativo, el jurista argentino FONTAN, CARLOS (1995), nos hace mención que:

Es obvio que el bien jurídico protegido en estos casos es la integridad física entendido como la integridad interna y la externa. Por ello, la norma no solo sanciona la agresión física sino la psicológica; tal es así que, algunos autores consideran que ambos conceptos deben entenderse como “la salud personal o individual” (Pg. 97 y 98).

En nuestro ordenamiento penal, lo encontramos tipificado en el Libro III, título II Faltas contra la persona Lesión dolosa y lesión culposa Artículo 441°:

El que, de cualquier manera, causa a otro una lesión dolosa que requiera hasta diez días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con prestación de servicio comunitario de cuarenta a sesenta jornadas, siempre que no concurren circunstancias o medios que den gravedad al hecho, en cuyo caso será considerado como delito. Se considera circunstancia agravante y se incrementará la prestación de servicios comunitarios a ochenta jornadas cuando la víctima sea menor de catorce años o la lesión se produzca como consecuencia de un hecho de violencia familiar, o el agente sea el tutor, guardador o responsable de aquel. Cuando la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta quince días de incapacidad, la pena será de sesenta a ciento veinte días-multa.

Así mismo la norma estipula los tipos de faltas contra la persona que pueden ser reprimidas, entre ellas:

#### Maltrato

**Artículo 442°.-** El que maltrata de obra a otro, sin causarle lesión, será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a veinte jornadas. Cuando el agente es cónyuge o concubino la pena será de prestación de servicio comunitario de veinte a treinta jornadas o de treinta a sesenta días-multa.

#### Agresión sin daño

**Artículo 443°.-** El que arroja a otro, objetos de cualquier clase, sin causarle daño, será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a quince jornadas.

Podemos llegar a la conclusión que las faltas contra la persona busca la protección de la integridad de las personas cuya reprochabilidad es menor debido al impacto del daño en la persona víctima de las acciones u omisiones de un agresor, y que dichas agresiones pueden ser tanto físicas como psicológicas.

## 2.2. FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO

En el código penal peruano, lo encontramos tipificado en el Título III Faltas contra el patrimonio, donde se encuentran tipificados faltas como: hurto simple y daño, protección de señales satelitales encriptadas, Hurto famélico, Usurpación breve, Ingreso de animales en inmueble ajeno, Organización o participación en juegos prohibidos, donde el código estipula lo siguiente:

### Hurto simple y daño

**Artículo 444°.-** *El que realiza cualquiera de las conductas previstas en los artículos 185° y 205°, cuando la acción recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase una remuneración mínima vital, será reprimido con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ciento veinte jornadas o con sesenta a ciento ochenta días multa, sin perjuicio de la obligación de restituir el bien sustraído o dañado. La misma pena se impone si el agente realiza la conducta prevista en el primer párrafo del artículo 189°-A, cuando la acción recae sobre ganado cuyo valor no sobrepasa una remuneración mínima vital.*

**Artículo 444°-A.-** *Protección de señales satelitales encriptadas: El que reciba una señal de satélite portadora de un programa originariamente codificada, a sabiendas que fue decodificada sin la autorización del distribuidor legal de la señal, será reprimido con cuarenta a ochenta jornadas de prestación de servicios a la comunidad o de diez a sesenta días-multa.*

### Hurto famélico

**Artículo 445°.-** *Será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a veinte jornadas: 1. El que se apodera, para su consumo inmediato, de comestibles o bebidas de escaso valor o en pequeña cantidad. 2. El que se hace servir alimentos o bebidas en un restaurante, con el designio de no pagar o sabiendo que no podía hacerlo.*

### Usurpación breve

**Artículo 446°.-** *El que penetra, por breve término, en terreno cercado, sin permiso del dueño, será reprimido con veinte a sesenta días- multa.*

### Ingreso de animales en inmueble ajeno

**Artículo 447°.-** *El encargado de la custodia de ganado o de animal doméstico que lo introduce o lo deja entrar en inmueble ajeno sin causar daño, no teniendo derecho o permiso para ello, será reprimido hasta con veinte días-multa.*

### Organización o participación en juegos prohibidos

**Artículo 448°.-** *El que organiza o participa en juegos prohibidos por la ley, será reprimido hasta con sesenta días-multa.*

De otro lado, el jurista peruano MACHUCA, CARLOS (2011), considera que:

El concepto de daño contra el patrimonio o contra la propiedad viene desde la época del código napoleónico. Actualmente, el patrimonio engloba mucho más que la simple propiedad de las cosas, puesto que el patrimonio comprende incluso la posesión, la tenencia o inclusive la custodia de bienes de terceros. El actuar ilícito contra el patrimonio tiene su elemento esencial en el “apoderamiento de bien total o parcialmente ajeno”, concepto que es recogido tangencialmente en los artículos 185 y 188 del código penal peruano. En estos casos el bien jurídico tutelado es la propiedad, posesión o tenencia de un bien sobre el cual se efectúa la acción o tentativa de despojo. En esencia, lo que se tutela es el patrimonio de cualquier ataque imaginable (pg. 30).

En conclusión podemos decir que, la tipificación de las faltas contra el patrimonio busca resguardar de todas las formas posibles todo lo que engloba el contenido de la propiedad.

## **2.3. FALTAS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES**

Con respecto a las faltas contra las buenas costumbres nuestro código penal, lo tipifica en el Título IV Faltas contra las buenas costumbres, donde se estipula sobre las Perturbación de la tranquilidad, en el Artículo 449°.- El que, en lugar público, perturba la tranquilidad de las personas o pone en peligro la seguridad propia o ajena, en estado de ebriedad o drogadicción, será reprimido hasta con sesenta días-multa.

### Otras faltas

**Artículo 450°.-** Será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a treinta jornadas: 1. El que, en lugar público, hace a un tercero proposiciones inmorales o deshonestas. 2. El que, en establecimientos públicos o en lugares abiertos al público, suministra bebidas alcohólicas o tabaco a menores de edad. 3. El que, en establecimientos públicos o en lugares abiertos al público, obsequia, vende o consume bebidas alcohólicas en los días u horas prohibidos, salvo disposición legal distinta. 4. El que destruye las plantas que adornan jardines, alamedas, parques y avenidas.

El catedrático y jurista peruano MACHUCA, CARLOS (2011), nos relata la realidad de esta tipificación:

Los atentados contra las buenas costumbres no se encuadran dentro de la tipología clásica, ya que son actos que (antes de infringir la ley penal) revelan ausencia de valores por quien

las ejecuta. La descripción de estas conductas efectuadas por el código penal, están en los artículos 449 y 450 (p, 32).

Somos de la opinión que si bien, esta falta está tipificada en nuestro código penal peruano, lo que se busca es resguardar el contenido de la norma sin infringirla, se debe tener en cuenta que incluso podrían ser sancionadas administrativamente, ya que las sanciones a imponerse son netamente de servicios comunitarios y quienes los hacen cumplir son los mismos Municipios.

## **2.4. FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA**

Las faltas contra la seguridad pública las encontramos tipificadas en el código penal peruano en su Título V Faltas contra la seguridad pública, en su Artículo 451°, donde se señala que:

Será reprimido con prestación de servicio comunitario de quince a treinta jornadas o hasta con ciento ochenta días-multa: 1. El que descuida la vigilancia que le corresponde sobre un insano mental, si la omisión constituye un peligro para el enfermo o para los demás; o no dar aviso a la autoridad cuando se sustraiga de su custodia. 2. El que, habiendo dejado escombros materiales u otros objetos o habiendo hecho pozos o excavaciones, en un lugar de tránsito público, omite las precauciones necesarias para prevenir a los transeúntes respecto a la existencia de un posible peligro. 3. El que, no obstante el requerimiento de la autoridad, descuida hacer la demolición o reparación de una construcción que amenaza ruina y constituye peligro para la seguridad. 4. El que, arbitrariamente, inutiliza el sistema de un grifo de agua contra incendio. 5. El que conduce vehículo o animal a excesiva velocidad, de modo que importe peligro para la seguridad pública o confía su conducción a un menor de edad o persona inexperta. 6. El que arroja basura a la calle o a un predio de propiedad ajena o la quema de manera que el humo ocasione molestias a las personas.

Para el catedrático y jurista peruano MACHUCA, CARLOS (2011), refiere que: Los actos contra la seguridad pública son todos aquellos que ponen en peligro el estado de “normalidad” de la sociedad. La seguridad pública es el conjunto de condiciones garantizadas por el derecho con fines de protección para eliminar amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas, garantizando una convivencia pacífica entre estas (p. 34).

El autor en mención nos expone el catálogo de las faltas contra la seguridad pública:

1. Descuido de vigilancia sobre insano mental cuando constituya peligro para sí mismo o para los demás.
2. Ausencia de precauciones en construcción

3. Descuido respecto a bienes ruidosos o en construcción
4. Inutilización de elementos de auxilio
5. Conducción de vehículo o animal a excesiva velocidad
6. Arrojo de basura (p. 35).

En resumen podemos decir que, las faltas que se cometen a la seguridad pública, son aquellas que vulneran el estado de normalidad que se encuentre en nuestra sociedad, cuyas actitudes están constituidas por descuidos en ciertas actividades que requieran de necesaria precaución y cuidado.

## **2.5. FALTAS CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA**

El código penal en su Libro III, Título VI Faltas contra la tranquilidad pública, en su Artículo 452°, donde se menciona que:

Será reprimido con prestación de servicio comunitario de veinte a cuarenta jornadas o con sesenta a noventa días-multa: 1. El que perturba levemente el orden en los actos, espectáculos, solemnidades o reuniones públicas. 2. El que perturba levemente la paz pública usando medios que puedan producir alarma. 3. El que de palabra, falta el respeto y consideración debidos a una autoridad sin ofenderla gravemente o el que desobedezca las órdenes que le dicte, siempre que no revista mayor importancia. 4. El que niega a la autoridad el auxilio que reclama para socorrer a un tercero en peligro, siempre que el emitente no corra riesgo personal. 5. El que oculta su nombre, estado civil o domicilio a la autoridad o funcionario público que lo interroga por razón de su cargo. 6. El que perturba a sus vecinos con discusiones, ruidos o molestias análogas. 7. El que infringe disposiciones sanitarias dictadas por la autoridad para la conducción de cadáveres y entierros.

Así mismo el jurista y catedrático peruano MACHUCA, CARLOS (2011), nos dice:

La tranquilidad pública, al igual que la seguridad pública, constituye una situación de hecho, mediante el cual el sujeto activo perturba el estado psicológico de la sociedad creando una sensación de inseguridad. Son aquellos actos que producen en el ánimo popular alguna molestia emotiva, de miedo o de dolor; por ello, el sujeto pasivo en estos casos también es la sociedad. La infracción penal se constituye por el actuar directo del agente. Salvo en un caso (inciso 4 del artículo 452° del Código Penal) (p. 452).

En conclusión podemos decir que, las faltas contra la tranquilidad pública están constituidas por aquellos actos que generan perturbación en la sociedad, que pueden ser mediante actos públicos, espectáculos, entre otros.

### **3. EL PROCESO POR FALTAS**

#### **3.1. TRÁMITE DEL PROCESO**

El trámite del proceso por faltas que se sigue lo describe el código procesal penal peruano, donde se estipula la competencia, como se procede con la denuncia, entre otras actuaciones necesarias dentro del proceso, como a continuación sigue:

##### **3.1.1. LA COMPETENCIA**

Con respecto a quien tiene competencia para ver este tipo de procesos, el código procesal penal en su Sección VII El proceso por faltas, en su artículo 482°, estipula que:

1. Los Jueces de Paz Letrados conocerán de los procesos por faltas.
2. Excepcionalmente, en los lugares donde no exista Juez de Paz Letrado, conocerán de este proceso los Jueces de Paz. Las respectivas Cortes Superiores fijarán anualmente los Juzgados de Paz que pueden conocer de los procesos por faltas.
3. El recurso de apelación contra las sentencias es de conocimiento del Juez Penal.

Por su parte el tratadista ROBLES, BONIFACIO, nos indica que:

Es competente para conocer este proceso en forma exclusiva el Juez de Paz Letrado, y en forma excepcional el juez de Paz cuando en el lugar no existe juez de Paz Letrado. Constituyen primera instancia siendo el Juez Penal Especializado la segunda y última instancia vía apelación. No interviene el Ministerio Público. Una de las innovaciones que trae el código es lo referente a la constitución en el proceso por el agraviado en calidad de querellante, es decir, en este proceso el actor civil se denomina querellante, y ese acto se produce necesariamente en el momento de denunciar la falta, el código de procedimientos penales del año 1940 no traía esta expresión sino, únicamente de agraviado.

En: ([http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4\\_uibd.nsf/2E33AFF6E924E64E05257FE6006FB928/\\$FILE/procesos-especiales-nuevo-sistema-procesal-penalperuano.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/2E33AFF6E924E64E05257FE6006FB928/$FILE/procesos-especiales-nuevo-sistema-procesal-penalperuano.pdf)).

Del mismo modo el catedrático y jurista peruano MACHUCA, CARLOS (2011), refiere que:

En el artículo 2, se indica que los jueces de paz letrados investigaran y juzgaran los procesos por faltas. Este artículo concordando con la segunda disposición final de la ley, permite la intervención de los jueces de paz solo de manera excepcional, cuando ha sido costumbre la intervención indistinta de ambos. Sin embargo, el cuestionamiento fundamental reside en el verbo rector “investigarán” –incurriendo en el mismo error de la norma en la que se inspiro- lo que ha sido objeto de cuestionamientos.



Como podemos observar, la norma estipula quien tiene competencia para llevar a cabo los procesos por faltas, dando opción donde no exista el juez de paz letrado, que tenga la competencia del juez de paz.

### **3.1.2. LA DENUNCIA**

Con respecto a la denuncia, el tratadista ROBLES, BONIFACIO, nos menciona que:

La denuncia se puede formular en forma verbal o escrita ante la policía o ante el Juez sea letrado o no, cuando la denuncia es formulada ante el juez éste, si considera que el hecho denunciado constituye falta y la acción no ha prescrito y requiere de una indagación previa, en cuyo caso, remite la denuncia y sus recaudos a la PNP para la investigación pertinente, quien, al concluir emitirá el informe policial correspondiente.

En:([http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4\\_uibd.nsf/2E33AFF6E924E64E05257FE6006FB928/\\$FILE/procesos-especiales-nuevo-sistema-procesal-penal-peruano.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/2E33AFF6E924E64E05257FE6006FB928/$FILE/procesos-especiales-nuevo-sistema-procesal-penal-peruano.pdf).)

En nuestro código procesal penal peruano, en su artículo 483.1.- indica que:

La persona ofendida por una falta puede denunciar su comisión ante la policía o dirigirse directamente al juez comunicando el hecho, constituyéndose en querellante particular. Así, la denuncia puede efectuarse de manera verbal mediante un acta a efectuarse en el local del juzgado, por escrito-cumpliendo las formalidades de la denuncia por ejercicio privado de la acción penal- o mediante denuncia policial, en cuyo caso la autoridad policial, remite lo actuado al juez para que este califique si es posible llevar a juicio al denunciado.

Como podemos observar, la facultad de poder denunciar un caso de faltas, sea del tipo que sea, puede ser iniciado mediante una denuncia realizada por la parte afectada, y que dicha denuncia puede hacerse a nivel policial o ante un juzgado.

## **3.2. INICIO DEL PROCESO**

### **3.2.1. EN CASO DE DENUNCIA ESCRITA O VERBAL**

Para el jurista y catedrático peruano MACHUCA, CARLOS (2011), haciendo un análisis del contenido normativo, nos dice que:

La norma contempla en su artículo 483.2. (En caso de denuncia por querellante particular y al enjuiciamiento) que, si el juez considera que el hecho constituye falta y la acción

penal no ha prescrito<sup>1</sup> (1 año), remitirá la denuncia a la policía a fin que efectué las investigaciones. En este caso el juez sustituye al fiscal y ordena una “indagación” a la policía, actos que en realidad equivalen a una investigación preparatoria, indagación que también puede ordenarse cuando la investigación policial remitida –en los casos de denuncia directa a la policía- se encuentre incompleta (ello porque la norma procesal no lo prohíbe) (p. 61).

Es así pues que debemos tener en cuenta que las denuncias pueden ser escritas o verbales, debiendo ser presentadas por la parte procesal que haya sido víctima de una afectación, pudiendo ser de forma personal o material.

### **3.2.2. LA CELEBRACIÓN INMEDIATA DE AUDIENCIA**

En cuanto a la celebración de las audiencias en los procesos por faltas, como nos menciona el jurista y catedrático peruano MACHUCA, CARLOS (2011):

La celebración de audiencia inmediata solo es posible generalmente, en las zonas urbanas y porque en algunos casos se cuentan con órganos jurisdiccionales (juzgados de paz letrados) en las comisarias del sector; sin embargo, en la mayoría de los casos es difícil que el agraviado e imputado logren reunirse ante el juez de manera inmediata (p. 63).

Llegando a la conclusión que si bien la norma especifica que la celebración de una audiencia deba ser inmediata, ello muchas veces no resulta ser aplicable a la realidad debido a las distancias geográficas de una y otra parte, además de la presencia o ausencia de un juez en determinadas zonas del país, donde el ejercicio de las potestades jurisdiccionales por parte de la instituciones públicas es de poca intervención.

### **3.2.3. LA CONCILIACIÓN DENTRO DEL PROCESO**

Así, el mismo autor, MACHUCA, CARLOS (2011), nos explica cómo se origina la conciliación dentro de un proceso penal por faltas y quien debe inducirlo con la finalidad de dar solución pronta y eficaz a los conflictos surgidos:

Esta es propiciada por el juzgado en la búsqueda de una solución al conflicto. De acuerdo con los artículos 64 y 185 inciso 1) de la ley orgánica del Poder Judicial, el Juez de Paz (esencialmente juez de conciliación) señala como facultad de los magistrados:

---

<sup>1</sup> Código Penal Art. 440 inc. 5 "La acción penal y la pena prescriben al año. En caso de reincidencia y habitualidad, prescriben a los dos años. Las faltas previstas en los artículos 441 y 444 prescriben a los tres años, salvo en los supuestos de reincidencia o habitualidad en cuyo caso es de aplicación el artículo 80. "

“propiciar la conciliación”. Sin embargo, no debemos perder de vista que la conciliación intra proceso adoptada por el código queda rezagada con respecto a las tendencias modernas de solución de conflictos en materia penal. Instada la conciliación, si fuese positiva, se homologa la conciliación o el acuerdo, dando por concluida las actuaciones, archivándose el proceso. Si esta fracasa debe proseguir el juicio (p. 64).

Se concluye que, quien debe inducir a la actividad conciliatoria previa a una audiencia, debe ser en este caso el Juez, quien por aceptación de las partes procesales, permiten que el proceso pueda abreviarse y llegar a una solución pronta, pero sobre todo ciñéndose a las normas que lo contemplan.

#### **3.2.4. EL JUZGAMIENTO**

Para MACHUCA, CARLOS (2011), existe una mecánica de juzgamiento, la cual comprende:

La mecánica del juzgamiento esencialmente comprende el interrogatorio ala parte denunciada, la declaración de la parte agraviada y la actuación de la prueba ofrecida por las partes procesales-tanto denunciada como denunciante- (generalmente testimonial y documental). En los casos de existir pericias, estas se actuaran con las pruebas testimoniales dejando la prueba documental para el final, ello teniendo en cuenta el orden que la norma establece para el juicio ordinario (artículo 375.1) (p. 65).

Finalmente podemos decir que, el juzgamiento dentro de los procesos por faltas que surgen en los juzgados, comprende el cumplimiento de ciertos parámetros que buscan dar con la verdad de los sucesos puestos a discusión.

## **SUBCAPITULO II: LA CONCILIACION Y EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD**

### **1. LA CONCILIACIÓN**

#### **1.1.ANTECEDENTES**

En nuestro país los antecedentes legislativos más cercanos de esta institución procesal la encontramos en el art. 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, promulgada por Decreto Ley No. 14605 (ya derogado), norma ésta que establecía que: « Los Jueces de Primera Instancia en lo Civil están facultados para ordenar un comparendo en cualquier estado del juicio y procurar por este medio la conciliación de las partes sobre todo el litigio o, de no ser posible, sobre algunos puntos concretos del mismo. Si la conciliación se realiza en forma total se sentará acta indicando con precisión el acuerdo a que lleguen las partes. Si sólo es parcial, se indicará en el acta los puntos en que las partes están de acuerdo y aquellos otros en que no están conformes y se dejan para la resolución judicial. Ratificadas las partes en el texto del acta, con asistencia de su respectivo abogado, procederán a firmarla y entonces los acuerdos que se hayan concertado serán exigibles en vía de ejecución de sentencia, formándose cuaderno separado cuando la conciliación es sólo parcial».

En la práctica las bondades de esta institución, reguladas por la normas anteriormente acotadas, eran desperdiciadas por jueces que argumentando recargadas labores ni siquiera se hacían presentes en esta diligencia o que haciendo un esfuerzo la presenciaban pero simplemente para dar cumplimiento a esta formalidad; no proponían ni mucho menos aplicaban fórmulas conciliatorias que permitan concluir el proceso en aras de paz, desperdiciándose así los beneficios de su buen uso. Muchas causas explican esta conducta: La formación del juez dentro de una concepción privatística que lo acostumbró a asumir un rol pasivo, dejando a las partes que se adueñen del proceso, por considerarlo un instrumento para hacer valer sus intereses particulares; la vigencia por largo tiempo de un Código Procesal que se concebía como un instrumento para la satisfacción de intereses individuales, particulares, por haber sido discutido y creado bajo la influencia de una concepción ideológica liberal; el temor del Juez actuante a ser denunciado por proponer fórmulas conciliatorias que podrían ser consideradas por las partes como adelanto de opinión, lo cual

le estaba totalmente prohibido; la vigencia hegemónica en nuestra Sociedad de una cultura adversarial, en aplicación de la cual las partes veían en el proceso un instrumento de solución indispensable, al cual deberían recurrir inevitablemente y realizar todo su recorrido; hasta por el más mínimo conflicto, cuyo costo no admitía justificación, estaban dispuestas las partes a efectuar todo el recorrido dramático del proceso, no importándoles si el costo en dinero y tiempo invertido les significaba un gasto mayor que el de la compensación obtenida. En: (TUDELA, ANDREE 2007, p.4, <https://es.scribd.com/document/387618/La-Conciliacion-en-el-Peru-Compilacion-Estudio-Introductorio>).

La introducción de la institución de conciliación en materia penal dentro de nuestro sistema para someter a delitos de bagatela, mínima culpabilidad, o delitos culposos, beneficiaría no solo a los protagonistas del conflicto penal, sino también, al Estado, en la medida que promueva la justicia restaurativa, celeridad en la solución del conflicto, y descongestión de la carga procesal. En el Perú actualmente los delitos se encuentran dentro del rubro de materias no conciliables. Los delitos de bagatela son aquellos que son considerados de escasa relevancia social; por lo que su indefectible procesamiento y judicialización provoca varios efectos, principalmente, la sobrecarga procesal, respuesta inoportuna al conflicto, la intervención recurrente del derecho procesal penal en desmedro de otros mecanismos de solución como es la conciliación. El derecho penal debe enfocarse, también, en la justicia restaurativa que tiene faz humana, en que la víctima perciba una reparación pronta, y permita la resocialización del infractor a partir de la conciencia del mal causado y subsanación de los efectos de su conducta.

Por ello, en ciertos delitos de bagatela, mínima culpabilidad, y delitos culposos, la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos es una opción útil no solo para los protagonistas del conflicto penal, sino también, para el propio Estado, dado que, permite el descongestionamiento procesal, consolida la justicia restaurativa, y empodera a las partes judiciales (denunciada y agraviada) para buscar solución consensual en un caso concreto.

## **1.2.CONCEPTO DE CONCILIACIÓN EN MATERIA PENAL**

Conceptualizando lo estipulado por la norma, el tratadista peruano GARCIA, CARMELO (2017), nos menciona en su artículo que:

La conciliación es uno de los mecanismos de solución de conflictos previsto en la legislación peruana (Ley N° 26872, Ley de conciliación, modificado por Decreto Legislativo N° 1070, y su Reglamento); sin embargo, en el ámbito penal, no está permitido sobre el

conflicto derivado del delito. A través de este escrito se pretende delinear, de manera tentativa, algunas pautas para el establecimiento de la conciliación preprocesal en el derecho penal peruano, particularmente, en delitos de bagatela. En: (<http://legis.pe/conciliacion-preprocesal-justicia-penal/>.)

Del mismo modo, la tratadista peruana VILELA, KARLA (2015), en cuanto a la conciliación nos expone lo siguiente: La conciliación es preprocesal cuando se realiza antes de iniciar un proceso judicial, y recibe su nombre porque se realiza fuera del ámbito judicial. (p. 118).

Así mismo la conciliación preprocesal se define en el Decreto Legislativo N° 1070, que modifica a la Ley N° 26872, Ley de conciliación, como: Una institución que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el cual las partes acuden ante un Centro de Conciliación Extrajudicial a fin que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto.

Precisando, el tratadista peruano GARCIA, CARMELO (2017), refiere que:

La conciliación penal se puede definir como un mecanismo por el cual las partes, comprendidas en un conflicto, cuyo origen es la perpetración de un delito (que en determinados supuestos de escasa reprochabilidad), llegan a una solución pacífica, en que se benefician mutuamente, siendo reparada la víctima y el sujeto activo perdonado en su pena.

Del mismo modo nos plantea la tratadista BECERRA, DAYANA (2009), que:

La conciliación en materia penal, debe considerarse como mecanismo de justicia restaurativa, que la hace más democrática en cuanto los ciudadanos sin estar investidos con la categoría de jueces pueden estar en posibilidad de resolver conflictos, y adicionalmente produce una transformación de la justicia retributiva, típica de un sistema inquisitivo, por una justicia, en que la víctima es reparada acorde con sus necesidades, y no con las necesidades que el juez cree que el ofendido pueda tener (p. 184).

A manera de conclusión, entendemos que la conciliación pre procesal se lleva a cabo en los procesos que donde se ventilen delitos de escasa reprochabilidad, permitan a las partes llegar a un acuerdo, con la finalidad de no llegar a una etapa judicial donde el proceso resulte más engorroso.

### **1.3. DELITOS DE BAGATELA**

La tratadista y catedrática española ARMENTA, TERESA (1991), nos comenta respecto al concepto de los delitos de bagatela, quien nos dice que: El concepto delito bagatela es de uso común por parte de la mayoría de la doctrina para referirse a hechos contemplados en las

leyes penales, cuya reprochabilidad es escasa y cuyo bien jurídico protegido se considera de menor relevancia (p. 23).

El jurista y procesalista argentino PALAZZO, FRANCESCO (2001), nos menciona que: Recuérdese que se trata de un hecho conforme al tipo pero de exigua relevancia (p. 436).

Así mismo el tratadista y procesalista penal peruano ORÉ, ARSENIO (2011), reitera que:

Con la denominación de delito de bagatela se alude a hechos delictuosos de escasa reprochabilidad. De ahí que el Código Procesal Penal vigente estableciera como parámetros: a) que se trate de delitos que ameriten una pena privativa de libertad no mayor de dos años, y b) que no hayan sido cometidos por funcionario público en ejercicio de su cargo (p. 407).

Por ello se concluye que, son considerados delitos de bagatela aquellos delitos cuya reprochabilidad penal es mínima y en el cual el bien jurídico protegido no tiene mayor relevancia en su protección, por ende aquel conflicto producido por el agente puede ser menguado y solucionado entre las partes involucradas con la finalidad de concluir prontamente con el conflicto, así como no llegar a sedes judiciales o evitar sobrecargas procesales innecesarias.

### **1.3. LA CONCILIACIÓN Y EL ESTADO**

El artículo 1 de la Constitución Política de 1993 establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

En relación con la dignidad de la persona humana, la doctrinaria y catedrática ZAVALA, MATILDE (2014) estableció que:

El hombre es eje y centro de todo sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente– su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (p. 5).

Las tratadistas colombianas BOLIVAR, CATALINA y COLORADO, GLORIA (2008), recalcando el contenido de nuestra dignidad humana:

Se debe garantizar de manera real y efectiva la solución de conflictos. Así, pues, la creación y aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en este caso la conciliación, pone en manos de los asociados y de los que cumplen funciones judiciales una herramienta de gran valor (p.27).

El jurista y catedrático madrileño GARCIA-PABLOS, ANTONIO (2006), nos menciona que:

La justicia penal para que recupere su faz humana, tiene que orientarse más al hombre que a la ley misma y resolver efectivamente sus problemas. Es utópica la resocialización del delincuente, si el propio sistema legal radicaliza el enfrentamiento y cierra el paso a toda posibilidad de diálogo entre los contendientes; si el infractor ni siquiera toma conciencia del mal causado porque la total ausencia del más elemental contacto con la víctima, impide una percepción personal y directa de los efectos del delito. La justicia penal no puede constituir el principal obstáculo para el reencuentro del delincuente y la víctima, en aquellos supuestos donde éste sea viable y positivo (p. 109).

El tratadista y catedrático colombiano GUERRERO, OSCAR (2004), es de la opinión que:

El Estado debe deshacerse de su tradicional persecución punitiva de carácter represiva, a cambio de una función reparadora. El infractor puede y debe tener la oportunidad de subsanar los efectos de su conducta llegando a un arreglo indemnizatorio con la víctima (p. 425).

GARCIA-PABLOS, ANTONIO (2006), considera que: La pena no soluciona los problemas de la víctima, ni es útil para el delincuente, y tiene un elevado coste social (p. 109).

El doctrinario peruano GARCIA, CARMELO (2017), nos plantea una propuesta referida al contenido de nuestra investigación:

Dejemos el mito de que “*no se someten a conciliación las controversias sobre hechos que se refieran a la comisión de delitos*”, y optemos por la implementación de conciliación preprocesal para la solución de conflictos penales en relación a delitos de bagatela; y la conciliación dentro del proceso, por ejemplo, sobre delitos culposos. En: (<http://legis.pe/conciliacion-preprocesal-justicia-penal/>).

La tratadista BECERRA, DAYANA (2009), recalca que:

Asimismo, esta justicia permite en mayor medida la resocialización del delincuente y el perdón por parte de la víctima, los cuales no se ven recíprocamente como verdugos, pues el indiciado ha sido beneficiado en su pena, la víctima reparada de acuerdo a sus necesidades, el conciliador ha sido gestor imparcial de un arreglo, que beneficia a las partes,



y no responde a la agresión que el procesado ejecutó, con otra agresión entendida esta como pena (p. 184).

Para los procesalistas y catedráticos peruanos PALACIOS, DARIO y MONGE, RUTH (2010), quienes nos mencionan los efectos que conducen el tener un exceso de procesos por delitos de bagatela, cuando:

Al presentarse denuncias masificadas por delitos de bagatela, estos provocan: a) la sobrecarga procesal, muchas veces en desmedro de la efectiva persecución y sanción de la criminalidad más grave; b) la falta de proporción de la pena, que resulta excesiva en la mayoría de los casos; c) el uso frecuente, hasta exagerado de derecho procesal penal (p. 97-98).

Siendo de la opinión que, el estado, tiene las posibilidades para reducir la carga procesal que significa el retraso de la tramitación de otros procesos con mayor relevancia, reducir mediante la conciliación, que faculta a las partes, solucionar de una forma rápida y siempre respetando los intereses de las partes involucradas, para que este tipo de procesos no tenga la necesidad de ventilarse en juzgados, evitando la demora y tardío resarcimiento del daño.

## **2. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD**

### **2.1. REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN**

#### **2.1.1. EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL IMPUTADO**

Para el jurista y catedrático peruano SANCHEZ, PABLO (1994), quien nos menciona que:

La abstención de la persecución penal no es una decisión que el Ministerio Público pueda adoptar de oficio. La ley exige el consentimiento expreso del imputado previo a la resolución del fiscal. A diferencia del supuesto establecido en el primer inciso de la ley, en los últimos dos el consentimiento va acompañado de la reparación del daño ocasionado o del compromiso en ese sentido (p. 151).

Concluyendo que, el consentimiento del imputado es necesario para la actuación del fiscal, ello siempre teniendo en cuenta que el imputado se comprometa al resarcimiento del daño que haya ocasionado en perjuicio de la otra parte, de forma tal que no exista la posibilidad de hacer más tedioso el proceso de dar solución al conflicto.

### **2.1.2. LA REPARACIÓN CIVIL**

En cuanto a la reparación civil, como requisito para hacer efectivo el Principio de oportunidad, el catedrático peruano ORE, ARSENIO (1999), nos recalca que:

Para los casos de mínima gravedad del delito o mínima culpabilidad del agente, inc. 2 y 3 del art. 2 del CPP., se requiere que el sujeto imputado efectué la reparación civil, es decir la restitución del bien o el pago de su valor, y la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados (p. 138).

Sobre este punto GALVEZ, TOMAS (1999), estima que en determinados casos de faltas de necesidad de pena y/o falta de merecimiento de la pena como los previstos en el artículo 2 del código procesal penal, el fiscal, una vez recibido el atestado policial, recibida la denuncia de parte con todos los recaudos, de los cuales se advierten suficientes indicios de la comisión del delito denunciado y de la responsabilidad penal del agente inculcado, o de concluida la investigación preliminar llevada a cabo en su despacho, puede abstenerse del ejercicio de la acción penal en contra del denunciado-quien a la vez habrá admitido su responsabilidad penal en los hechos y estar de acuerdo con dicha abstención (p. 209).

Finalmente concluimos que, el imputado debe mostrar indicios de querer resarcir el daño ocasionado a la parte afectada, teniendo en cuenta que existe la posibilidad del resarcimiento y que cuya reprochabilidad sea mínima, sumado a la innecesidad de investigaciones que determinen la culpabilidad del agente, puesto que para ello, el agente debe haber admitido su culpabilidad.

### **2.1.3. SUPUESTOS DE APLICACIÓN**

#### **a) Agente afectado por el delito**

Respecto a los supuestos en los que se aplicaría el principio de oportunidad, el catedrático peruano SANCHEZ, PABLO (1994), refiere que:

La ley exige que el agente haya sido afectado directa y gravemente por el delito que el mismo produjo. La afectación puede sobrevenir por daño grave recaído en la persona del autor o en otras vinculadas a él, o que por determinadas circunstancias, el infractor se siente directa o gravemente afectado.

Así mismo el tratadista peruano ORE, ARSENIO (1999), nos menciona que:

En este supuesto no se requiere la reparación del daño causado, dado que el delito ha ocasionado en esta persona una afectación grave de sus propios bienes jurídicos o de su entorno familiar mas intimo.

**b) Mínima gravedad del delito**

Dentro de los supuestos de aplicación tenemos también la mínima gravedad del delito, SANCHEZ, PABLO (1994)

El delito puede ser doloso o culposo, pero se requiere que la pena mínima no supere los dos años. Nos encontramos por ello ante una amplia gama de delitos debido a la tendencia humanitaria de nuestro código procesal penal (p. 158).

Por otra parte el tratadista peruano ORE, ARSENIO (1999), determina que:

La nimiedad de la infracción o la escasa importancia de la persecución penal desde el punto de vista objetivo están delimitadas por el quantum de la pena prevista para el delito de su extremo mínimo. Esta no debe ser mayor a dos años de pena privativa de la libertad, contrario sensu, el Ministerio Público, obligatoriamente dará inicio a la acción penal o continuara la ya iniciada (p. 141).

Concluyendo que, se requiere que el delito cometido por el agente en perjuicio del afectado o los afectados, sea de mínima reprochabilidad penal, lo que significaría que el bien jurídico afectado no contenga relevancia jurídica suficiente para ser catalogado como un delito de gravedad.

**c) Mínima culpabilidad del agente**

La tesista BENAVIDES, ROSA (2002), nos expone el contenido de la norma, donde se menciona que:

Este supuesto se encuentra normado en el inc. 3 del artículo 2 y está referido a la autoría o participación mínima del agente en la comisión del ilícito penal. Para determinar este supuesto se sugieren algunos criterios para poder valorar la escasa o mínima culpabilidad (p. 71).

SANCHEZ, PABLO (1994), nos señala que:

Se tomará en cuenta entre otros criterios, el móvil del autor, su carácter o personalidad criminal, sus relaciones personales y sociales, su comportamiento posterior al hecho (si ha reparado el daño, si está arrepentido, etc.), así como la forma de ejecución del hecho ilícito y sus consecuencias. Todo ello servirá para determinar el grado de culpabilidad del agente en la comisión del ilícito penal (p. 159).

Finalmente llegamos a la conclusión que, para la aplicación del principio de oportunidad, se necesita del cumplimiento de determinados requisitos que permiten hacer efectivo en determinados casos el principio de oportunidad, dentro de los cuales tenemos la afectación o el daño ocasionado por el agente, que el delito cometido sea de mínima gravedad y que por último que el agente posea una mínima culpabilidad en la realización del hecho delictivo.

### **3. DERECHO COMPARADO**

#### **3.1. Argentina**

Según la regulación normativa de Argentina, en su ley N° 26589, nos mencionan que:

Se establece con carácter obligatorio la mediación previa a todo proceso judicial, la que se regirá por las disposiciones de la presente ley. Este procedimiento promoverá la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia.

#### **3.2. Colombia**

La conciliación es uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos más importantes y desarrollados en Colombia. Los operadores de la conciliación, tales como, conciliadores, centros de conciliación e instituciones públicas y privadas que hacen parte del Sistema Nacional de Conciliación en Colombia aplican la conciliación todos los días; sin embargo, en la práctica cada uno de ellos adelanta el procedimiento conciliatorio de una manera diferente, pese a que las normas legales que rigen la conciliación son las mismas. Así, definido el procedimiento conciliatorio, en Colombia la conciliación extrajudicial en derecho está reglamentada en una serie de normas de obligatorio cumplimiento. Entre las normas más importantes tenemos la Ley 640 de 2001, la Ley 446 de 1998 y la Ley 23 de 1991. Es interesante y particularmente me llama la atención cómo a pesar de existir normas que rigen la materia, muchos de los conciliadores aplican la conciliación con procedimientos diferentes y muchas veces contradictorios entre sí. Lamentablemente en Colombia carecemos de estudios e investigaciones con cobertura nacional sobre el procedimiento conciliatorio donde se establezca si los conciliadores siguen procedimientos con unidad de criterios. El presente trabajo lo fundamento en parte en mi experiencia como docente en talleres con conciliadores de centros de conciliación y

funcionarios públicos sobre el procedimiento conciliatorio. Mi interés al escribir es aportar una ayuda a quienes desarrollan la conciliación en mi país y que las personas de otros países tengan la oportunidad de conocer cómo se desarrolla una conciliación en Colombia desde un punto de vista procedimental. (PEÑA, HARBEY, 2009, En: [https://www.mediate.com/articles/procedimiento\\_conc\\_en\\_colombia.cfm](https://www.mediate.com/articles/procedimiento_conc_en_colombia.cfm)).

### **3.3. México**

La mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, estarán a cargo del Centro Estatal, del Poder Judicial del Estado de México. Artículo 7.- El Centro Estatal tiene competencia dentro de los Distrito Judiciales del Poder Judicial del Estado de México, pudiendo contar con los centros regionales que se requieran en el interior de la misma entidad. Artículo 8.- El Centro Estatal tendrá autonomía técnica y operativa para facilitar la prevención o solución de los conflictos que le sean planteados en términos de esta Ley y su reglamento.

### **3.4. Italia**

Las normas de contenido conciliorio en el país de Italia:

Se basa en los principios de la informalidad, la velocidad y la confidencialidad y los principios establecidos en el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 17/01/2003, es decir, sin embargo, prohíbe la iniciativa de las actuaciones de oficio. El Reglamento contiene los detalles de dónde se coloca el procedimiento de conciliación, que es suspendido sólo por acuerdo de las acciones de los actos individuales, y cualquier otra disposición del Reglamento suspendido por acuerdo de las partes, el Reglamento tiene por objeto posibilidad de que el conciliador designado, si las partes así lo requieran, concluye el proceso con una moción en virtud del artículo 40, apartado 2 del Decreto Legislativo 05/03. En. (<http://blog.pucp.edu.pe/blog/conciliacion/2011/01/06/reglamento-de-la-conciliacion-italiana/>).

### **SUBCAPITULO III: EL DERECHO DE DEFENSA Y LA DEFENSA TECNICA**

#### **1. EL DERECHO DE DEFENSA**

##### **1.1. CONCEPTO**

Conceptualizando el derecho de defensa, el jurista peruano LANDA ARROYO (2010), nos menciona que:

La Constitución en su artículo 139, inciso 14, reconoce el Derecho de Defensa; en virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión (p. 285).

Así mismo, mencionando el contenido del derecho de defensa, el tratadista MESIA (2004), nos señala que:

El derecho de defensa consiste en la obligación de ser oído, asistido por un abogado de la elección del acusado o demandado, o en su defecto a contar con uno de oficio. Este derecho comprende la oportunidad de alegar y probar procesalmente los derechos o intereses, sin que pueda permitirse la resolución judicial inaudita parte, salvo que se trate de una incomparecencia voluntaria, expresa o tacita, o por una negligencia que es imputable a la parte. La intervención del abogado no constituye una simple formalidad. Su ausencia en juicio implica una infracción grave que conlleva a la nulidad e ineficacia de los actos procesales actuados sin su presencia (p. 105).

De otro lado, con respecto a los derechos que contiene en si el derecho de defensa, los tratadistas NOVAK y NAMHAS (2004), refieren que:

El derecho de defensa implica a su vez varios derechos, tales como: que el acusado cuente con un abogado defensor, que este pueda comunicarse libremente con su defendido sin interferencia ni censura y en forma confidencial (pudiendo ser vigilado visualmente por un funcionario que no escuchara la conversación), que sea informado de las razones de la detención, que sea informado oportunamente de la naturaleza de la acusación iniciada en su contra, que tenga acceso al expediente, archivos y documentos o las diligencias del proceso, que se disponga del tiempo y medios necesarios para preparar la defensa, que

cuenta con interprete o traductor si el inculpado no conoce el idioma del Tribunal, entre otros (p. 246).

El Tribunal Constitucional ha señalado, en la sentencia STC 06648-2006-HC/TC, fundamento 4, que la Constitución en su artículo 139 inciso 14 reconoce el derecho a la defensa; en virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.) no queden en estado de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos.

Así mismo, el jurista peruano BERNALES BALLESTEROS (1993), indica que:

El derecho de defensa es esencial en todo ordenamiento jurídico. Mediante este derecho se protege una parte medular del debido proceso. Las partes en juicio deben estar en la posibilidad jurídica y fáctica de ser debidamente citadas, oídas y vencidas mediante prueba evidente y eficiente. El derecho de defensa garantiza que ello sea así (p. 656).

En cuanto a la vigencia del derecho de defensa en un proceso, el tratadista CASTILLO CORDOVA (2006), quien considera que:

El derecho de defensa tiene vigencia plena a lo largo de todo el proceso, tal derecho de defensa se proyecta a todas las etapas y articulaciones que pudiera comprender el proceso, como el uso de los recursos impugnativos (p. 185).

Y por último el tratadista CARRUITERO LECCA (2006), no señala que:

El derecho a la defensa contradictoria, comprende el derecho de intervenir en el proceso aunque se vea afectada la situación de la persona, y que integra el derecho a hacer alegaciones, presidido por el principio de igualdad de las partes, y que tiene relación directa con el derecho a usar los medios de prueba que resulten pertinentes (p. 205).

Finalmente podemos llegar a la conclusión que, el derecho de defensa es aquel derecho que normativamente está protegido y que busca preservar el interés de las partes en un proceso, a fin de que no se vea vulnerado, otorgándoles la posibilidad que sean oídos para que expresen lo conveniente a fin de resguardar sus intereses, pudiendo ser esta de manera directa o mediante la representación de un abogado que ejerza la defensa técnica legal de las partes en un proceso.

## **1.2. REGULACIÓN**

El artículo 139°, inciso 14, de la Constitución Política del Perú de 1993, establece el principio de que toda persona no puede ser privada del derecho de defensa en ningún estado del proceso, esto incluye también el proceso por faltas.

El artículo 11°, inciso 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que toda persona acusada de un delito se le asegure todas las garantías necesarias para su defensa.

El artículo 14°, inciso 3, numeral d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, indica que toda persona tiene derecho a hallarse presente en un proceso, a defenderse y hacer asistida por un defensor de su elección, y si no tuviera defensor, el derecho que se le nombre un defensor de oficio.

El Artículo 8°, inciso 2, numeral d) y e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece, que durante el proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, al derecho del inculpado de ser asistido por un defensor de su elección o el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado.

Asimismo, el artículo 8°, inciso 2, numeral f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala, el derecho que tiene la defensa de interrogar a los peritos sobre la pericia realizada.

Se concluye que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra contemplado el derecho a la defensa, el cual permite que ninguna persona se vea privada de tal derecho en el desarrollo de algún proceso, garantizando de esta forma que no exista vulneración alguna a las partes procesales.

## **2. TIPOS DE DEFENSA**

### **2.1. DEFENSA MATERIAL**

Respecto a la defensa material, el tratadista FLORES, CARLOS (2009), nos señala que:

Esta se realiza por medio de las declaraciones que el imputado brinda en el proceso, pudiendo hacerlo cuantas veces quiera, siempre que sean pertinentes. Es la defensa material activa, pero también puede hacerlo pasivamente, cuando se abstiene de declarar. Por ello la declaración del imputado, más que un medio de prueba, es un medio de defensa. El fundamento de la defensa material la hallamos en el principio *hemotenetur se deteger*, que



significa que nadie puede ser obligado a obrar contra sí mismo. Nuestra Constitución establece que ninguna persona puede ser privada de ninguno de sus derechos sin ser previamente oída (Art. 11) y no puede ser obligada a declarar (Art. 12). De lo que se interpreta que ninguna pena se puede aplicar sin presencia del interesado, de quien las declaraciones no deben ser requeridas bajo juramento o promesa, u obtenidas mediante amenaza o haciendo uso de la fuerza. En: (<http://derechoprocesalpenalunivo.blogspot.pe/2009/05/ladefensa-material-y-la-defensa.html>).

En conclusión, la defensa material es aquella por la que las partes tienen el derecho de ser oídas, antes de que se les imponga una pena, así como de requerir su presencia para ello, incluso si decidiera abstenerse de otorgar declaraciones.

## **2.2. DEFENSA TÉCNICA**

Para el tratadista FLORES, CARLOS (2009), la defensa técnica es:

Es ejercida, generalmente, por un abogado y solo excepcionalmente se concede al propio imputado. Esta se ejerce mediante instancias, argumentaciones, alegatos u observaciones que se basan en normas de derecho sustantivo o procesal. Por ello, se exigen conocimientos jurídicos que el imputado, en la mayoría de casos carece. Sin esos conocimientos el imputado no se podría defender eficazmente, y la defensa no respondería a sus fines. En: (<http://derechoprocesalpenalunivo.blogspot.pe/2009/05/la-defensamaterial-y-la-defensa.html>).

Se concluye que la defensa técnica es ejercida generalmente por quien acredite ser abogado, y solo en casos excepcionales se le puede conceder esta facultad al propio imputado, para que guiado por el juez puede ejercer su propia defensa en los casos en los que la ausencia de un abogado no perjudique su ejercicio y goce del derecho de defensa.

## **2.3. DEFENSA PROCESAL**

En cuanto a la naturaleza del derecho de defensa el tratadista peruano CASTILLO CORDOVA (2009), nos menciona que:

El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio

de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudiera repercutir en la situación jurídica de laguna de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés. El Derecho de defensa garantiza, entre otras cosas, que una persona sometida a una investigación, sea de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentre en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses. Se conculca, por tanto cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para su defensa (p. 699).

Detallando el núcleo de la tutela judicial, que es donde se condensa el derecho a no sufrir de indefensión, el magistrado y catedrático español LOPEZ GUERRA (1994), nos refiere:

En el curso de un proceso, el núcleo de la tutela judicial se condensa en el derecho a no sufrir indefensión. La interdicción genérica de la indefensión quiere decir que forma parte del contenido del derecho a tener la oportunidad de defender las propias posiciones en todo proceso judicial que afecte a derechos o intereses propios, y en la interpretación del Tribunal Constitucional, supone también un mandato al legislador y al intérprete, mandato consistente en promover la defensa, en la medida de lo posible, mediante la correspondiente contradicción. Tal cosa implica establecer el emplazamiento personal a todos cuantos, como demandados o coadyuvantes, puedan ver sus derechos o intereses afectados en un proceso, siempre que ello resulte factible (p. 323).

El Tribunal Constitucional en la STC 1941-2002-AA/TC, refiriéndose a los alcances del derecho de defensa ha establecido que “El estado de indefensión opera en el momento en que, al atribuírsela la comisión de un acto u omisión antijurídicos, se le sanciona sin permitir ser oído o formular sus descargos, con las debidas garantías, situación que puede extenderse a lo largo de todas las etapas del proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones que se pueda promover”.

Así mismo el catedrático de derecho constitucional SALDAÑA, ELOY (2005), haciendo referencia a la doctrina estadounidense, señala que:

En el caso estadounidense, tanto doctrinaria como jurisprudencial, la dimensión procesal del debido proceso, relacionado con el derecho de defensa comprendería, entre otros, el derecho de contradecir o defendernos de una alegación (pretensión) exigida en contra de nuestros propios derechos, derecho de ofrecer, y actuar pruebas que sean pertinentes para acreditar las diferentes posiciones o pretensiones de las partes (p. 67).

Finalmente haciendo un análisis de los autores anteriormente mencionados, concluimos que, el derecho a la defensa es un derecho de naturaleza procesal, cuyo contenido está enmarcado en el contenido del derecho al debido proceso, ello en resguardo a los intereses de las partes intervinientes en un proceso, donde se busca que las partes presenten las pruebas pertinentes que acrediten su defensa y respalden sus intereses, derecho enmarcado también en los cuerpos normativos de contenido procesal.

### **3. EL DERECHO DE DEFENSA EFICAZ**

Respecto al derecho de defensa eficaz, el tratadista peruano HERNANDEZ, FREDDY (2012), indica que:

El derecho de defensa eficaz forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa, una defensa manifiestamente ineficaz, en lugar de defender los derechos del imputado, los vulnera, no tiene sentido, es como si no hubiera tenido una defensa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), interpretando los artículos 8º y 25º de la Convención Americana sobre derechos humanos, en el caso 11.298, de Reinaldo Figueroa Planchart Vs. República Bolivariana de Venezuela, de fecha 13 de abril de 2000, fundamento 87, reconoce que el debido proceso no puede estar limitada ni restringida a la fase final de un proceso penal. La Corte IDH, ante una solicitud de los Estados Unidos Mexicanos, el 1 de octubre de 1999, emitió la opinión consultiva OC-16/99, fundamentos 117 y 118, establece la defensa de los intereses del justiciable en forma efectiva.

Así mismo, tomando referencia casuística, el tratadista peruano NAKAZAKI, CESAR (2010), nos indica que:

En la sentencia del 30 de mayo de 1999, caso Castillo Petrucci y otros Vs. Estado Peruano”, fundamento 141, la Corte IDH reitera que en el proceso penal la persona tiene derecho a una defensa adecuada y que por lo tanto, constituye un estado de indefensión prohibido por el pacto de San José de Costa Rica llamada también Convención Americana sobre Derechos Humanos, una presencia o actuación de un defensor meramente formal (p,113).

Citando al autor mencionado líneas arriba, nos señala también que:

No basta que la defensa sea necesaria y obligatoria para que la garantía constitucional de la dimensión formal del derecho de defensa (defensa técnica) cumpla su finalidad en un

proceso penal; la defensa tiene que ser efectiva, lo que significa desarrollar una oposición, o respuesta, o antítesis, o contradicción, a la acción penal o a la pretensión punitiva. La negligencia, inactividad, la ignorancia en la ley, o el descuido del defensor, no justifica el estado de indefensión del imputado en el proceso penal (p, 111).

Haciendo referencia a las exigencias que contiene la defensa eficaz, el jurista O'DONNELL, DANIEL (1989), especifica los derechos que debe resguardar el derecho a la defensa eficaz, donde nos expone que:

La defensa eficaz exige que al imputado se le garantice en el proceso penal, entre otros, los siguientes derechos:

1. Derecho a ser asistido por un defensor de confianza o de oficio.
2. Derecho a un defensor con los conocimientos jurídicos y experiencia que exige el caso.
3. Derecho a presentar los argumentos que forman parte de la defensa técnica.

El Comité de Derecho Humanos ha reconocido que el derecho de todo acusado a disponer de los medios adecuados para la preparación de su defensa debe incluir el acceso a los documentos y demás pruebas que el acusado necesite para preparar su defensa (p, 175). Para la Comisión Interamericana, el derecho del acusado a una defensa adecuada es violada no solo por la negación del derecho a la asistencia jurídica o por trabas u obstáculos impuestos a la actuación del abogado defensor, sino también por el incumplimiento de parte de este de sus deberes profesionales. En un informe, la Comisión calificó la actuación de los abogados defensores de “inservible y más bien contraproducente”, subrayando entre otros defectos el reconocimiento implícito de los cargos imputados a los acusados y el no haberlos entrevistado antes del inicio del proceso. La doctrina de la Comisión no señala claramente las circunstancias que permiten responsabilizar al Estado por las deficiencias en la actuación de los defensores (p, 179).

El tratadista peruano HERNANDEZ, FREDDY (2012), nos señala que:

Asimismo, los Jueces, de conformidad con la Cuarta Disposición Final y Transitoria, están obligados a que los derechos que la Constitución reconoce, se interpreten de conformidad con la Declaración Universal de Derecho Humanos, Tratados y Acuerdos Internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos en que los Estados vulneran derechos Humanos, interpretan la Convención Americana sobre derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que es un tratado ratificado por el Perú, en donde está reconocido el derecho de

defensa. En:(<http://freddyhernandezrengifo.blogspot.pe/2012/09/el-derecho-de-defensa-y-la-defensa.html>).

Así mismo, en palabras del jurista peruano CASTILLO, LUIS (2009), tomando las referencias del tribunal constitucional, nos dice que:

El Tribunal Constitucional considera que el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos (p. 484).

El magistrado y tratadista peruano MESIA, CARLOS (2004), citando lo referido por el tribunal constitucional, nos menciona que:

El Tribunal Constitucional, en su sentencia recaída en el expediente N° 1941-2002AA/TC. Refiriéndose a los alcances del derecho de defensa, ha establecido que “el estado de indefensión opera en el momento en que, al atribuírsela la comisión de un acto u omisión antijurídicos, se le sanciona sin permitirle ser oído o formular sus descargos, con las debidas garantías, situación que puede extenderse a lo largo de todas las etapas del proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones que se puedan promover” (p. 105).

Y con respecto a la afectación que podría generar que la defensa no sea eficaz, el tratadista peruano HERNANDEZ, FREDDY (2012), nos señala que:

La vulneración al derecho de una defensa procesal eficaz afecta directamente al debido proceso sustancial. En: (<http://freddyhernandezrengifo.blogspot.pe/2012/09/el-derecho-dedefensa-y-la-defensa.html>.)

Finalmente, gracias a los aportes doctrinarios citados líneas arriba, podemos llegar a la conclusión que, es necesario que el ejercicio de la defensa técnica legal a favor de las partes involucradas en un proceso deba darse de forma eficaz, a fin de no afectar no solo sus intereses, sino también sus derechos; podríamos decir incluso que la defensa eficaz permite que el desarrollo de un proceso se dé respetando los criterios normativos necesario, para un sistema de justicia idóneo.

#### **4. DERECHOS QUE PROTEGE EL DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCESO PENAL.**

##### **4.1. A que se le informe de sus derechos.**

Por tanto se tiene que al detenido, al imputado, al investigado o acusado se le debe de informar de los derechos que le asisten como tal. Siendo así, el código señala que toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos.

##### **4.2. A que se le comunique la imputación en su contra.**

El detenido, investigado y acusado tiene derecho a que las autoridades competentes les comuniquen la imputación que recae en su contra. El Art. 71.2 del nuevo código prescribe que “Los jueces, los fiscales o la policía nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible, que tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda.

En el caso del detenido el Art. 139 Inc.15) de la constitución prescribe que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las razones o causas de su detención. La causa de la detención debe consistir en una comunicación clara, precisa y oportuna.

##### **4.3. A ser asistido por abogado defensor.**

El imputado tiene derecho a ser asistido por un abogado defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, Desde que es citado o detenido por la autoridad. Ello no quiere decir que el imputado siempre va a ser asistido por un abogado, sino solo cuando los altos fines de la justicia lo requieran o cuando el propio imputado lo solicite y la ley se lo permita.

El derecho a ser asistido por un abogado defensor implica que este debe actuar en los hechos que se imputan y en sus consecuencias jurídicas. Su participación tiende a que su defendido sea investigado y juzgado con las garantías de un debido proceso y que en la tramitación de este se expidan las resoluciones judiciales pertinentes. El abogado defensor no solo ayuda con sus conocimientos jurídicos especializados en la resolución del conflicto sino que también representa al imputado a lo largo de todo el proceso, salvo en el caso que la ley procesal demanda la participación directa del imputado.

#### **4.4. A tener un tiempo razonable para la defensa.**

El imputado durante la investigación y el juicio debe contar con el tiempo necesario o razonable para contar su defensa, el tiempo razonable dependerá de la gravedad del delito, las dificultades para obtener evidencias a favor de la defensa, en número de personas acusadas en el mismo proceso y la novedad u originalidad de los problemas jurídicos que se requiere examinar, etc.

#### **4.5. A ejercer su autodefensa.**

La autodefensa “es la que se realiza mediante manifestaciones que el imputado puede hacer en el proceso, declarando cuantas veces sea necesario (tanto en la instrucción como en el juicio) siempre que sus declaraciones sean pertinentes”. Por nuestra parte consideramos que la autodefensa conocida también como defensa material o intervención directa del imputado está encaminada a que este haga valer por si mismo los derechos que le reconocen los tratados internacionales, la constitución y las leyes, desde la investigación preliminar es el único hasta la culminación del proceso. Ya sea solicitando su libertad, la absolución o pena mínima, en caso de condena.

#### **4.6. A intervenir en la Actividad Probatoria.**

El imputado tiene la facultad para intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. La intervención del imputado la puede realizar personalmente o a través de su abogado defensor. Si la realiza personalmente puede solicitar la admisión de pruebas. Frente a esto, el Juez decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado, y solo podrá limitar los medios de prueba cuando resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible consecución (art. 155.2 CPP). Si la realiza a través de su abogado defensor, el código garantiza a este una serie de derechos para intervenir en la actividad probatoria, especialmente: recurrir a la asistencia reservada de un experto en ciencia, técnica o arte durante el desarrollo de una diligencia, siempre que sus conocimientos sean requeridos para mejor defender y a aportar los medios de investigación y de prueba que estimen pertinentes (art. 84. Incs. 3 y 5).

#### **4.7. El derecho a la no incriminación**

Cuando a una persona se le imputa un delito, este está en el derecho de defenderse, y, por lo tanto, también está facultado para introducir, a través de su declaración, la información que más le convenga, ya sea declarando la verdad, ocultando información, guardando silencio, negándose a declarar o simplemente faltando a la verdad, es decir, el imputado o acusado es el único que tiene facultad de decidir sobre su declaración.

Adoptando esta postura, se puede llegar a la conclusión que el investigado o procesado no está obligado a auto inculparse o a declararse contra sí mismo.

El derecho a la no incriminación no solo rige para el imputado o acusado sino también para el testigo. El testigo al momento de prestar su declaración no está obligado a declarar sobre un hecho que lo involucra en un ilícito penal; por tanto, este supuesto constituye un límite del testigo de decir la verdad en un proceso penal.

Según el Código las manifestaciones del derecho a la no incriminación son:

##### **4.7.1. Nadie puede ser obligado a declarar**

La declaración de la persona sometida a una investigación o juzgamiento debe ser de manera espontanea, es decir, libre de cualquier presión o coacción u otro medio. La declaración prestada sin libertad del imputado o acusado no puede ser valorada para tomar alguna decisión policial, fiscal o judicial.

##### **4.7.2. Nadie puede ser inducido a declarar**

Igualmente, está prohibido que los funcionarios o servidores públicos indiquen al imputado o acusado la forma como debe declarar. Por tanto, es ilegal inducir al procesado a declarar de tal o cual manera o que lo haga a cambio de algún beneficio o promesa de beneficio. BINDER (1993, p. 180) añade que no se puede emplear tampoco preguntas capciosas o sugestivas, ni amenazar al imputado con lo que le podría suceder en el caso de que no confiese. Estos u otros procedimientos similares resultan atentatorios contra la garantía de que nadie puede ser obligado a declarar en su contra.

##### **4.7.3. Nadie está obligado o inducido a reconocer su responsabilidad**

Por otro lado, a nadie se debe coaccionar solapadamente a que reconozca su responsabilidad penal por el delito que se le imputa.

La confesión de responsabilidad debe ser una declaración libre, espontanea, veraz y coherente hecha ante Juez Penal competente y factible de ser corroborada con otros



medios de prueba, en donde se reconoce el grado de participación que se ha tenido en la perpetración del delito o falta (autor, cómplice o instigador).

Por otro lado, el código procesal no solo consagra el derecho del imputado o acusado a no inculparse sino que también prevé el derecho de este a no inculpar a su cónyuge, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. La no inculcación de parientes cercanos tiene como fundamento la no desintegración de la unidad familiar.

El código también consagra el derecho a la información y participación que tienen los agraviados tanto en las diligencias preliminares, investigación y juicio.

Por información, los funcionarios o servidores públicos que dirigen cada una de las etapas del proceso, Fiscal o Juez Penal, incluido la policía, tienen la obligación de brindar todas las facilidades para que los agraviados o perjudicados por el delito, directamente o a través de su abogado defensor, tomen conocimiento de las diligencias actuadas o que están por actuarse.

El código prescribe que el agraviado debe ser informado de los resultados de la actuación en que haya intervenido, así como del resultado del procedimiento, aun cuando no haya intervenido en el, siempre que lo solicite (art. 95.1); así mismo, deberá ser informado sobre sus derechos cuando interponga la denuncia, al declarar preventivamente o en su primera intervención en la causa.

Por otro lado, el código también obliga a las autoridades competentes a velar por que las víctimas reciban un trato digno y respetuoso y a que se proteja su integridad física y psicológica, incluyendo la de su familia; y en los procesos por delitos contra la libertad sexual se deberá preservar su identidad, bajo responsabilidad de quien conduzca la investigación o el proceso. <http://www.vramosjorge.com.blogspot.pe/>.

Llegamos a la conclusión que, el derecho de defensa, es un derecho que abarca muchos más derechos internos o que son respaldados y protegidos por el derecho de defensa, como son el derecho a ser oídos, a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique la imputación en su contra, a intervenir en la Actividad Probatoria, a ejercer su autodefensa, a tener un tiempo razonable para la defensa, entre otros derechos que se deben resguardar en un proceso, todos estos derechos garantizan que tanto el imputado como la víctima tengan la plena seguridad de que sus intereses serán protegidos y respetados conforme al ordenamiento jurídico.

## 5. AUTODEFENSA

### 5.1. CONCEPTO

Respecto al contenido del derecho de defensa, el tratadista español GIMENO, VICENTE (2004), nos menciona que:

La autodefensa consiste “en la intervención directa y personal del imputado en el proceso, realizando actividades encaminadas a preservar su libertad: impedir la condena u obtener la mínima sanción penal posible” (p, 55).

El tratadista Chileno CAROCA, ALEX (2002), nos expone acerca de la autodefensa en los procesos penales y nos refiere que:

El ejercicio de las amplias facultades que concede el derecho de defensa, puede realizarse por dos modalidades, según se ha venido insinuando. La primera es a través del imputado, actuando personalmente, caso en el que se da origen a la autodefensa, defensa personal o también llamada defensa privada. La segunda, que vemos a continuación, es a través de un defensor, que da origen a la defensa técnica. La autodefensa no ha sido siempre reconocida, ni su importancia comprendida en el proceso penal, en circunstancias que se trata de la modalidad esencial del ejercicio de las facultades defensivas. Ello porque es el propio imputado el que siempre deberá decidir a través de sus declaraciones y actuaciones personales, el contenido esencial de sus alegaciones, sin perjuicio de la designación de un abogado de confianza, el que actuara según sus palabras acerca de su propia defensa (p, 6).

El jurista inglés BENTHAM, JEREMY (1827), nos explica que:

Si existe algún derecho que pueda llamarse derecho natural y que tenga en sí mismo el carácter evidente de conveniencia y de justicia parece que es el de defenderse á sí propio, ó valerse de un amigo para que le ayude en su causa. *¿A qué obligarme á que mi suerte dependa de un abogado, si no hay ninguno en quien tenga tanta confianza como en mí mismo?* En: (<https://www.terragnijurista.com.ar/doctrina/detecnica.htm>).

Finalmente concluimos que, el ejercicio del derecho de defensa también se puede ejercer mediante la autodefensa, donde las partes, dan a conocer como realizaron los hechos, si aceptan los cargos o no, entre otras facultades, lo mismo que se buscaría mediante la presente investigación, que es que se permita el ejercicio de la autodefensa en casos en los que no se haya afectado algún derecho de manera irreparable o que este

sujeto a penas graves, sino solo en los casos en los que debido a su mínima reprochabilidad se permita que las partes defiendan sus intereses, para no afectarlas económicamente.

### **CAPITULO III: RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO**

#### **1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS**

Con la finalidad de analizar y su posterior discusión de los datos obtenidos tanto de los juzgados de la ciudad de Chiclayo, como de la encuesta aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados de la ciudad de Chiclayo, pertenecientes al Distrito Judicial de Lambayeque, se procedió a plasmar la información en cuadros estadísticos.

Se analizarán los siguientes cuadros estadísticos que derivan de una investigación de los casos y expedientes de los juzgados de la ciudad de Chiclayo:

**TABLA N° 01: POBLACIÓN SEGÚN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 2° JUZGADO DE JLO, CONCILIADOS.**

#### **GRÁFICO N° 1**

**TABLA N° 02: POBLACIÓN SEGÚN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 9° JUZGADO DE CHICLAYO, CONCILIADOS.**

#### **GRÁFICO N° 2**

**TABLA N° 03: POBLACIÓN SEGÚN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 2° JUZGADO DE JLO, DESISTIMIENTOS**

#### **GRÁFICO N° 3**

**TABLA N° 04: POBLACIÓN SEGÚN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 9° JUZGADO DE CHICLAYO, DESISTIMIENTOS**

#### **GRÁFICO N° 4**

**TABLA N° 05: POBLACIÓN SEGÚN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 2° JUZGADO DE JLO, CONCILIADOS -REPARACIÓN CIVIL**

#### **GRÁFICO N° 5**

**TABLA N° 06:** POBLACIÓN SEGÚN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 9°  
JUZGADO DE CHICLAYO, CONCILIADOS - REPARACIÓN  
CIVIL.

**GRÁFICO N° 6**

**TABLA N° 07:** POBLACIÓN SEGÚN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 2°  
JUZGADO DE JLO, DESISTIMIENTOS

**GRÁFICO N° 7**

**TABLA N° 08:** POBLACIÓN SEGÚN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 9°  
JUZGADO DE CHICLAYO, DESISTIMIENTOS

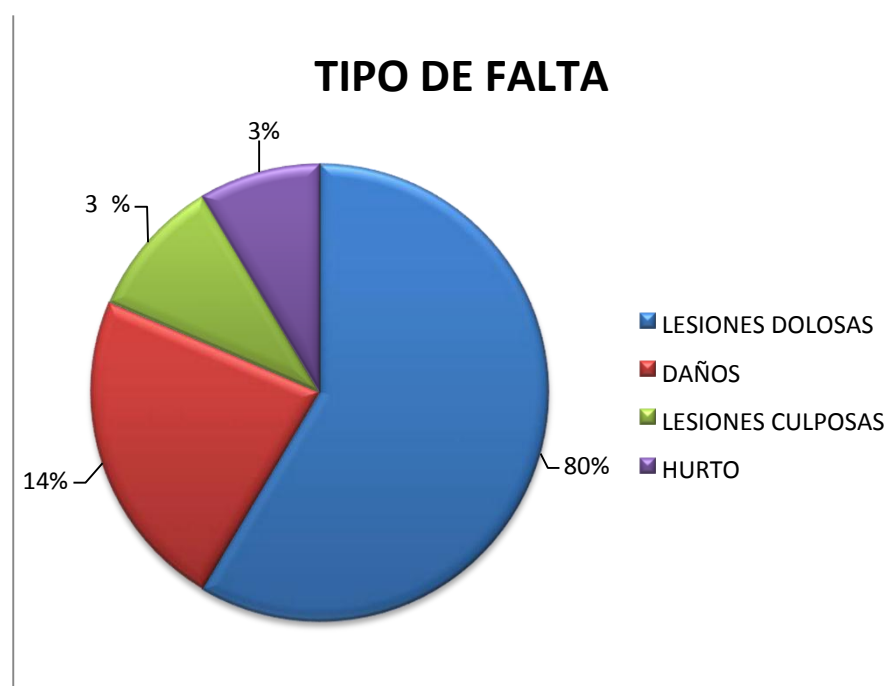
**GRÁFICO N° 8**

**TABLA N° 1: POBLACION SEGUN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 2° JUZGADO DE JLO, CONCILIADOS.**

<b>CRITERIOS</b>	<b>Frecuencia Absoluta (FA)</b>	<b>Porcentaje ( %)</b>
Lesiones Dolosas	24	<b>80</b>
Lesiones Culposas	<b>1</b>	<b>3.33</b>
Hurtos	1	<b>3.33</b>
Daños	4	<b>13.33</b>
Otras	0	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de febrero del 2018*

**Gráfico 1**

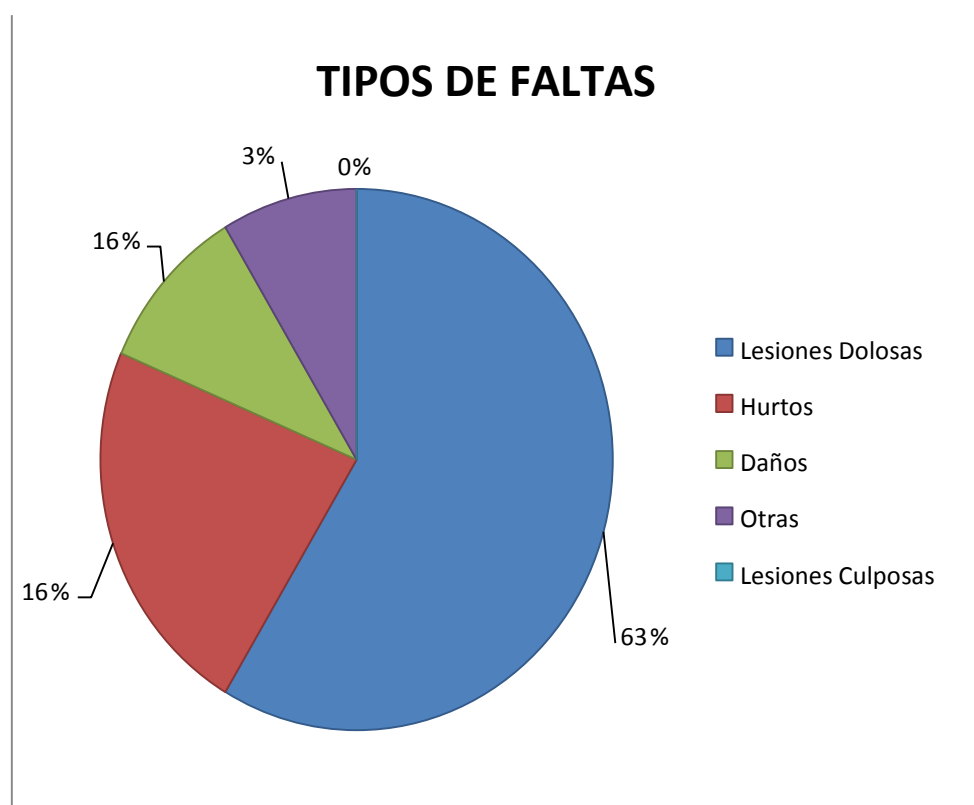


**TABLA N° 2: POBLACION SEGUN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 9° JUZGADO DE CHICLAYO, CONCILIADOS.**

<b>CRITERIOS</b>	<b>Frecuencia Absoluta (FA)</b>	<b>Porcentaje (%)</b>
Lesiones dolosas	19	63.33
Lesiones Culposas	0	0
Hurtos	5	16.66
Daños	5	16.66
Otras	1	3.33
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de febrero del 2018*

**Gráfico 2**

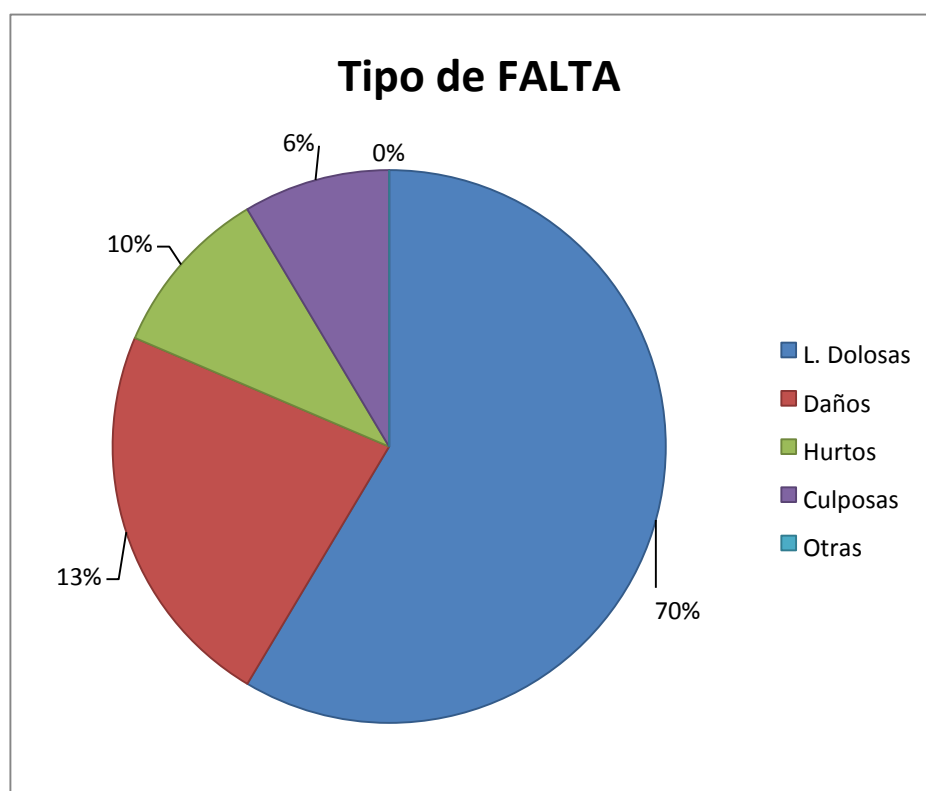


**TABLA N° 3: POBLACION SEGUN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 2° JUZGADO DE JLO, DESISTIMIENTOS.**

<b>CRITERIOS</b>	<b>Frecuencia Absoluta (FA)</b>	<b>Porcentaje ( %)</b>
Lesiones Dolosas	21	70.0
Lesiones Culposas	2	6.66
Hurtos	3	10
Daños	4	13.33
Otras	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Fuente:* Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de febrero del 2018

**Gráfico 3**



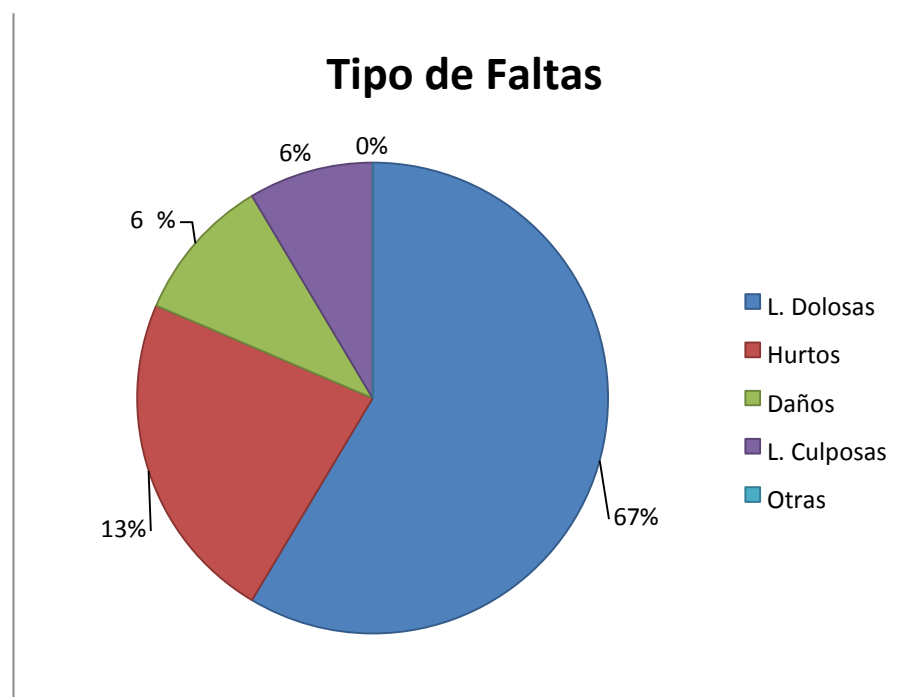


**TABLA N° 4: POBLACION SEGUN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 9° JUZGADO DE CHICLAYO, DESISTIMIENTOS.**

<b>CRITERIOS</b>	<b>Frecuencia Absoluta (FA)</b>	<b>Porcentaje ( %)</b>
Lesiones dolosas	20	66.67
Lesiones Culposas	2	6.66
Hurtos	4	13.33
Daños	2	6.66
Otras	2	6.66
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de febrero del 2018*

**Gráfico 4**

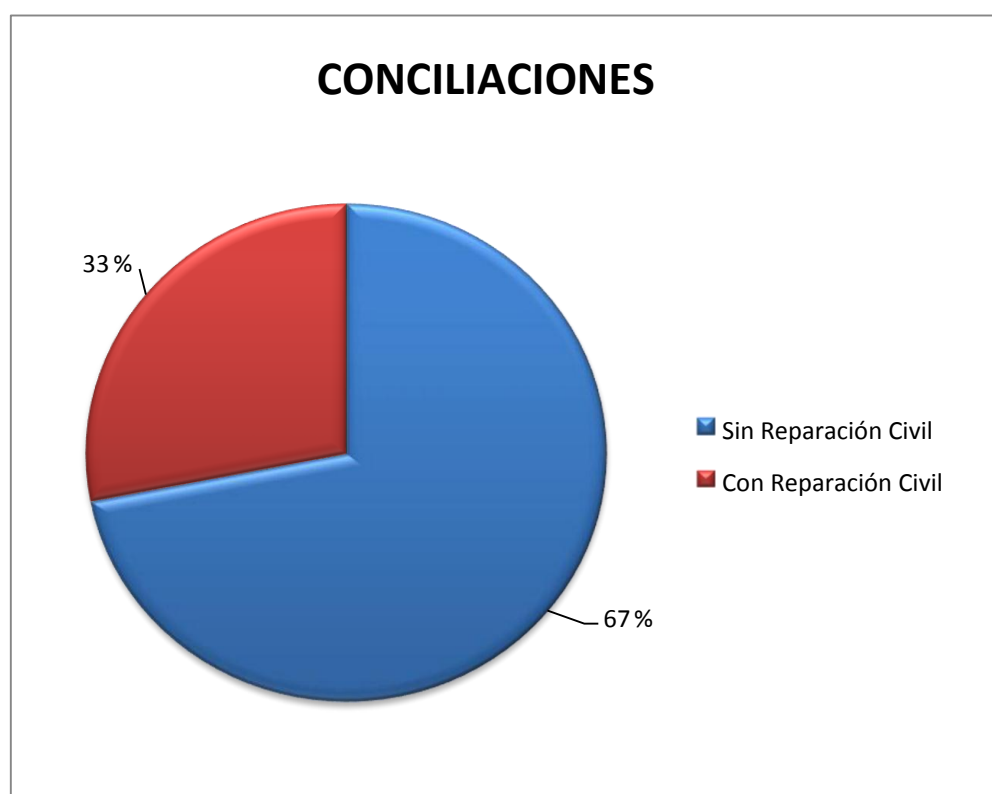


**TABLA N° 5: POBLACION SEGUN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 2° JUZGADO DE JLO, CONCILIADOS-REPARACION CIVIL**

<b>CRITERIOS</b>	<b>Frecuencia Absoluta (FA)</b>	<b>Porcentaje ( %)</b>
Con Reparación	10	33.33
Sin Reparación	20	66.67
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de febrero del 2018*

**Gráfico 5**

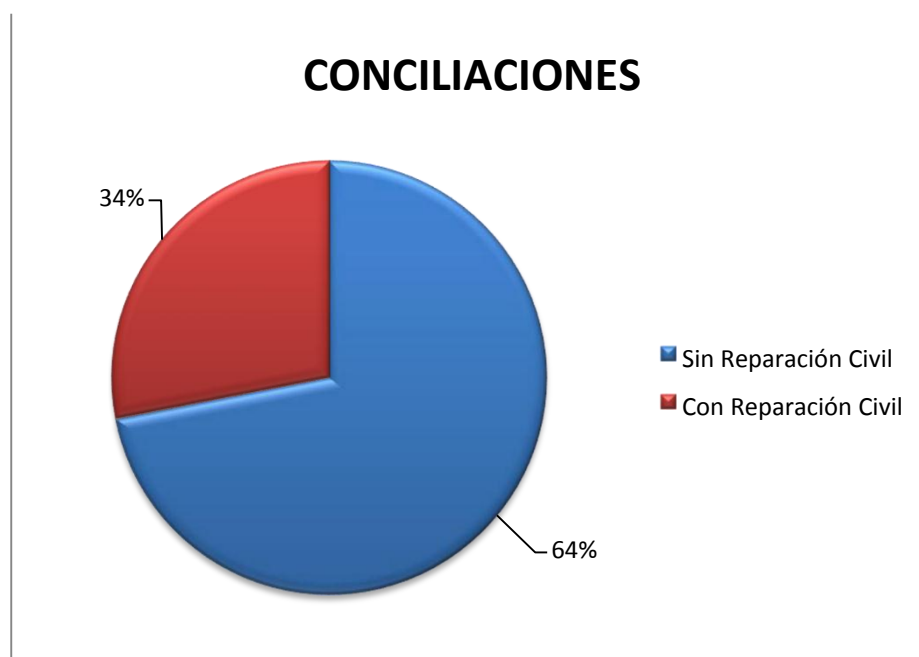


**TABLA N° 6: POBLACION SEGUN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 9° JUZGADO DE CHICLAYO, CONCILIACION-REPARACION CIVIL.**

CRITERIOS	Frecuencia Absoluta (FA)	Porcentaje ( %)
Con Reparación	11	36.67
Sin Reparación	19	63.33
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de febrero del 2018*

**Gráfico 6**



**TABLA N° 7: POBLACION SEGUN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 2° JUZGADO DE JLO, DESISTIMIENTOS**

<b>CRITERIOS</b>	<b>Frecuencia Absoluta (FA)</b>	<b>Porcentaje ( %)</b>
Voluntarios	7	23.33
Tácitos	23	76.67
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Fuente:* Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de febrero del 2018

**Gráfico 7**



**TABLA N° 8: POBLACION SEGUN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 9° JUZGADO DE CHICLAYO, DESISTIMIENTOS**

CRITERIOS	Frecuencia Absoluta (FA)	Porcentaje ( %)
Voluntario	2	6.67
Tácito	28	93.33
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de febrero del 2018*

**Gráfico 8**



Se analizaran los siguientes cuadros estadísticos que se desprenden de la aplicación de la encuesta realizada a Jueces, Fiscales y Abogados de la ciudad de Chiclayo:

CUADRO N° 01: CONCEPTO DE FALTAS.

GRÁFICO 1

CUADRO N° 02: LA ESPECIALIDAD DEL PROCESO POR FALTAS

GRÁFICO 2

CUADRO N° 03: TIPOS DE SANCIONES

GRÁFICO 3

CUADRO N° 04: LAS SANCIONES Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

GRÁFICO 4

CUADRO N° 05: EL PROCESO POR FALTAS Y SU CONGESTION PROCESAL

GRÁFICO 5

CUADRO N° 06: TIEMPO QUE DEMORA UN PROCESO POR FALTA

GRÁFICO 6

CUADRO N° 07: FORMAS PARA DAR POR CONCLUIDO UN PROCESO POR FALTAS

GRÁFICO 7

CUADRO N° 08: CONCEPTO DE CONCILIACION

GRÁFICO 8

CUADRO N° 09: MOMENTO PARA LA CONCILIACION

GRÁFICO 9

CUADRO N° 10: LA SOLICITUD DE CONCILIACION

GRÁFICO 10

CUADRO N° 11: LA DEFENSA TECNICA

GRÁFICO 11

CUADRO N° 12:	INTERESES DE LAS PARTES GRÁFICO 12
CUADRO N° 13:	LA AUTODEFENSA GRÁFICO 13
CUADRO N° 14:	COSTO-BENEFICIO DE LAS PARTES GRÁFICO 14
CUADRO N° 15:	LA DEFENSA TECNICA Y LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA GRÁFICO 15
CUADRO N° 16:	AUDIENCIAS SIN DEFENSA TECNICA GRÁFICO 16
CUADRO N° 17:	EXCEPCIONALIDAD DE LA DEFENSA TECNICA EN ACCIONES DE POCA REPROCHABILIDAD GRÁFICO 17
CUADRO N° 18:	EXCEPCIONALIDAD DE LA DEFENSA TECNICA GRÁFICO 18

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

Total de encuestados: 62 personas

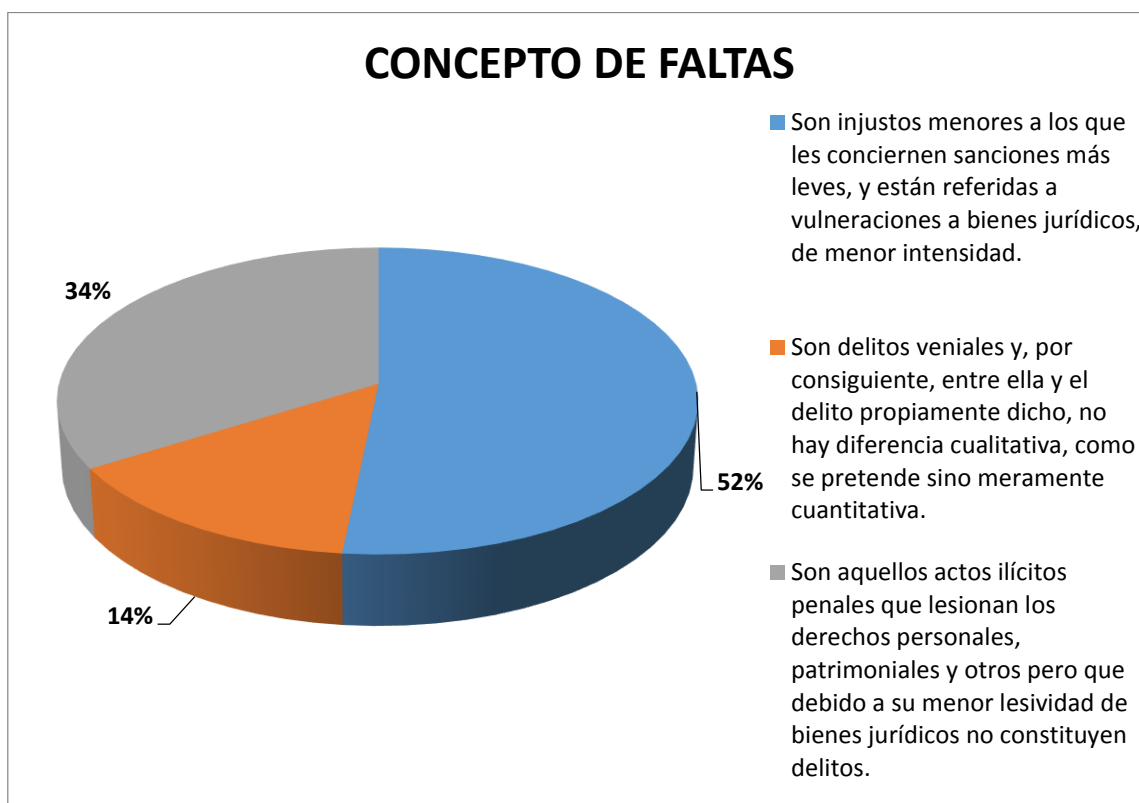
**CUADRO N° 1: CONCEPTO DE FALTAS**

<b>PREGUNTA</b>	<b>RESPUESTA</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>PORCENTAJE</b>
¿Según su opinión cual es el concepto más adecuado para las faltas?	Son injustos menores a los que les conciernen sanciones más leves, y están referidas a vulneraciones a bienes jurídicos, de menor intensidad.	<b>32</b>	<b>52%</b>
	Son delitos veniales y, por consiguiente, entre ella y el delito propiamente dicho, no hay diferencia cualitativa, como se pretende sino meramente cuantitativa.	<b>9</b>	<b>14%</b>
	Son aquellos actos ilícitos penales que lesionan los derechos personales, patrimoniales y otros pero que debido a su menor lesividad de bienes jurídicos no constituyen delitos.	<b>21</b>	<b>34%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de marzo de 2018*



**GRAFICO N° 1**



TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

Total de encuestados: 62 personas

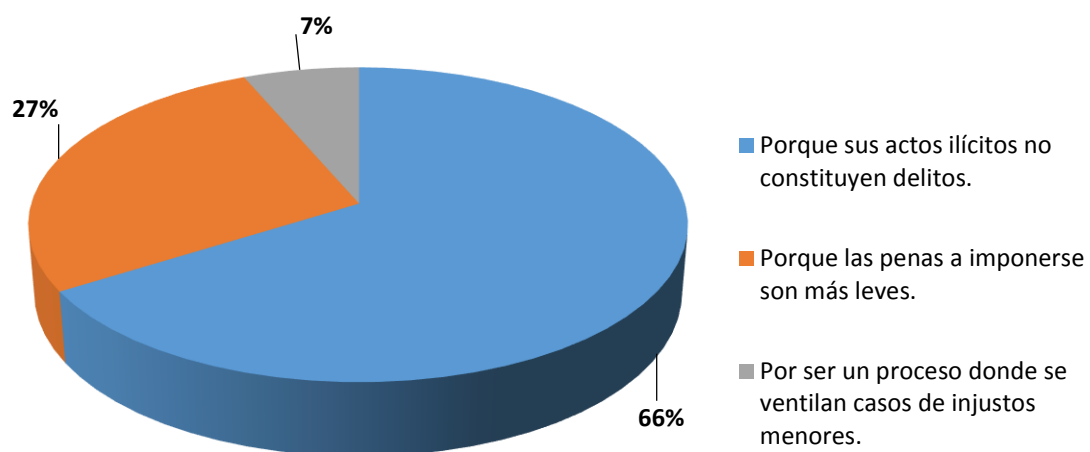
**CUADRO N° 2: LA ESPECIALIDAD DEL PROCESO POR FALTAS**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Según su opinión ¿Qué hace especial al proceso especial por faltas?	Porque sus actos ilícitos no constituyen delitos.	41	66%
	Porque las penas a imponerse son más leves.	17	27%
	Por ser un proceso donde se ventilan casos de injustos menores.	4	7%
<b>TOTAL</b>		62	100%

*Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de marzo del 2018*

**GRAFICO N° 2**

### **LA ESPECIALIDAD DEL PROCESO POR FALTAS**



TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

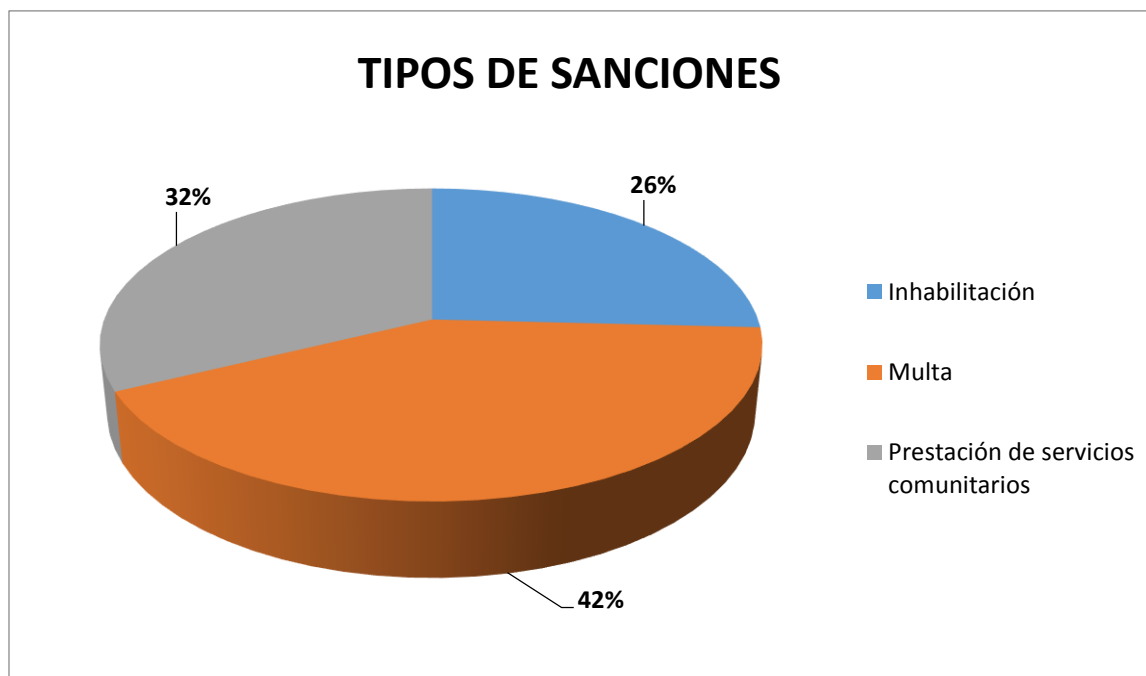
Total de encuestados: 62 personas

**CUADRO N° 3: TIPOS DE SANCIONES**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
¿Qué tipos de sanciones se imponen ante la comisión de las faltas?	Inhabilitación	16	26%
	Multa	26	42%
	Prestación de servicios comunitarios	20	32%
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Fuente:* Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de marzo del 2018

**GRAFICO N° 3**



TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

Total de encuestados: 62 personas

**CUADRO N° 4: LAS SANCIONES Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
¿Las sanciones que se imponen ante la comisión de las faltas, ponen en riesgo algún derecho fundamental?	SI	15	24%
	NO	47	76%
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Fuente:* Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de marzo del 2018

**GRAFICO N° 4**



TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

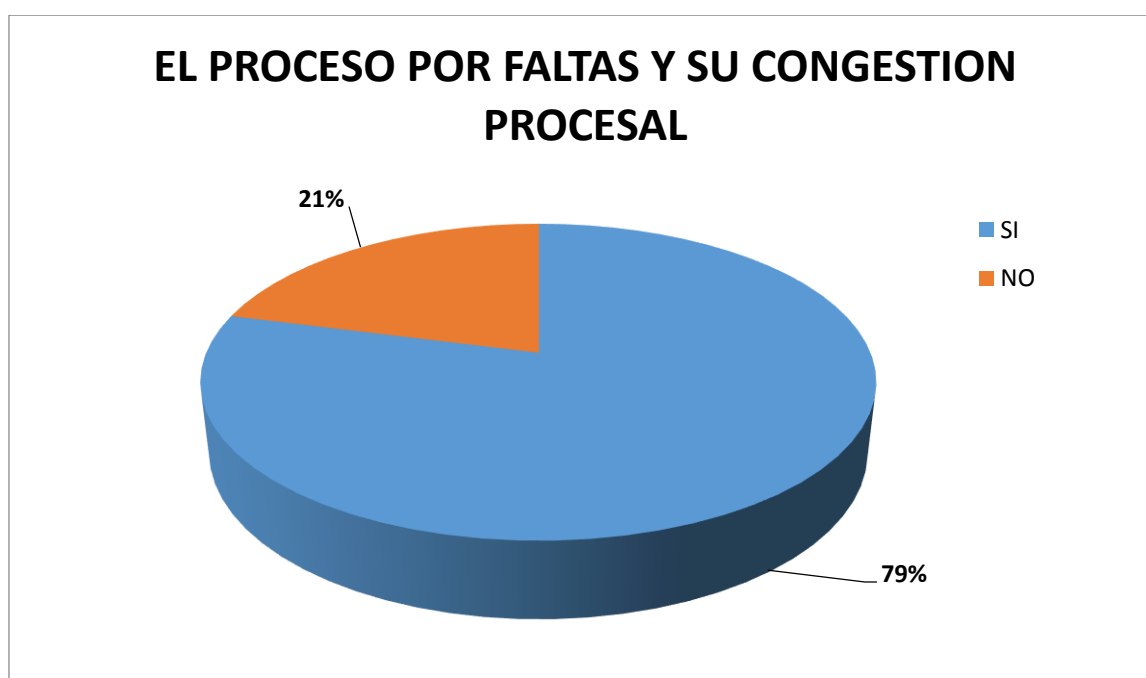
Total de encuestados: 62 personas

**CUADRO N° 5: EL PROCESO POR FALTAS Y SU CONGESTION PROCESAL**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Según su criterio ¿Considera que los procesos por faltas generan congestión procesal?	SI	49	79%
	NO	13	21%
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de marzo del 2018*

**GRAFICO N° 5**



TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

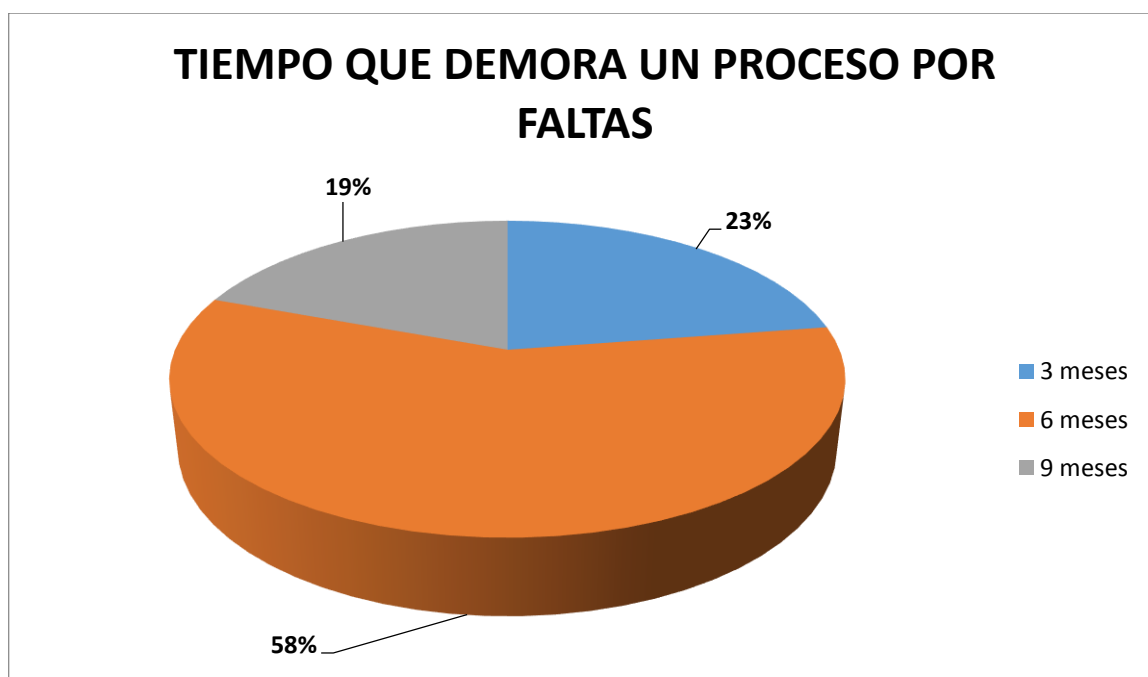
Total de encuestados: 62 personas

**CUADRO N° 6: TIEMPO QUE DEMORA UN PROCESO POR FALTAS**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Según su experiencia ¿Cuánto podría demorar un proceso por faltas?	3 meses	14	23%
	6 meses	36	58%
	9 meses	12	19%
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Fuente:* Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de marzo del 2018

**GRAFICO N° 6**



TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

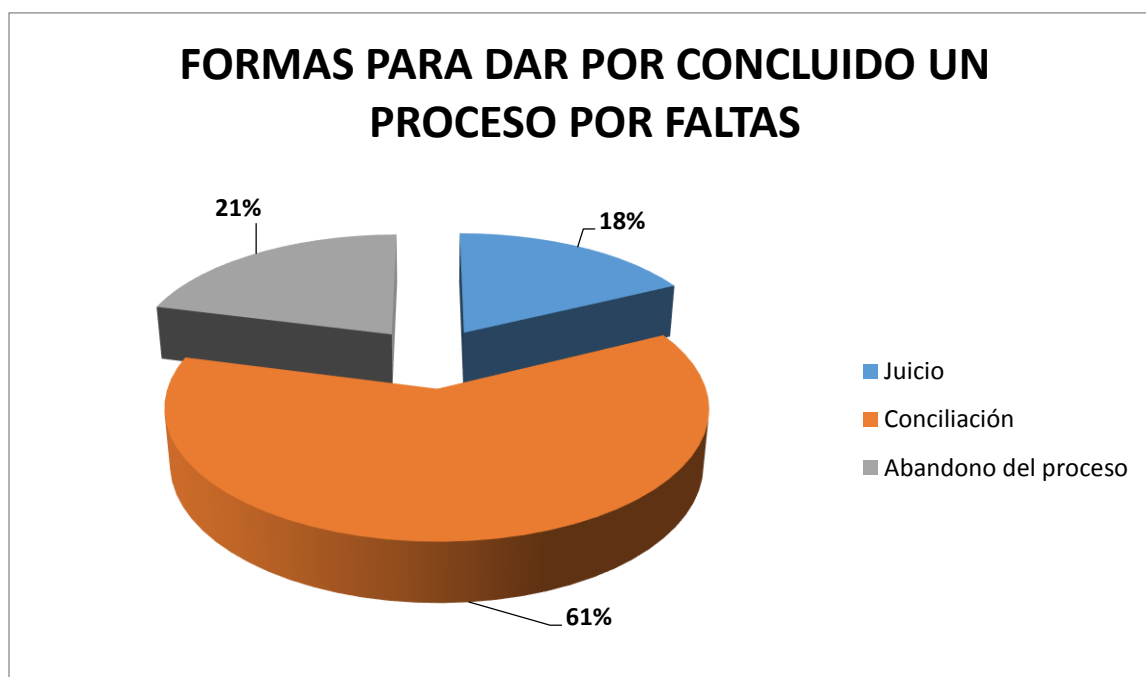
Total de encuestados: 62 personas

**CUADRO N° 7: FORMAS DE DAR POR CONCLUIDO UN PROCESO POR FALTAS**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Según su opinión ¿Cuál es la forma más usada para la terminación de un proceso por faltas?	Juicio	11	18%
	Conciliación	38	61%
	Abandono del proceso	13	21%
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de marzo del 2018

**GRAFICO N° 7**



TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

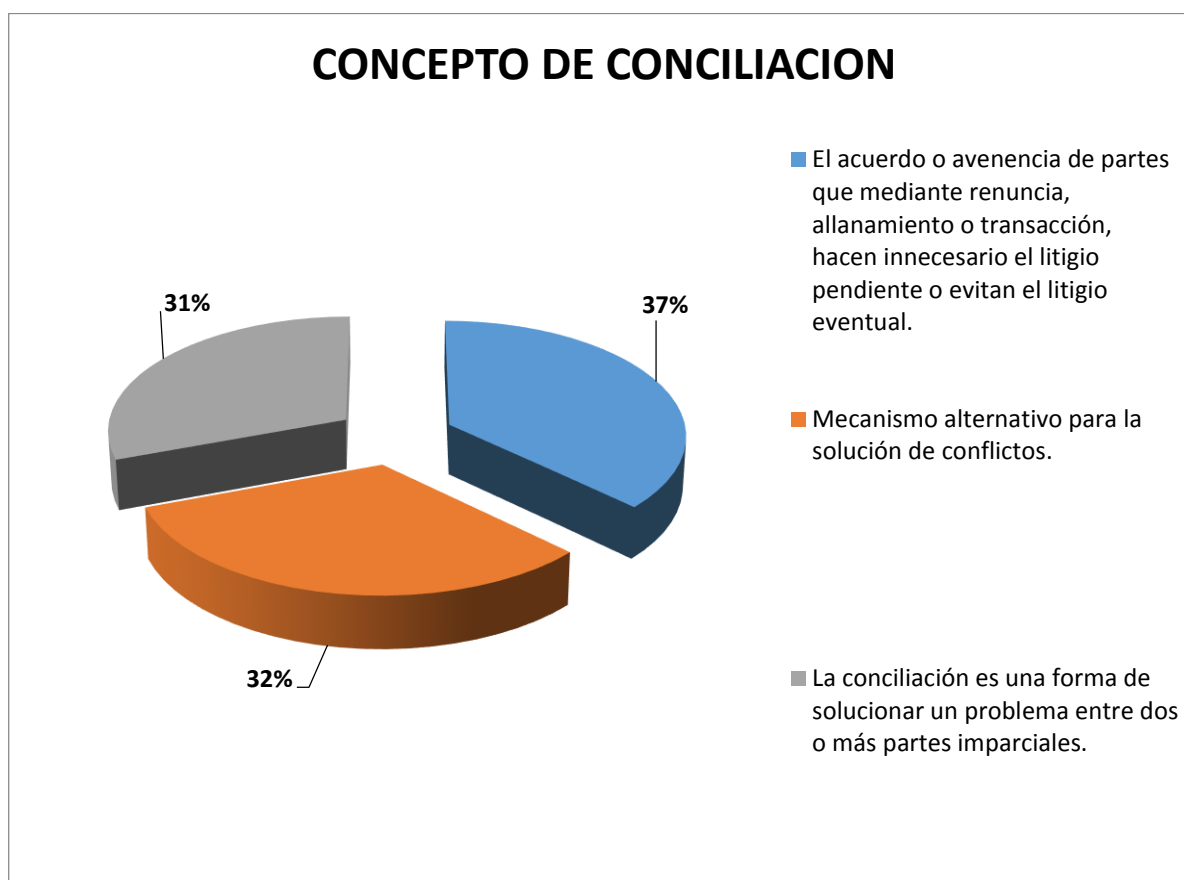
Total de encuestados: 62 personas

**CUADRO N° 8: CONCEPTO DE CONCILIACION**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Según su opinión ¿Qué es la conciliación?	El acuerdo o avenencia de partes que mediante renuncia, allanamiento o transacción, hacen innecesario el litigio pendiente o evitan el litigio eventual.	23	37%
	Mecanismo alternativo para la solución de conflictos.	20	32%
	La conciliación es una forma de solucionar un problema entre dos o más partes imparciales.	19	31%
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de marzo del 2018*

**GRAFICO N° 8**







TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

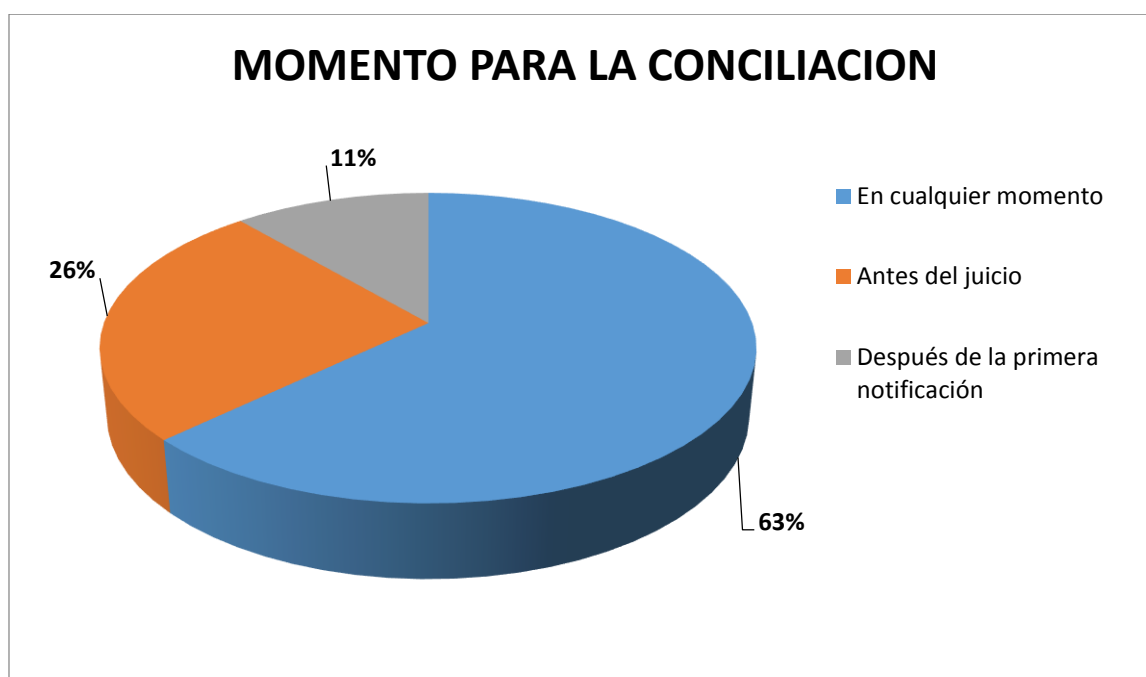
Total de encuestados: 62 personas

**CUADRO N° 9: MOMENTO PARA LA CONCILIACION**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
¿En que momento se puede plantear la conciliación en los procesos por faltas?	En cualquier momento	39	63%
	Antes del juicio	16	26%
	Después de la primera notificación	7	11%
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de marzo del 2018*

**GRAFICO N° 9**



TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

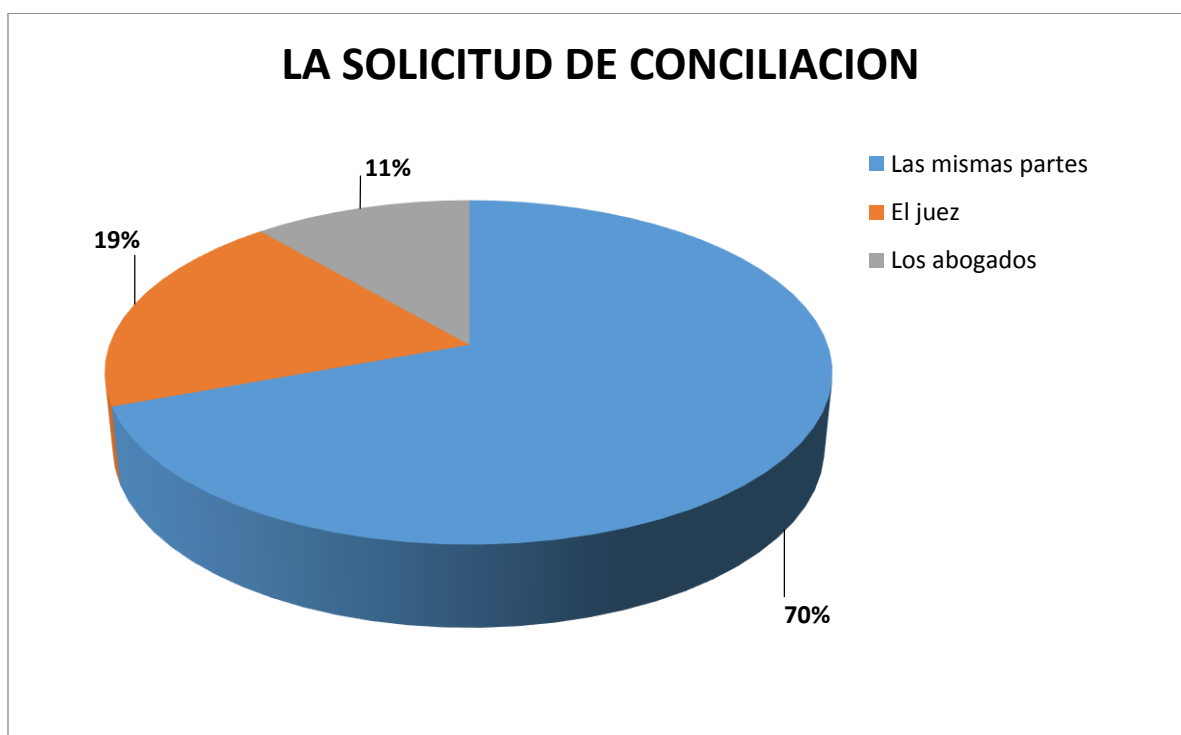
Total de encuestados: 62 personas

**CUADRO N° 10: LA SOLICITUD DE CONCILIACION**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
En su opinión ¿Quién puede solicitar a que las partes participen de una conciliación?	Las mismas partes	<b>43</b>	<b>70%</b>
	El juez	<b>12</b>	<b>19%</b>
	Los abogados	<b>7</b>	<b>11%</b>
<b>TOTAL</b>		62	100%

*Fuente:* Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de marzo del 2018

**GRAFICO N° 10**



TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

Total de encuestados: 62 personas

**CUADRO N° 11: LA DEFENSA**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Considera Ud. que siendo el juez conocedor del derecho, podrían ser solo las partes sin necesidad de la defensa técnica (abogado) quienes defiendan sus intereses?	SI	49	79%
	NO	13	21%
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de marzo del 2018

**GRAFICO N° 11**



TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

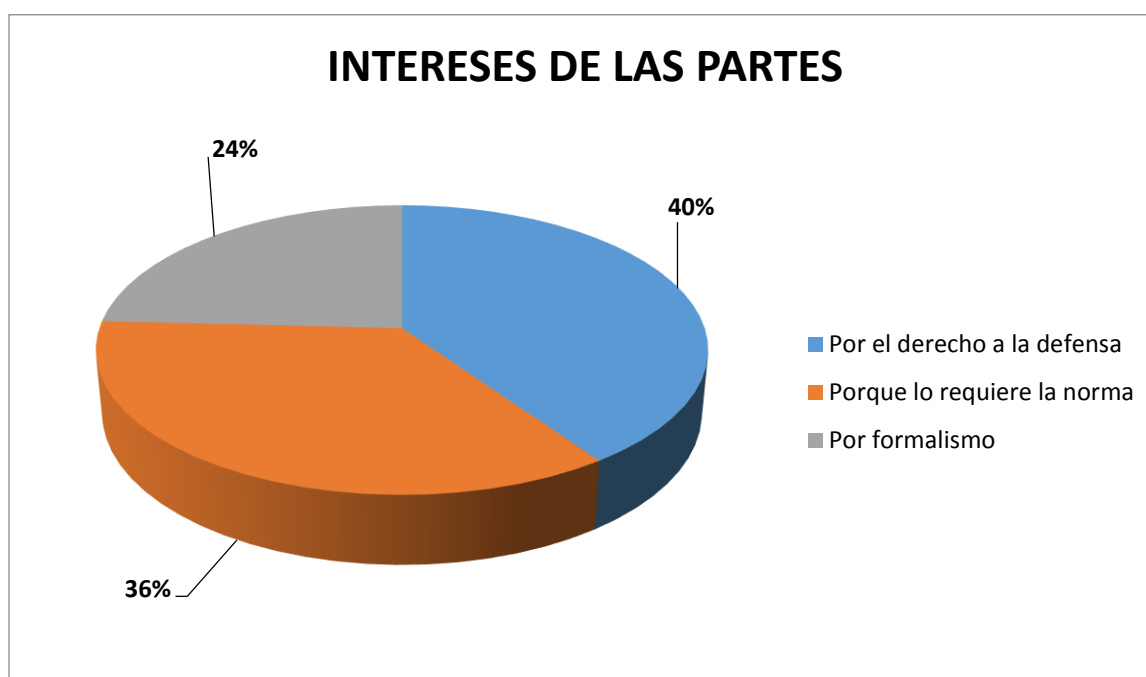
Total de encuestados: 62 personas

**CUADRO N° 12: INTERESES DE LAS PARTES**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
¿Según su criterio porque se requiere de la presencia de un abogado en una conciliación, si son las partes quienes decidirán sobre sus propios intereses?	Por el derecho a la defensa	25	40%
	Porque lo requiere la norma	22	36%
	Por formalismo	15	24%
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de marzo del 2018*

**GRAFICO N° 12**



TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

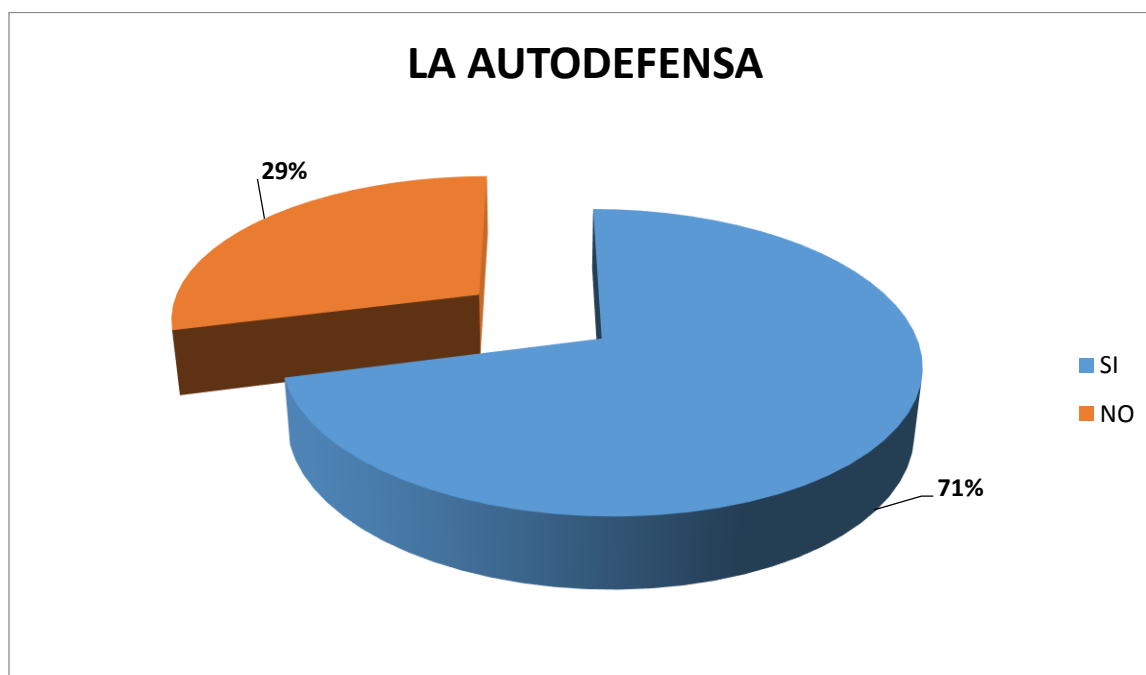
Total de encuestados: 62 personas

**CUADRO N° 13: LA AUTODEFENSA**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Según su opinión ¿Se podría ejercer el derecho a la defensa mediante la autodefensa?	SI	44	71%
	NO	18	29%
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de marzo del 2018*

**GRAFICO N° 13**



TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

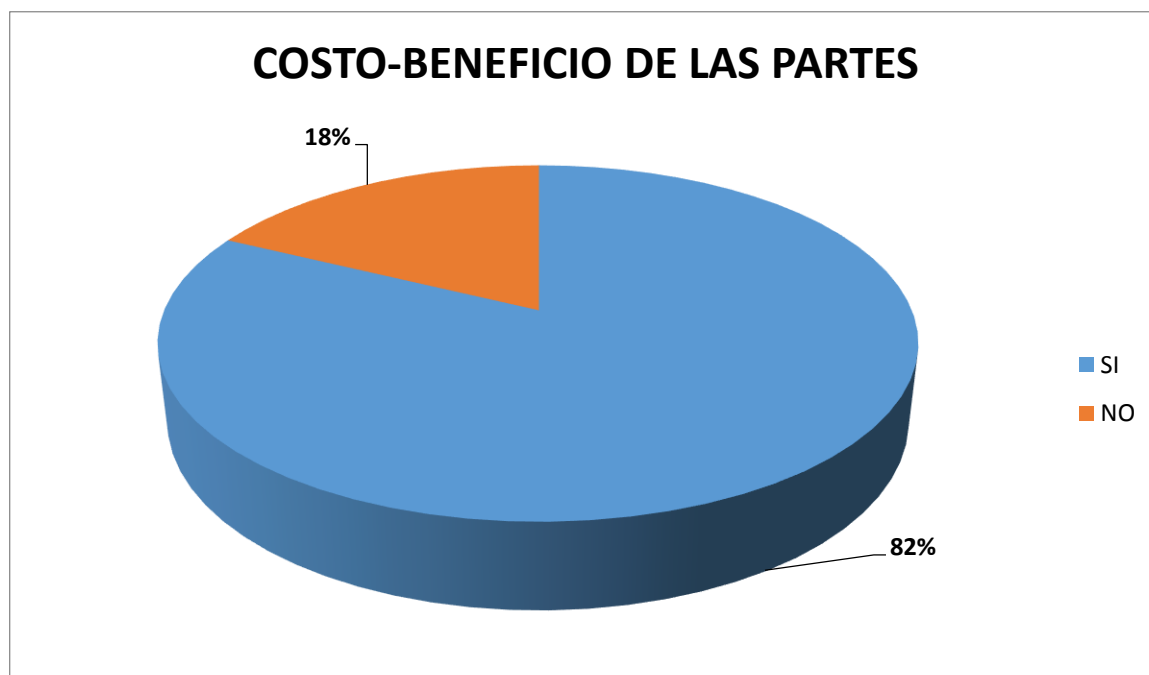
Total de encuestados: 62 personas

**CUADRO N° 14: COSTO.BENEFICIO DE LAS PARTES**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Teniendo en cuenta el costo-beneficio de las partes dentro de un proceso por faltas ¿Podría existir un desmedro económico a las partes debido a la presencia de un abogado cuyos honorarios superarían la cuantía del proceso?	SI	51	82%
	NO	11	18%
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de marzo del 2018*

**GRAFICO N° 14**



TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

Total de encuestados: 62 personas

**CUADRO N° 15: LA DEFENSA TECNICA Y LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Según su criterio, ante la inasistencia del abogado de una de las partes y la reprogramación de audiencia ¿Se estaría perjudicando a la administración de justicia?	SI	59	95%
	NO	3	5%
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de marzo del 2018*

**GRAFICO N° 15**





TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

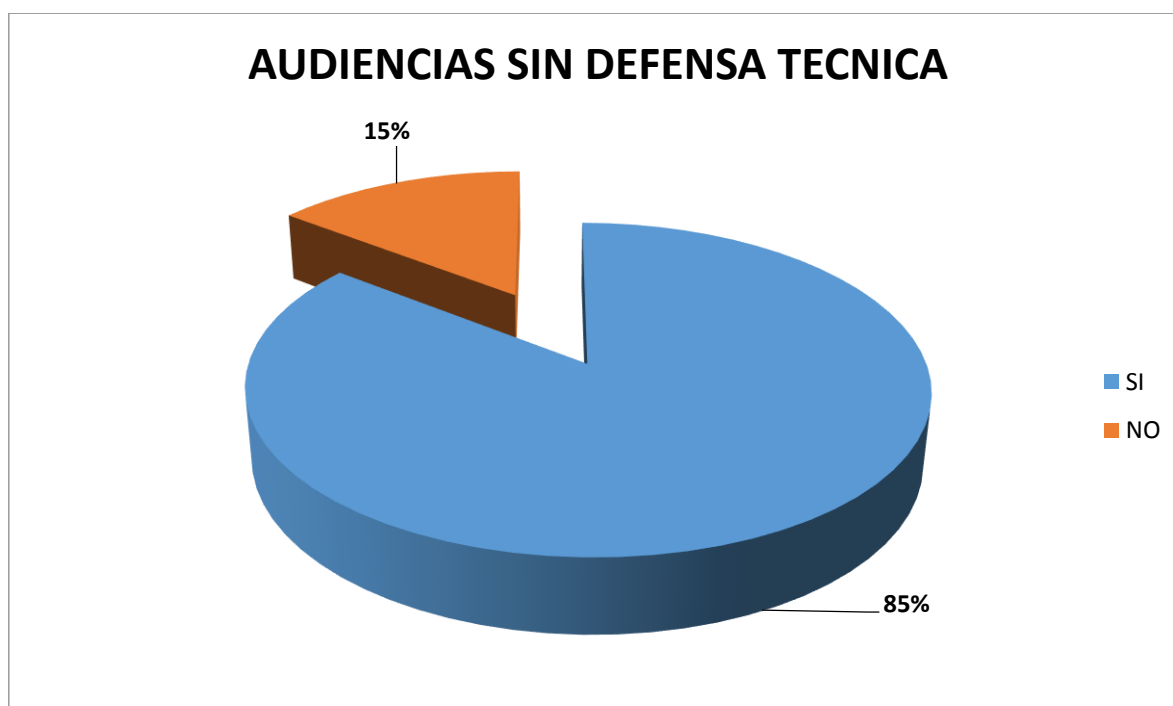
Total de encuestados: 62 personas

**CUADRO N° 16: AUDIENCIAS SIN DEFENSA TECNICA**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
En su opinión ¿Estaría el juez en la posibilidad de guiar una audiencia de conciliación sin menoscabar los derechos de alguna de las partes?	SI	53	85%
	NO	9	15%
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de marzo del 2018*

**GRAFICO N° 16**



TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

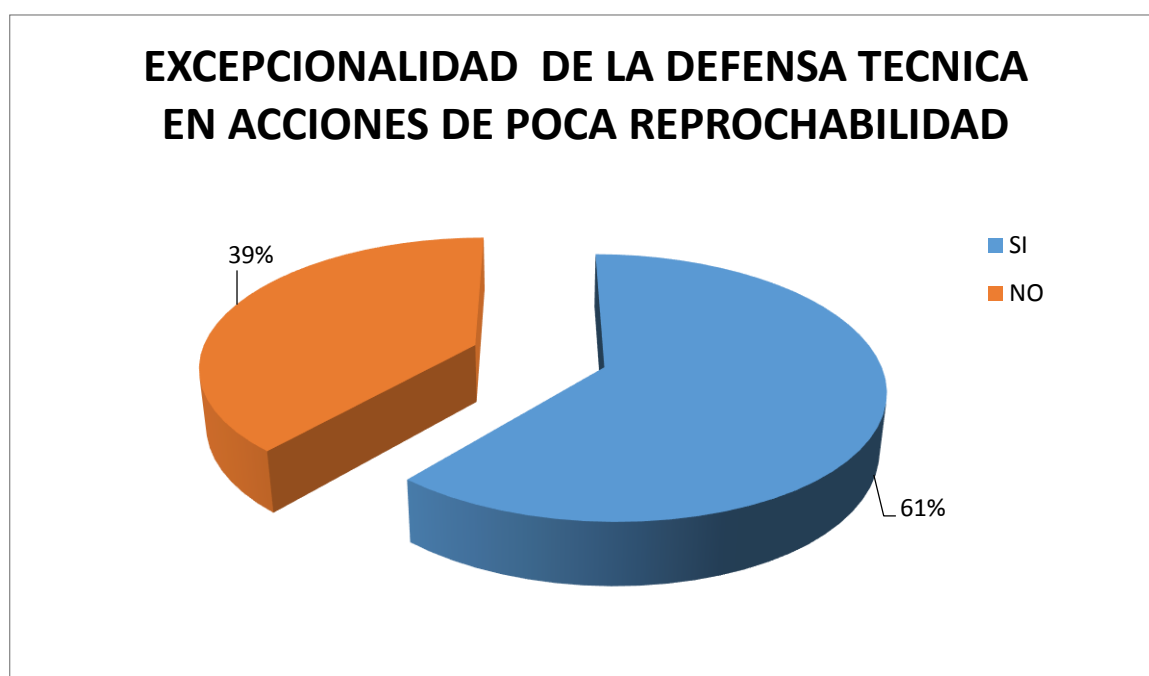
Total de encuestados: 62 personas

**CUADRO N° 17: EXCEPCIONALIDAD DE LA DEFENSA TECNICA EN ACCIONES DE POCA REPROCHABILIDAD**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Teniendo en cuenta que existe la excepcionalidad de la defensa técnica en lugares donde los abogados son escasos, y los procesos de ventilan frente a un juez quien como tercero imparcial aplica el derecho ¿Podría existir la excepcionalidad de la defensa técnica en los procesos por faltas al ser acciones de poca reprochabilidad?	SI	38	61%
	NO	24	39%
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de marzo del 2018*

**GRAFICO N° 17**



TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL  
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

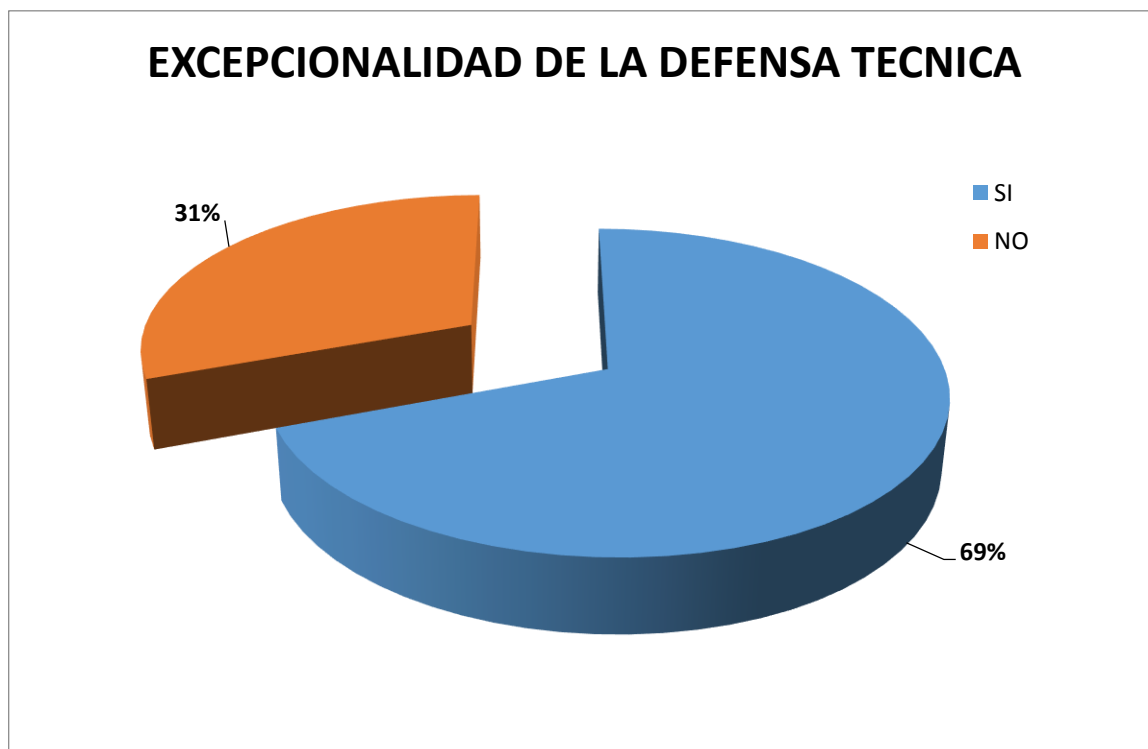
Total de encuestados: 62 personas

**CUADRO N° 18: EXCEPCIONALIDAD DE LA DEFENSA TECNICA**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Según su opinión, ¿Cree Ud. que debería plantearse la figura de la excepcionalidad de la defensa técnica en los procesos por faltas, al ser delitos de bagatela?	SI	43	69%
	NO	19	31%
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de marzo del 2018*

**GRAFICO N° 18**



Los datos extraídos en la presente investigación fueron divididos en un grupo denominado: **“Encuestas Aplicadas a los Operadores de Derecho del distrito judicial de Lambayeque”**, el cual consta de ocho cuadros: así de la **“TABLA N° 01:**

**POBLACIÓN SEGÚN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 2° JUZGADO DE JLO, CONCILIADOS”**, donde se observa que las conciliaciones en los Procesos de Faltas se dan con mayor fluidez en las Faltas contra la Persona en su modalidad de Lesiones Dolosas y con menor incidencia en las Lesiones Culposas, en el Distrito de José Leonardo Ortiz.

En la **TABLA N° 02: “POBLACIÓN SEGÚN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 9° JUZGADO DE CHICLAYO, CONCILIADOS”**, se observa que las conciliaciones en los Procesos por Faltas se dan con mayor incidencia en las Faltas contra la Persona en su modalidad de Lesiones Dolosas y con menor incidencia en otros tipos de Faltas, en el Distrito y Provincia de Chiclayo.

En cuanto a los desistimientos, así en la **TABLA N° 3: “POBLACIÓN SEGÚN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 2° JUZGADO DE JLO, DESISTIMIENTOS”**, donde se puede apreciar que los desistimientos en los Procesos de Faltas se dan con mayor fluidez en las Faltas contra la Persona en su modalidad de Lesiones Dolosas y con menor incidencia en las Lesiones Culposas, en el Distrito de José Leonardo Ortiz.

En la **TABLA N° 4: “POBLACIÓN SEGÚN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 9° JUZGADO DE CHICLAYO, DESISTIMIENTOS”**, se observa que los desistimientos en los Procesos de Faltas se dan con mayor fluidez en las Faltas contra la Persona en su modalidad de Lesiones Dolosas y con menor incidencia en otras, en el Distrito y Provincia de Chiclayo.

En la **TABLA N° 5: “POBLACIÓN SEGÚN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 2° JUZGADO DE JLO, CONCILIADOS -REPARACIÓN CIVIL”**, se observa que las conciliaciones celebradas en los Procesos de Faltas son mayormente sin reparación civil, en el Distrito de José Leonardo Ortiz, esto es, las partes logran resolver el conflicto sin ánimo de lucro.

Por otro lado, el **TABLA N° 6: “POBLACIÓN SEGÚN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 9° JUZGADO DE CHICLAYO, CONCILIADOS -**

**REPARACIÓN CIVIL**”, se observa que las conciliaciones celebradas en los Procesos de Faltas son mayormente sin reparación civil, en el Distrito y provincia de Chiclayo; De lo que se advierte que las partes buscan resolver el conflicto de manera armoniosa.

Sobre las faltas contra la persona, la **TABLA N° 7: “POBLACIÓN SEGÚN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 2° JUZGADO DE JLO, DESISTIMIENTOS**”, se observa que los desistimientos en los Procesos de Faltas son mayormente tácitos, en el Distrito de José Leonardo Ortiz, esto es, que la parte agraviada no concurre a la audiencia de juico y el proceso se da por desistido.

Luego la **TABLA N° 8: “POBLACIÓN SEGÚN FALTAS CONTRA LA PERSONA EN EL 9° JUZGADO DE CHICLAYO, DESISTIMIENTOS**”, se observa que los desistimientos en los Procesos de Faltas son mayormente tácitos, en el Distrito y Provincia de Chiclayo, esto es, que la parte agraviada no concurre a la audiencia de juico y el proceso se da por desistido.

Los datos extraídos en la presente investigación fueron divididos en un grupo denominado: **“Encuestas Aplicadas a los Operadores del Derecho del Distrito judicial de Lambayeque”**, el cual consta de 18 preguntas, cuyos resultados serán expuestos mediante cuadros y gráficos, así del **“CUADRO N° 01: CONCEPTO DE FALTAS”**, donde se le pregunto a los encuestados según su opinión ¿Cuál es el concepto más adecuado para las faltas?, de lo cual se desprende que de una población muestral de 62 personas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se tiene que un 52% del total de encuestados señaló que son injustos menores a los que les conciernen sanciones más leves, y están referidas a vulneraciones a bienes jurídicos, de menor intensidad; para el 34% de los encuestados, conceptualizan a las faltas como aquellos actos ilícitos penales que lesionan los derechos personales, patrimoniales y otros pero que debido a su menor lesividad de bienes jurídicos no constituyen delitos; y solo un 14% de la población encuestada, lo conceptualiza como delitos veniales y, por consiguiente, entre ella y el delito propiamente dicho, no hay diferencia cualitativa, como se pretende sino meramente cuantitativa, lo cual todo lo dicho queda demostrado con el **GRÁFICO 1**.

En el **“CUADRO N° 02: LA ESPECIALIDAD DEL PROCESO POR FALTAS”**, que contiene la interrogante: ¿Qué hace especial al proceso especial por faltas?, donde se muestra que de un total de 62 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, el 66% del total de los encuestados indicó que su especialidad radica porque sus actos ilícitos no constituyen delitos, por su parte un 27%

conformado por 17 encuestados, considera que su especialidad es porque las penas a imponerse son más leves; y, finalmente el restante 7% de los encuestados, consideran que su especialidad radica por ser un proceso donde se ventilan casos de injustos menores, lo cual todo lo dicho queda demostrado con el GRÁFICO 2.

Ahora bien, un tema abordado en la presente investigación es sobre los tipos de sanciones que se aplican ante la comisión de un hecho tipificado como faltas en nuestro ordenamiento, así el **“CUADRO N° 03: TIPOS DE SANCIONES”**, muestra que ante

la pregunta *¿Qué tipos de sanciones se imponen ante la comisión de las faltas?*, donde dentro de una población muestral de 62 personas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se tiene que el 42% de los encuestados considero que las sanciones que más se imponen ante la comisión de las faltas son las multas, por su parte el 32% de los encuestados indicó que las sanciones que más se imponen son la prestación de servicios comunitarios; y el restante 26% de los encuestados, opino que la inhabilitación también son una de las sanciones que se imponen ante la comisión de faltas. Lo dicho anteriormente se corrobora con el GRÁFICO 3.

En ese sentido, sobre las sanciones que se imponen y su posible vulneración a los derechos de las personas, en el **“CUADRO N° 04: LAS SANCIONES Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES”**, se desprende que de una población de 62 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, para el 76% de los encuestados consideran que las sanciones que se imponen ante la comisión de las faltas, NO ponen en riesgo algún derecho fundamental, por su parte, un 24% indicó que SI podría ponerse en riesgo algún derecho fundamental, lo anteriormente indicado se muestra a través del GRÁFICO 4.

Sobre la congestión procesal en los juzgados generado por los procesos por faltas, en el **“CUADRO N° 05: EL PROCESO POR FALTAS Y SU CONGESTIÓN PROCESAL”** que contiene la pregunta: *¿Considera que los procesos por faltas generan congestión procesal?*, dirigida a 62 personas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se tiene que para el 79% de los encuestados SI generaría congestión procesal en los juzgados y el otro 21% restante indicó que NO generan congestión procesal, lo cual se verifica con el GRÁFICO 5.

Por otro lado, el **“CUADRO N° 06: TIEMPO QUE DEMORA UN PROCESO**

**POR FALTA**”, atendiendo a la experiencia de los 62 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se les preguntó: ¿Cuánto podría demorar un proceso por faltas?, deprendiéndose que para el 23% del total de los encuestados, considera que los procesos por faltas, podrían demorar alrededor de 3 meses, por su parte el 58% de los encuestados opinó que este tiempo fluctuaría entre los 6 meses, mientras que el 19% de los encuestados opinan que el proceso podría demorar hasta 9 meses en su tramitación, lo cual se corrobora con el GRÁFICO 6.

Sobre la conclusión del proceso, el **“CUADRO N° 07: FORMAS PARA DAR POR CONCLUIDO UN PROCESO POR FALTAS”**, que contiene la interrogante: ¿Cuál es la forma más usada para la terminación de un proceso por faltas?, de una población encuestada entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque se tiene que para el 61% de los encuestados consideran que la forma más usada de terminación de un proceso es mediante la conciliación, mientras que el 21%, indicó que el abandono del proceso también es una de las formas recurrentes de dar por terminado un proceso; y finalmente el 21% de los encuestados opinaron que la forma de concluir el proceso es mediante el juicio. Siendo que lo dicho anteriormente queda demostrado con el GRÁFICO 7.

Luego se consultó a un total de 62 personas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, sobre el concepto de conciliación, resultando que el **“CUADRO N° 08: CONCEPTO DE CONCILIACIÓN”**, nos muestra que para el 37% del total de encuestados entiende que la conciliación es el acuerdo o avenencia de partes que mediante renuncia, allanamiento o transacción, hacen innecesario el litigio pendiente o evitan el litigio eventual para el 32% indicó que la conciliación es un *mecanismo alternativo para la solución de conflictos* y para el 31% precisó que la conciliación es una forma de solucionar un problema entre dos o más partes imparciales, quedando todo lo explicado, corroborado con el GRÁFICO 8.

De otro lado, el **“CUADRO N° 09: MOMENTO PARA LA CONCILIACIÓN”**, atendiendo a un total de 62 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, para el 63% entiende que la conciliación se puede realizar en cualquier momento, por su parte el 26% considera que la conciliación se da antes del juicio; y el 11% indicó que la conciliación en los procesos por faltas se da después de la primera notificación. Lo mostrado por el presente cuadro queda corroborado con el GRÁFICO 9.

Por su parte, el **“CUADRO N° 10: LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN”**, que contiene la interrogante: *¿Quién puede solicitar a que las partes participen de una conciliación?* Y de una población encuestada de 62 personas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque el 70% de los encuestados considera que son las mismas partes del proceso las encargadas de solicitar la conciliación; mientras que para otro 19% de los encuestados considera que es el juez quien debe invitar a las partes a conciliar; y el restante 11% mencionó que son los abogados en defensa de los derechos de sus patrocinados, son los encargados de solicitar la conciliación en los procesos por faltas.. Demostrándose lo hasta aquí explicado con el GRÁFICO 10.

En el **“CUADRO N° 11: LA DEFENSA TÉCNICA”**, donde la interrogante es: *¿Considera Ud. que siendo el juez conocedor del derecho, podrían ser solo las partes sin necesidad de la defensa técnica (abogado) quienes defiendan sus intereses?*, de donde se desprende que para el 68% del total de encuestados considera que SI podrían ser solo las partes sin necesidad de la defensa técnica (abogado) quienes defiendan sus intereses, mientras que un 32% indicó que NO podrían ser solo las partes sin necesidad de la defensa técnica (abogado) quienes defiendan sus intereses. Lo dicho anteriormente se encuentra respaldado con el GRÁFICO 11.

Se consultó a un total de 62 personas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, sobre el concepto de conciliación, resultando que el **“CUADRO N° 12: INTERESES DE LAS PARTES”**, donde la interrogante es: *¿Según su criterio porque se requiere de la presencia de un abogado en una conciliación, si son las partes quienes decidirán sobre sus propios intereses?*, nos muestra que para el 40% del total de encuestados considera que se requiere de la presencia de abogados debido al derecho de defensa, para el 36% consideran que se requiere de la presencia de un abogado porque así lo requiere la norma y para el 24% precisó que se requiere de la presencia de un abogado por mero formalismo, quedando todo lo explicado, corroborado con el GRÁFICO 12.

De otro lado, el **“CUADRO N° 13: LA AUTODEFENSA”**, atendiendo a un total de 62 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, ante la interrogante *¿Se podría ejercer el derecho a la defensa mediante la autodefensa?* donde para el 71% entiende que SI se podría ejercer el derecho de defensa mediante la autodefensa, por su parte el 29% considera que NO se podría ejercer el derecho. Lo mostrado por el presente cuadro queda corroborado con el GRÁFICO 13.



Por su parte, el **“CUADRO N° 14: LA DEFENSA TÉCNICA”**, que contiene la interrogante: Teniendo en cuenta el costo-beneficio de las partes dentro de un proceso por faltas ¿Podría existir un desmedro económico a las partes debido a la presencia de un abogado cuyos honorarios superarían la cuantía del proceso? Y de una población encuestada de 62 personas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque el 82% de los encuestados considera que SI podría existir un desmedro económico a las partes debido a la presencia de un abogado cuyos honorarios superarían la cuantía del proceso; mientras que para otro 19% de los encuestados considera que es el juez quien debe invitar a las partes a conciliar; y el restante 11% mencionó que son los abogados en defensa de los derechos de sus patrocinados, son los encargados de solicitar la conciliación en los procesos por faltas.. Demostrándose lo hasta aquí explicado con el GRÁFICO 10.

En el **“CUADRO N° 11: LA DEFENSA TÉCNICA”**, donde la interrogante es:

Considera Ud. que siendo el juez conocedor del derecho, podrían ser solo las partes sin necesidad de la defensa técnica (abogado) quienes defiendan sus intereses? de donde se desprende que para el 68% del total de encuestados considera que SI podrían ser solo las partes sin necesidad de la defensa técnica (abogado) quienes defiendan sus intereses, mientras que un 32% indicó que NO podrían ser solo las partes sin necesidad de la defensa técnica (abogado) quienes defiendan sus intereses. Lo dicho anteriormente se encuentra respaldado con el GRÁFICO 11.

Sobre los intereses de las partes, la **TABLA N° 12: “INTERESES DE LAS PARTES”**, donde la interrogante es: *¿Según su criterio porque se requiere de la presencia de un abogado en una conciliación, si son las partes quienes decidirán sobre sus propios intereses?*, podemos observar que un 40% de la población encuestada conformada por 25 operadores de justicia, consideran que se requiere de un abogado en una conciliación por el derecho a la defensa, mientras que un 36% de los encuestados considera que se requiere de una abogado porque así lo requiere la norma y finalmente un 24% refiere que se necesita de la presencia de un abogado por mero formalismo. Lo expuesto se encuentra respaldado con el GRÁFICO 12.

En el **“CUADRO N° 13: LA AUTODEFENSA”**, donde la interrogante es: *¿Se podría ejercer el derecho a la defensa mediante la autodefensa?*, donde se desprende que para el 71% del total de encuestados considera que SI se podría ejercer el derecho a la defensa mediante la autodefensa, mientras que un 29% indicó que NO se podría

ejercer el derecho a la defensa mediante la autodefensa. Lo dicho anteriormente se encuentra respaldado con el GRÁFICO 13.

Sobre los intereses de las partes, la **TABLA N° 14: “LA DEFENSA TÉCNICA”**, donde la interrogante es: *¿ Podría existir un desmedro económico a las partes debido a la presencia de un abogado cuyos honorarios superarían la cuantía del proceso?*, podemos observar que un 82% de la población encuestada conformada por 51 operadores de justicia, consideran que SI podría existir un desmedro económico a las partes debido a la presencia de un abogado cuyos honorarios superarían la cuantía del proceso, mientras que un 18% de los encuestados considera que NO podría existir un desmedro económico a las partes debido a la presencia de un abogado pese a que sus honorarios superarían la cuantía del proceso. Lo expuesto se encuentra respaldado con el GRÁFICO 14.

En cuanto a la eficacia de la defensa técnica en los procesos y sus efectos en la administración de justicia, la **TABLA N° 15: “LA DEFENSA TÉCNICA Y LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA”**, donde la interrogante es: *¿Se estaría perjudicando a la administración de justicia?*, podemos observar que un 95% de la población encuestada, considerada como la parte mayoritaria de la población, conformada por 59 operadores de justicia, consideran que SI se estaría perjudicando a la administración de justicia debido a la inasistencia e irresponsabilidad de los abogados, mientras que un 5% de los encuestados considera que NO se podría perjudicar a la administración, ya que podría existir una reprogramación. Lo expuesto se encuentra respaldado con el GRÁFICO 15.

En la **TABLA N° 16: “AUDIENCIAS SIN DEFENSA TECNICA”**, donde la interrogante es: *¿Estaría el juez en la posibilidad de guiar una audiencia de conciliación sin menoscabar los derechos de alguna de las partes?*, observamos que un 85% de la población encuestada, conformada por 53 operadores de justicia, consideran que SI estaría el juez en la posibilidad de guiar una audiencia de conciliación sin menoscabar los derechos de alguna de las partes, mientras que un 15% de los encuestados, conformados por solo 9 operadores de justicia, considera que NO estaría el juez en la posibilidad de guiar una audiencia de conciliación sin menoscabar los derechos de alguna de las partes. Lo expuesto se encuentra respaldado con el GRÁFICO 16.

Así, en la **TABLA N° 17: “EXCEPCIONALIDAD DE LA DEFENSA TECNICA EN ACCIONES DE POCA REPROCHABILIDAD”**, donde la interrogante formulada es: Teniendo en cuenta que existe la excepcionalidad de la

defensa técnica en lugares donde los abogados son escasos, y los procesos de ventilar frente a un juez quien como tercero imparcial aplica el derecho *¿Podría existir la excepcionalidad de la defensa técnica en los procesos por faltas al ser acciones de poca reprochabilidad?*, observamos que un 61% de la población encuestada, consideran que SI podría existir la excepcionalidad de la defensa técnica en los procesos por faltas al ser acciones de poca reprochabilidad, mientras que un 39% de los encuestados, conformados por 24 operadores de justicia, considera que NO podría existir la excepcionalidad de la defensa técnica en los procesos por faltas al ser acciones de poca reprochabilidad. Lo expuesto se encuentra respaldado con el GRÁFICO 17.

En la **TABLA N° 18: “EXCEPCIONALIDAD DE LA DEFENSA TÉCNICA”**, donde se planteó la siguiente interrogante es: Según su opinión, ¿Cree Ud. que debería plantearse la figura de la excepcionalidad de la defensa técnica en los procesos por faltas, al ser delitos de bagatela?, observamos que un 69% de la población encuestada, conformada por 43 operadores de justicia, consideran que SI debería plantearse la figura de la excepcionalidad de la defensa técnica en los procesos por faltas, al ser delitos de bagatela, mientras que un 31% de los encuestados, conformados por 19 operadores de justicia, consideran que NO debería plantearse la figura de la excepcionalidad de la defensa técnica en los procesos por faltas, al ser delitos de bagatela. Lo expuesto se encuentra respaldado con el GRÁFICO 18.

## **2. DISCUSIÓN Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS**

De los resultados de la investigación que se realizó a los expedientes judiciales del Distrito Judicial de Lambayeque, se obtuvo datos como que la mayoría de expedientes (80%) sobre lesiones dolosas, se resolvieron mediante conciliación, mientras que otra forma de desistimiento se tradujo en desistimiento con un gran número de expedientes (70%), con el mismo tipo de faltas, esto es, las lesiones dolosas. Así mismo el tipo de desistimiento que mayormente (93.33%) se observó fue el desistimiento tácito.

Del mismo modo en cuanto a la reparación civil que se obtuvo mediante el análisis de los expedientes se observó que, la mayoría (66.67%) de los casos según las víctimas de las lesiones dolosas no obtuvieron reparación civil.

De los resultados de la investigación a través de la encuesta aplicada a jueces, fiscales y abogados del Distrito Judicial de Lambayeque se desprende que la posición dominante de los encuestados (52%) conceptualizó a las faltas como injustos menores a los que les

conciernen sanciones más leves, y están referidas a vulneraciones a bienes jurídicos, de menor intensidad. Por su parte, la mayor parte de los encuestados se inclinó (66%) en indicar que la especialidad de la que goza el proceso por faltas radica en que los actos cometidos mediante esta figura, no constituyen delitos.

Un tema abordado en la presente investigación es lo referente a las sanciones que se imponen ante la comisión de las faltas y si estas pueden poner en riesgo de alguna forma los derechos fundamentales de las personas sujetas a sanción. En ese sentido, se tiene que para el 76% mayoritario de los encuestados considero que las sanciones que se imponen ante la comisión de hecho tipificado como falta, no ponen en riesgo la vulneración de algún derecho fundamental. Con respecto a la congestión procesal que generan los proceso por faltas en los juzgados la posición mayoritaria de los encuestados (79%) indicó que los procesos por faltas si generarían congestión procesal provocando la demora en los casos en los que si ameritan un mayor tiempo para su solución. Y en cuanto al tiempo que se requiere para solucionar un proceso por faltas ante los juzgados del Distrito Judicial de Lambayeque, para la inclinación mayoritaria (58%) de los encuestados, conformados por 36 operadores de justicia, plantean que el tiempo en el que se da solución a un proceso por faltas seria de un promedio de 6 meses.

Por otro lado, se tiene que para mayoría de los encuestados (63%) considera que el momento para plantear un medio alternativo de solución de conflictos como lo es la conciliación, es en cualquier momento. Del mismo modo, el 70% de los encuestados señaló que quien puede solicitar que se plantee un medio alternativo de solución de conflictos como la conciliación en un proceso por faltas, serian las mismas partes involucradas, quienes teniendo interés para la pronta solución del conflicto, a fin de resguardar sus intereses, pueden plantearlo en cualquier momento del proceso.

Así también, para la posición mayoritaria de los encuestados (71%) expresa que el ejercicio de la defensa en los procesos por faltas teniendo en cuenta su poca reprochabilidad, podría darse mediante la autodefensa de las partes involucradas. Teniendo en cuenta la cuantía del proceso y la intervención de los abogados en este tipo de procesos, la mayoría de encuestados (82%) manifiestan que podría existir un desmedro económico de las partes, ante el requerimiento de defensa técnica, ello en relación a que sus honorarios podrían ser mayores que la cuantía del proceso.

En relación a la posibilidad de que el juez pueda llevar a cabo una audiencias sin presencia de defensa técnica, la posición mayoritaria (85%) de los encuestados consideran que el juez estaría facultado para guiar una audiencia en un proceso por faltas sin menoscabar ni vulnerar

el derecho de las partes, debido no solo a la poca reprochabilidad del hecho tipificado como falta, sino también al conocimiento del juez y que este no permitiría la afectación de alguna de las partes. Y finalmente, la posición mayoritaria (69%) de los encuestados indicó que debería plantearse la figura de la excepcionalidad de la defensa técnica en los procesos por faltas, al ser hechos de poca reprochabilidad y cuya acción u omisión que constituye el tipo no son consideradas delitos.

En consecuencia, la hipótesis se ha contrastado, confirmándola, en primer término con la opinión especializada de juristas nacionales y extranjeros quienes entienden, también que la intervención de la defensa técnica en los procesos por faltas conllevaría no solo un menoscabo económico para las partes, debido a que el costo de los honorarios de los abogados podrían fluctuar en un monto mayor a la cuantía del proceso, ello sumado a que las faltas no son delitos y su reprochabilidad es mínima, por cuanto la presencia de un abogado sería casi innecesaria, teniendo en cuenta la presencia de un juez, quien como tercero imparcial y conocedor del derecho, podría velar por los intereses de las partes en una conciliación, donde serían las mismas partes quienes defenderían sus intereses.

Los casos analizados sobre las faltas y su terminación mediante conciliación confirman nuestra hipótesis; la necesidad de regular las Precisiones jurídicas a la excepcionalidad de la defensa técnica en las conciliaciones de los procesos por faltas. De otro lado, se infiere que de los resultados de las respectivas encuestas a jueces, fiscales y abogados del Distrito Judicial de Lambayeque nos dan la razón en cuanto a la propuesta de la investigación.

### **3. PRESENTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO**

#### **PROYECTO DE LEY**

#### **“LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 484° INCISO 1 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL”**

LEY N°...

#### **1. OBJETO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA:**

La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 484°, inciso 1, del código procesal penal que regula, La audiencia se instalará con la presencia del imputado y su defensor, y de ser el caso, con la concurrencia del querellante y su defensor. Si el imputado no tiene abogado se le nombrará uno de oficio, salvo que en el lugar del juicio no existan abogados o éstos resulten manifiestamente insuficientes. Las partes, sin perjuicio de lo dispuesto en el

numeral 5) del artículo anterior, podrán asistir acompañados de los medios probatorios que pretendan hacer valer.

## **2. Fundamento de la propuesta legislativa-**

### **Exposición de motivos:**

Se propone la modificación del artículo 484, inciso 1 del código procesal penal la celebración de la audiencia en un proceso por faltas, que establece que “La audiencia se instalará con la presencia del imputado y su defensor, y de ser el caso, con la concurrencia del querellante y su defensor. Si el imputado no tiene abogado se le nombrará uno de oficio, salvo que en el lugar del juicio no existan abogados o éstos resulten manifiestamente insuficientes. Las partes, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 5) del artículo anterior, podrán asistir acompañados de los medios probatorios que pretendan hacer valer”, habiendo la necesidad de modificarlo, con la finalidad de obtener un contenido normativo adecuado al desarrollo integral de la sociedad.

Esta propuesta se sustenta en el hecho que si bien el derecho de defensa es uno de los derechos fundamentales, donde una de sus formas de ejercerlo es la autodefensa, mas aun en casos como los procesos por faltas, donde debido a la mínima reprochabilidad del hecho; la desproporcionalidad entre los honorarios de los abogados y a cuantía del proceso, donde existiría una afectación económica a las partes; sumado a que una de sus formas de conclusión más recurrida es la conciliación, puede hacer factible la autodefensa de las propias partes en la audiencia de conciliación, donde estará el juez quien como conocedor del derecho no permitirá la afectación o vulneración de los intereses de las partes.

Pero para que este contenido normativo tenga sustento es necesario modificar el contenido del Código Procesal Penal, con la finalidad de alcanzar una adecuada actuación en el marco de la seguridad ciudadana, sin menoscabar el contenido esencial del derecho a la defensa.

Así mismo, mediante la encuesta realizada a la muestra poblacional constituida por los jueces, fiscales y abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, considera que es necesario que se regule las precisiones jurídicas a la excepcionalidad de la defensa técnica legal en la conciliación que se plantean en los procesos por faltas, para evitar la afectación económica de las partes.

## **3. Texto del proyecto de ley**

### **3.1. DEROGACION LEGAL:**

***“Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 484°, inciso 1, del Código Procesal Penal Peruano, en los siguientes términos:***

<<**Art. 484º, inciso 1.-**La audiencia se instalará con la presencia del imputado y el querellante. Las partes, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 5) del artículo anterior, podrán asistir acompañados de los medios probatorios que pretendan hacer valer.

*Artículo 2º.- Deróguense todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente ley”.*

#### **4. Análisis del costo-beneficio**

El proyecto de ley, no irroga gasto público ya que su propósito es una adecuación normativa necesaria, y para lo cual el beneficio sería el establecimiento de una adecuada normativa según los estándares requeridos por la sociedad.

#### **4. CONCLUSIONES**

1. Los procesos especiales como los procesos por faltas tipificados en nuestro ordenamiento penal, al no ser considerados como delitos y tener poca reprochabilidad ante la sociedad, pueden ser sujetos a que su solución se dé mediante medios alternativos de solución de

conflictos, como la conciliación, beneficiando de esta forma la descarga procesal existente en los juzgados.

2. Los procesos que se tramitan en el 2º y 9º Juzgados de Paz Letrado especializados en Faltas, con competencia jurisdiccional para conocer de faltas del Distrito de José Leonardo Ortiz, de los datos obtenidos que se desprenden de la investigación realizada, se concluye que, los casos que se tramitan son lesiones dolosas y culposas, hurtos, daños entre otros y cuya conclusión del proceso se dio mediante conciliación o desistimiento de las partes, donde se podría deducir que ante la comisión y conclusión de estos hechos resulta innecesario el ejercicio de la defensa técnica, pudiendo ser las mismas partes quienes defiendan sus intereses, guiados por el juez para garantizar dicho proceso.
3. El derecho de defensa constituye uno de los derechos fundamentales dentro de los procesos, donde las partes exponen sus argumentos, a fin de ser oídos y proteger sus intereses, siendo un derecho que puede ser ejercido no solo mediante la figura de la defensa técnica, sino también mediante el ejercicio de la autodefensa, donde las mismas partes exponen y exigen sus derechos frente a los del otro, como los casos objeto de investigación en el presente trabajo.
4. De los casos analizados sobre las conciliaciones en los procesos por faltas se desprende que en la realidad chiclayana y a nivel nacional la necesidad de una defensa técnica figura de innecesaria y hasta generaría una afectación económica a las partes, por lo que sería necesario realizar precisiones a la excepcionalidad de la defensa técnica legal en los procesos por faltas, cuando la solución del conflicto llega mediante conciliación, en los juzgados del Distrito Judicial de Chiclayo.

## **5. RECOMENDACIONES**

1. Incorporar en nuestro ordenamiento penal, la figura de la excepcionalidad de la defensa técnica en las conciliaciones, en los procesos por faltas ante los juzgados, otorgándoles a las mismas partes la posibilidad de ejercer su derecho para defender sus intereses, mediante la autodefensa, toda vez que con la actual regulación no se prevé las facultades de los ciudadanos de defender su propios intereses sin la figura de la defensa técnica, produciendo muchas veces afectación para las partes, debido que al equiparar entre los honorarios de la defensa técnica y la cuantía del proceso, serian mayor el desmedro económico para las partes.



2. Debe modificarse el texto del Código Procesal Penal en su artículo 484°, inciso 1, del Código Procesal Penal en el sentido que todo ciudadano parte de un proceso de faltas donde la conclusión se dé mediante la conciliación pueda permitírsele ejercer su autodefensa, a fin de no perjudicarlo económicamente, teniendo en cuenta el costo de los honorarios de los abogados y la cuantía del proceso y también tener en cuenta la mínima reprochabilidad de los injustos, que incluso no constituyen delitos. En tal sentido, la propuesta modificatoria queda redactada de la siguiente manera: **“La audiencia se instalará con la presencia del imputado y el querellante. Las partes, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 5) del artículo anterior, podrán asistir acompañados de los medios probatorios que pretendan hacer valer”**.

## 6. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA:

- ARMENTA, TERESA (1991), "Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad: Alemania y España.PPU, Barcelona.
- BECERRA, Dayana (2009), "La conciliación preprocesal en el sistema penal acusatorio y sus principales aportes". Universidad Militar Nueva Granada. Volumen XII. N° 24. Bogotá, D.C. Colombia.
- BERNALES BALLESTEROS, Enrique (1993), "La Constitución de 1993. Análisis comparado. Constitución y Sociedad". ICS. Tercera edición. Lima.
- BOLIVAR LONDOÑO, Catalina y Gloria Estrella COLORADO BARRERA (2008), "La conciliación judicial en el derecho penal colombiano, en la ley 906 de 2004, y sus efectos frente al derecho de defensa". Universidad de Antioquia. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Medellín.
- BACIGALUPO, Enrique (1996), "Manual de Derecho Penal. Parte General". 3ª reimpresión, Temis, Santa Fe de Bogotá.
- BRAMONT ARIAS. Luis (1978), "Derecho Penal. Parte general". Tomo I. 3º Edición. Lima.
- CARRUITERO LECCA, Francisco y Mario Raúl GUTIERREZ CANALES (2006). "Estudio doctrinario y jurisprudencial a las disposiciones generales de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento del Código Procesal Constitucional, Ley N° 28237. Studio editores. Lima.
- CASTILLO CORDOVA, Luis (2007), "Los derechos constitucionales. Elementos para una teoría general. Palestra editores. Tercera edición Lima.
- CASTILLO CORDOVA, Luis (2006), "Comentarios al Código Procesal Constitucional. Título Preliminar y Disposiciones Generales". Tomo I. Palestra Editores. Lima.
- CASTILLO CORDOVA, Luis. (2009), "Coordinador. Estudios y jurisprudencia del Código Procesal Constitucional. Análisis de los procesos constitucionales y jurisprudencia artículo por artículo". Gaceta Jurídica. Primera edición. Lima.
- CHUNGA HIDALGO, Laurence (2009), "El tratamiento de las "Faltas" en el Código Procesal Penal de 2004. Dialogo con la jurisprudencia N° 134. Lima.
- CUELLO CALÓN, EUGENIO (1973), "Derecho Penal. Parte General, Editorial Brosh, Barcelona.
- FONTAN BALESTRA, CARLOS (1995), "Derecho penal. Parte especial", editorial AbeledoPerrot, Buenos Aires.

- GALVEZ VILLEGAS, TOMAS (1999), "La Reparación Civil en el Proceso Penal" Lima.
- GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio (2006), "Criminología, una introducción a sus fundamentos teóricos", 5ta., edición, San Marcos, Lima.
- GIMENO, VICENTE (2004), "Derecho Procesal Penal, Ed. Colex, Madrid.
- GOMEZ MENDOZA, GONZALO (2005), "Código Procesal Penal", Editorial Rodhas. Lima.
- GUERRERO PERALTA, Oscar Julián. (2004), "Las víctimas en el contexto del derecho procesal penal colombiano (perfiles comparativos)". La reforma del proceso penal peruano.
- HERNANDEZ, FREDDY (2012), "El Derecho de defensa". Publicada en la Revista Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. Tomo I. Perú.
- JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis (1949), "Las contravenciones o Faltas", Revista La Ley, Buenos Aires.
- JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis (1956), "Tratado de Derecho Penal- La Culpabilidad". T V, Edición Lozada, Buenos Aires.
- LANDA ARROYO, Cesar (2010), "Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional". Palestra Editores. Lima.
- LOPEZ GUERRA, Luis y otros. (1994), "Derecho Constitucional. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos". Volumen I. Tirant Lo Blanch. Valencia.
- MACHUCA FUENTES. Carlos (2011), "Faltas contra La integridad física y el patrimonio". Gaceta Jurídica. Primera Edición. Lima. Perú.
- MAIER, Julio (2003), "Derecho Procesal Penal Parte General", Tomo II, Editores del Puerto S.R.L, Primera Edición, Argentina.
- MESIA, Carlos (2004), "Exegesis del Código Procesal Constitucional". Gaceta Jurídica Primera edición. Lima.
- NAKAZAKI SERVIGON Cesar Augusto (2010), "El derecho a la defensa procesal eficaz. En el debido proceso. Estudios sobre derechos y garantías procesales". Gaceta Jurídica. Gaceta constitucional. Primera edición. Lima.
- NOVAK, Fabián y Sandra NAMIHAS (2004), "Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Manual para Magistrados y auxiliares de Justicia". Academia de la Magistratura. Lima.

- O'DONNELL, Daniel (1989), "Protección Internacional de los Derechos Humanos. Comisión Andina de Juristas. 2da. Edición. Lima.
- ORE GUARDIA, ARSENIO (1999), "Manual de Derecho Procesal Penal", 2º Ed., Editorial Alternativas, Lima.
- ORÉ GUARDIA, ARSENIO (2011), "Manual Derecho Procesal Penal", t. 1, Lima.
- PALACIOS DEXTRE, Darío y Ruth MONGE GUILLERGUA (2010), "El principio de oportunidad en el proceso penal peruano", Grijley, 2da. Edición, Lima.
- PALAZZO, FRANCESCO (2001), "Principio de última ratio e hipertrofia del derecho penal». Universidad de Florencia. Ediciones de la Universidad de Castilla- La Mancha, Ediciones Universidad Salamanca, Cuenca.
- ROBLES AGUIRRE, BONIFACIO (2009), "Derecho Penal. Parte General y Especial, 6º Edición, Editorial Universitaria, Abancay.
- SANCHEZ VELARDO, PABLO (1994), "Comentarios al Código Procesal Penal, IDEMSA, Lima.
- SAN MARTIN CASTRO, Cesar (2006), "Derecho Procesal Penal". Grijley. Tomo II. Lima.
- SALDAÑA BARRERA, Eloy Espinoza (2005), "Coordinador. Derechos Fundamentales y derecho procesal Constitucional". Juristas editores. Lima.
- VILELA CARBAJAL, Karla (2015) "Algunas cuestiones acerca de la ley de conciliación extrajudicial". ITA IUS ESTO. Perú.
- ZAVALA DE GONZALES, MATILDE (2014), "Tratado de daños a las personas: daños a la dignidad", t. I, Identidad, honor, intimidad, Edit. Astrea, Buenos Aires.

#### • **REFERENCIAS HEMEROGRAFICAS**

- CAROCA, ALEX (2002), "La defensa en el nuevo proceso penal", Revista chilena de derecho.  
Vol. 29 N°2. Chile.<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2650233.pdf>

#### • **REFERENCIAS LINGÜÍSTICAS**

- BENAVIDES VARGAS, ROSA RUTH (2002) "Problemática Jurídica de la conciliación en el Proceso Penal Peruano". En:  
[http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Human/Benavidez\\_V\\_R/Cap3.pdf](http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Human/Benavidez_V_R/Cap3.pdf)
- GARCIA, CARMELO (2017), "La conciliación preprocesal en la justicia penal". En:  
<https://legis.pe/conciliacion-preprocesal-justicia-penal/>.

PEÑA SANDOVAL, HARBEY, 2009, En:

[https://www.mediate.com/articles/procedimiento\\_conc\\_en\\_colombia.cfm](https://www.mediate.com/articles/procedimiento_conc_en_colombia.cfm)

TUDELA, ANDREE (2007), “La conciliación en el Perú”. En:

<https://es.scribd.com/document/387618/La-Conciliacion-en-el-Peru-Compilacion-Estudio-Introductorio>

SAN MARTIN CASTRO (2006) <http://derechopenalperu.blogspot.pe/2008/12/las-faltascontra-las-buenas-costumbres.html>.

<http://blog.pucp.edu.pe/blog/conciliacion/2011/01/06/reglamento-de-la-conciliacion-italiana/>.<http://freddyhernandezrengifo.blogspot.pe/2012/09/el-derecho-de-defensa-y-la-defensa.html>.

<http://www.vramosjorge.com.blogspot.pe/>.

[http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4\\_uibd.nsf/2E33AFF6E924E64E05257FE6006FB928/\\$FILE/procesos-especiales-nuevo-sistema-procesal-penal-peruano.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/2E33AFF6E924E64E05257FE6006FB928/$FILE/procesos-especiales-nuevo-sistema-procesal-penal-peruano.pdf).

<https://www.terragnijurista.com.ar/doctrina/detecnica.htm>